

# LA DEMOCRACIA DESMANTELADA:

APROXIMACIONES A LA  
DESDEMOCRATIZACIÓN DE VENEZUELA

ANDRÉS CAÑIZÁLEZ



**Media**ánálisis  
COMUNICACIÓN PARA LA DEMOCRACIA

*La democracia desmantelada*  
*Aproximaciones a la desdemocratización de Venezuela*

Andrés Cañizález (Autor)  
Universidad Católica Andrés Bello  
Montalbán. Caracas (1020). Apartado 20.3323

Diseño y Producción: **abediciones**  
Revisión y Corrección: Andrés Ramos  
Diseño: Verónica J. Alonso Suárez

© Universidad Católica Andrés Bello  
Primera edición 2022  
Hecho el Depósito de Ley  
Publicaciones UCAB  
Depósito Legal: DC2022000798  
ISBN: 978-980-439-067-8

Impreso en Venezuela  
*Printed in Venezuela*  
Por: Gráficas LAUKI, C.A.

Reservados todos los derechos.

No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información, ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado –electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.–, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

*Para mis hijos, con la esperanza de  
que puedan en algún momento disfrutar  
de una Venezuela democrática.*





### PRÓLOGO

EL JUEGO QUE NO PODEMOS PERDER

*Tomás Straka* ..... 9

### INTRODUCCIÓN

UN INTENTO DE MARCO CONCEPTUAL A PARTIR DE  
*CÓMO MUEREN LAS DEMOCRACIAS*

DE STEVEN LEVITSKY Y DANIEL ZIBLATT ..... 13

### PARTE 1: DE PÉREZ I A CALDERA II

CAPÍTULO 1 Un punto de partida: ¿cómo llamamos a esto? ..... 19

CAPÍTULO 2 El cierre del año 1974 ..... 23

CAPÍTULO 3 La corrupción a debate en 1975 ..... 27

CAPÍTULO 4 La indigestión económica de 1976 ..... 31

CAPÍTULO 5 La no justicia penal en 1978 ..... 35

CAPÍTULO 6 La democracia agotada en 1978 ..... 39

CAPÍTULO 7 Un año perdido en 1979 ..... 43

CAPÍTULO 8 Aquel viernes de 1983 ..... 47

CAPÍTULO 9 El rentismo como modelo fallido ..... 51

CAPÍTULO 10 1988 o el preludio de El Caracazo ..... 55

### PARTE 2: DE LA ILUSIÓN DE ARMONÍA A LA REVOLUCIÓN BONITA

CAPÍTULO 11 Las señales que nadie quería ver en 1988 ..... 61

CAPÍTULO 12 Tres administraciones en retroceso económico ..... 65

CAPÍTULO 13 Un sistema de justicia fallido ..... 69

CAPÍTULO 14 ...y el cambio tenía que ser radical ..... 73

CAPÍTULO 15 En 1998, viaje al fondo del pragmatismo ..... 77

CAPÍTULO 16 *Boom* y recesión precedieron al chavismo ..... 81

CAPÍTULO 17 Los vientos de cambio en 1998 ..... 85

CAPÍTULO 18 La desigualdad como fracaso ..... 89

CAPÍTULO 19 Una democracia popular impuesta “desde arriba” ..... 93

CAPÍTULO 20 Un débil marco institucional del Estado como problema ..... 97

**PARTE 3:**

**DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA A LA DEMOCRACIA DESMANTELADA**

CAPÍTULO 21	El adiós al puntofijismo .....	103
CAPÍTULO 22	La fantasía populista.....	107
CAPÍTULO 23	El desafío de construir la oposición.....	111
CAPÍTULO 24	El referendo manipulado.....	115
CAPÍTULO 25	“Por amor”... o el populismo a fondo.....	119
CAPÍTULO 26	El chavismo como respuesta no democrática .....	123
CAPÍTULO 27	El Estado Comunal .....	127
CAPÍTULO 28	La industrialización de Venezuela: una deuda del sistema político .....	131
CAPÍTULO 29	La deuda social, ayer y hoy.....	135
CAPÍTULO 30	Los desafíos de 1999 a los que no se dio respuesta.....	139

**A MODO DE EPILOGO:**

LA EROSIÓN DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA SEGÚN

EL LIBRO *CÓMO MUEREN LAS DEMOCRACIAS*..... 143

**REFERENCIAS**..... 149

## Prólogo



### EL JUEGO QUE NO PODEMOS PERDER

TOMÁS STRAKA

Hay una verdad incómoda con la que debemos lidiar: la democracia parece estar perdiendo el juego. Contrariamente a lo que soñamos a finales del siglo pasado cuando el fin de casi todas las dictaduras latinoamericanas, la caída del Muro de Berlín y la supresión del *apartheid* hacían pensar en el triunfo definitivo de los regímenes de libertad, en los últimos años hemos asistido al surgimiento de **hiperliderazgos, autoritarismos competitivos, neodictaduras, iliberalismos, autocratizaciones** y muchas otras categorías con las que los especialistas han definido al proceso. En los lugares menos pensados, como la Unión Europea o los mismísimos Estados Unidos, movimientos y dirigentes antidemocráticos obtienen cada vez más votos, forman parte de coaliciones, influyen en las redes sociales y los medios tradicionales. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han hecho un *best seller* nada menos que de su análisis de la situación estadounidense. Además, en otras regiones, vemos a una China cada vez más poderosa, a una Corea del Norte con “póliza de seguro nuclear”, a una Rusia que sigue apostando a lo grande –aunque tal vez con más entusiasmo que fuerza–. Por otra parte, si bien el Estado Islámico fue militarmente derrotado en Siria e Irak (al menos por ahora), en Afganistán los talibanes hicieron marcharse, una vez más, a los ejércitos más poderosos del mundo. Basta repasar el elenco de estos regímenes en expansión para ver la dimensión de lo que está en juego, así como todo lo que implicaría perderlo. Es uno de esos juegos terribles que no se pueden perder.

En este contexto, el caso venezolano cobra notable importancia. La “muerte” de su democracia nacida en 1958 merece estudiarse con atención. El propósito de ello no solo sería comprender en específico la suerte –tan llena de altibajos– del país, sino también analizar el fenómeno más amplio de la **desdemocratización** a partir de datos muy ilustrativos, como se constatará en esta obra. Venezuela ha tenido un desarrollo bastante autónomo con respecto a las olas de expansión o contracción de la democracia. Fundó la suya en 1958 cuando el continente se llenaba de dictaduras; en los siguientes quince años, se convirtió en un laboratorio de Occidente durante

la Guerra Fría, siendo incluso considerada como la prueba de que las teorías de la modernización de Rostow funcionaban; desempeñó un papel clave en el combate al comunismo, teniendo el éxito más rápido del mundo en la historia de la contrainsurgencia; alcanzó logros sociales y económicos notables; abatió epidemias; masificó la educación; electrificó el país; construyó represas y autopistas; consolidó una clase media. Alcanzó todos estos logros en momentos cuando sus países vecinos – con algunas excepciones – apenas podían soñar con ellos.

No obstante, para finales del siglo XX, el sistema había perdido fuelle: el modelo económico entró en un callejón sin salida; se duplicó la pobreza, mientras que las instituciones comenzaron a erosionarse; los escándalos de corrupción, disturbios y golpes de Estado reaparecieron como fantasmas que esperaban agazapados a la mejor oportunidad para volver. Finalmente, en 1998 la sociedad votó mayoritariamente por un candidato antisistema, en sucesivas elecciones le entregó todo el poder, aplaudió cada medida que desmontaba lo existente y adoptó su propia narrativa, incluso en casos a contracorriente de la experiencia. En 2007 se fue más allá y se adoptó de manera oficial el socialismo, en una versión mucho más radical que cualquier otra de la Marea Rosa que en el resto de América Latina matizaba (en realidad solo eso: matizaba) las reformas neoliberales de la década anterior. El socialismo bolivariano fue una especie de versión *light* de los socialismos reales de Europa Oriental, un poco más libre que el **Socialismo Goulash**, aunque en otros aspectos era básicamente similar a los socialismos africanos. La bonaza petrolera de 2004 a 2010 (quizá hasta 2011) permitió que la ola de estatizaciones y controles no detuviera el crecimiento y aumento de la capacidad adquisitiva de los más pobres; pero muy pronto, el **Socialismo Bolivariano** entró en la misma crisis de los otros socialismos reales de la década de 1980. Siguió la bancarrota, la recesión registrada más grande de la historia y, como consecuencia, una de las peores crisis migratorias del mundo. Entretanto, las posibilidades de un cambio político por vía electoral se fueron estrechando hasta casi desaparecer “¿Qué pasó?”, se preguntaron todos en derredor, también se preguntaron cada vez más venezolanos crecientemente atemorizados de lo que habían hecho.

Por eso, pocos temas podían resultar más pertinentes y urgentes cuando, en el Instituto de Investigaciones Históricas “Hermann González Oropeza, s.j.”, de la Universidad Católica Andrés Bello (IIH UCAB), decidimos iniciar un proyecto de investigación sobre la desdemocratización venezolana en 2017. En retrospectiva, ese año quedó marcado en la memoria de los venezolanos como uno de los peores vividos jamás: mientras los anaqueles estaban vacíos, la gente protagonizaba un verdadero

éxodo a los países vecinos; la convocatoria a un referéndum revocatorio sobre el mandato presidencial fue suspendida por unos tribunales cuya competencia para ello está en entredicho según la opinión de muchos; hubo alrededor de 90 días de protestas con un saldo inquietante de víctimas. La idea inicial fue estudiar la última cuarta parte del siglo XX para comprender la manera cómo lo que parecía ser la democracia modelo y el éxito de Occidente en la Guerra Fría caribeña había encallado en el Socialismo Bolivariano. Basta oír cualquier conversación en la calle, en la barbería, en el metro o en un bar, o hacer una incursión en las procelosas aguas de las redes sociales, para ver cuán confundidos, tristes o enojados estábamos –y en gran medida seguimos estando–. No hay una conciencia clara de cómo llegamos adonde estamos, lo que es un verdadero obstáculo para tomar decisiones asertivas. Sin un diagnóstico mínimamente aproximado a los hechos, es imposible prescribir cualquier remedio.

En el año académico 2018-2019, la primera fase del proyecto convocó a varios investigadores de la UCAB y de otros centros, como la Universidad Metropolitana (Unimet) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). La magnitud de la tarea ante nosotros obligaba a ser moderado en los objetivos: en un principio, recoger y sistematizar lo que en multitud de trabajos se venía haciendo desde al menos 1980. Si bien no se logró la visión coherente y homogénea que hubiéramos soñado, sí se publicaron algunos trabajos en revistas arbitradas e indizadas; se presentó lo que podemos llamar un informe seminal, a modo de capital semilla para futuras investigaciones, ante la instancia que financió el proyecto; y se organizó un concurridísimo evento con el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB; pero es inocultable que se trataba de un abreboca, de algo muy, pero muy preliminar; sobrevino la pandemia de la COVID-19, una estancia en el exterior de uno de los miembros, la salida de la universidad de otros dos, la promoción a diversos puestos de otros... una cotidianidad llena de responsabilidades. En fin, el grupo se dispersó y retomar el hilo no ha sido fácil. Sin embargo, el capital semilla de lo hecho entonces cayó, como en el aserto evangélico, en tierra buena. Este libro es la demostración de ello.

Andrés Cañizález, comunicador con formación en politología e historia, trabajó en el proyecto escudriñando los informes, los análisis y las noticias que publicó la revista *SIC* durante el periodo abarcado por la investigación. Al igual que los demás trabajos, se trató de una primera aproximación, con el alcance de un primer paso, que será mayor o menor según otros sucesivos; pero la idea general le quedó dando vueltas en la cabeza. Así comenzó a publicar una serie de artículos sobre el tema en la revista digital del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, *Politika*

UCAB<sup>1</sup>. Esta especie de folletón sobre el declive y colapso de la otrora “democracia modelo” repasaba hechos y circunstancias que muchos habían olvidado, o recuerdan muy parcialmente, o que son del todo desconocidos para los más jóvenes. Aquellos ensayos en clave de crónica se desarrollaron con mayor rigor metodológico en referencias, detalles, análisis, hasta convertirse en el libro que estas líneas prologan. *La democracia Desmantelada: Aproximaciones a la Desdemocratización de Venezuela* ofrece un recorrido de lo que fue el país entre 1974 y los primeros años del siglo XXI. Cada aproximación es una especie de recorrido escrito con pulso de periodista, pero alcance de historiador, que aborda casos, narra un proceso, o hace un breve análisis de algún tópico. Bien pueden leerse por separado a modo de crónicas; pero vistas en conjunto, dispuestas cronológicamente, revelan el panorama complejo y amplio de la crisis del modelo de Puntofijo y su sustitución por el chavismo.

Quien lea el libro adquirirá una opinión más informada de los afanes y agobios de nuestras últimas décadas; podrá ver los claroscuros de un proceso en el que se combinaron muchas cosas, se cometieron algunos de los errores más grandes que sociedad alguna haya cometido en su historia; pero también verá que hubo éxitos, ideas y ejecutorias con mucho mérito que, en muchos casos, al menos han evitado que las cosas sean peores; también podrá avanzar al margen de las propagandas y de los grandes esfuerzos de manipulación de nuestra memoria. En fin, podrá tomar decisiones más fundamentadas, o lo que es lo mismo: ser una mujer o un hombre más libre.

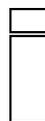
¿Acaso murió un sistema democrático, el de 1958, y la democracia en sí, como lógica global, ha ido siendo desmantelada? No, aún no ha muerto, especialmente en el seno de los valores de una sociedad. Si alguna oportunidad hay para el pleno restablecimiento de su salud, es la comprensión de lo que la llevó adonde está, el inventario de sus falencias y fortalezas, así como de las lecciones que pueden servir de referencia para marchar hacia el porvenir.

Ante la verdad incómoda de que el resto de las democracias del orbe están, unas más y otras menos, manifestando los síntomas del mal que minó la venezolana, la urgencia de estudios como el que se presenta es mundial. Es un juego que no podemos perder.

---

1 <https://politikaucab.net/>

# Introducción



## UN INTENTO DE MARCO CONCEPTUAL

### A PARTIR DE *CÓMO MUEREN LAS DEMOCRACIAS* DE STEVEN LEVITSKY Y DANIEL ZIBLATT

En 2018 fui invitado por el historiador Tomás Straka a participar de un proyecto, junto a otros investigadores, para mirar cómo había sido el proceso político e histórico previo a la llegada del chavismo al poder. El propio Straka, ahora director del IIH UCAB, tuvo el tino de denominar aquella iniciativa como una aproximación a la desdemocratización de Venezuela. Este libro tuvo su origen en aquellos encuentros e intercambios.

En *Cómo Mueren las Democracias* de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018), los autores se pasean por cómo se erosiona desde adentro el sistema democrático, cómo lo corroen figuras autoritarias que aprovechan las reglas de juego de la democracia para acceder al poder.

Esta erosión que describen los autores –podríamos decir el desmontaje de la democracia en nuestro país– es lo que hemos comenzado a llamar en diversos textos como el proceso de desdemocratización de Venezuela. Parafraseando el tono jocoso de Straka, no es que Hugo Chávez haya venido desde el planeta Marte al país, o de un día para otro la mayoría de venezolanos comulgó con sus propuestas y discurso por arte de magia.

En realidad, la llegada de Chávez al poder, el 2 de febrero de 1999, es el resultado de largos años en los cuales se fue macerando una identidad antisistema democrático en el corazón de los venezolanos.

Allí, como lo fue el chavismo en sus inicios, se tuvo una suerte de identidad difusa en la que entraron desde militantes de la vieja izquierda venezolana, con un persistente rencor contra “adecos y copeyanos<sup>2</sup>”, militares nacionalistas, bases populares que tras “pasar roncha” (i.e., sufrir tribulaciones) por década y media percibieron que ya no se le veía el “queso a la tostada” (i.e., no se obtenían beneficios)

---

2 Nota de Editor (N. del E.): sobrenombres para los activistas de Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), los dos partidos mayoritarios durante el periodo de democracia por conciliación de élites desde 1958 hasta 1998.

de aquel sistema bipartidista que emergió como fruto de una conciliación de élites en 1958.

En tal sentido, la desdemocratización tiene una doble cara en la historia reciente de Venezuela. En un aspecto, puede comprender una aproximación para contextualizar y explicar lo ocurrido, en particular en los quince años que precedieron a la victoria electoral de Chávez en diciembre de 1998.

El proceso que llevó, en 1998, a una mayoría de votantes a elegir al hombre que prometía darle una patada a la mesa y voltear el orden establecido debe ser analizado y escrutado ¿Qué ocurrió en la Venezuela prechavista de modo que se dieran las condiciones para un ascenso democrático del chavismo al poder?

Una segunda línea de reflexión está inserta en el propio ejercicio del poder por parte del chavismo. En la medida en que avanza el siglo XXI, Venezuela retrocede; los indicadores y clasificaciones de democracia y derechos humanos del mundo ubicaron al país como el último de la fila. En general, ahora Venezuela aparece junto a naciones arrasadas por la guerra como Yemen, Sudán o Siria, en las últimas posiciones de cualquier indicador relacionado con el desarrollo democrático o devastación económica.

Partiendo de ejemplos como el de Venezuela, Polonia y Hungría, Levitsky y Ziblatt sostienen que las democracias en la actualidad ya no son atacadas, como ocurría en el pasado, por golpes militares y otras usurpaciones del poder por medios violentos; hoy esto es en realidad infrecuente. Para los autores, desde el final de la Guerra Fría, son los propios gobiernos surgidos de elecciones los que conducen a los quiebres de las democracias. Hoy se les destruye desde adentro.

Un asunto central en la explicación del libro es la aparición de “demagogos extremistas” en los sistemas democráticos y el tipo de respuesta que el propio sistema y sus élites dan a estas figuras.

Levitsky y Ziblatt colocan, como referencias constates, dos casos sudamericanos que podrían estar en las antípodas desde el punto de vista ideológico: el ascenso de Hugo Chávez en Venezuela y el de Alberto Fujimori en Perú ¿Qué ocurrió en estos dos países sudamericanos? En esencia, los autores sostienen que fallaron las élites. Sin embargo, se soslaya el malestar social como elemento de crisis, un aspecto que Yanina Welp (2020) destaca a modo de crítica. En cambio, se cuestiona a las élites políticas por no haberse dado cuenta del peligro que encarnaban tales figuras.

Según los autores, tanto en Perú como en Venezuela se produjo “una combinación letal de ambición, temor y errores de cálculo”. Esto “conspiró para

conducirlos a cometer el mismo error fatídico: entregar voluntariamente las llaves del poder a un autócrata en ciernes”.

Levitsky y Ziblatt mantienen una lectura muy maniquea de los procesos políticos contemporáneos. Esta es otra crítica que compartimos con Welp en el sentido de que dividen al mundo en buenos y malos, tal como si se tratase de una película de Hollywood. Los primeros son representados por aquellos partidos políticos que actúan como guardianes de la democracia, logrando “mantener a raya a las personas autoritarias”, estos obviamente son los malos, personas autoritarias, psicológicamente propensas a acumular poder y saltarse las reglas.

En el libro devenido en *bestseller* de los académicos estadounidenses, se proponen cuatro indicadores para identificar qué tipo de político es propenso a destruir a un sistema democrático: a) rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas del juego; b) negación de la legitimidad de los adversarios políticos; c) tolerancia o fomento de la violencia y d) predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.

Inmersos en la discusión, pero con una mirada propia, Kapstein y Converse (2008) plantean una especie de clara línea amarilla para identificar a los eventuales enemigos de la democracia: aquellos líderes que, una vez alcanzan el poder, se enfocan en revertir las normas constitucionales vigentes. A juicio de estos autores, hay suficiente evidencia histórica que permite llegar a tal conclusión.

Una línea de reflexión de los autores gira en torno a la polarización como aspecto distintivo de los líderes demagógicos que buscan socavar el consenso democrático. No hay mucha preocupación en este texto sobre el papel de la ciudadanía. La figura del pueblo, como componente imprescindible para pensar en cualquier sistema libre, está notablemente ausente.

Visto desde países como Venezuela, donde ya la población asociaba democracia con calidad de vida antes de la llegada de Chávez a la escena pública, Welp reclama a los académicos un aspecto que nos parece crucial en esta lectura “desde el sur”: se resalta la libertad como valor supremo. Sin embargo, “¿de qué sirve la libertad si no se tiene salud o alimentos?”, se pregunta la investigadora. Kapstein y Converse, en tanto, sostienen que países más desiguales, naciones con mayores brechas sociales, son más propensos a vivir una erosión o incluso una reversión en su sistema democrático.

Junto a esto está el rol de las élites, no solo para contener a una amenaza contra la democracia, personificada en figuras como Chávez, Perón o Fujimori. En el libro

de Levitsky y Ziblatt escasea el cuestionamiento a las élites, no solo políticas sino intelectuales, por su papel en impedir la apertura y el funcionamiento efectivo de la democracia, o qué hicieron los que estaban en el poder para hacer menos desigual a la sociedad y de esa manera sostener al sistema democrático en el largo plazo.

Si se aplica este cuestionamiento a la realidad concreta Venezuela, por ejemplo, la pregunta no sería la que insisten en formular Levitsky y Ziblatt en torno a qué hicieron o dejaron de hacer las élites políticas y culturales en Venezuela para impedir el ascenso de Chávez. La pregunta de fondo es qué ocurrió con esas élites que no dieron respuesta a una insatisfacción arraigada en contra del sistema democrático, insatisfacción que finalmente encontró en Chávez una personificación.

Es menester complejizar el análisis, dotarlo de elementos que permitan abordar la realidad que se trata en esta obra. He aquí nuestro aporte en esa dirección.



# PARTE I

## De Pérez I a Caldera II



### ¿CÓMO LLAMAMOS A ESTO?

Al encontrarnos ante un nuevo fenómeno o eventos sorprendidos o impactantes, quizá ante un descubrimiento o una novedad, nos preguntamos “¿qué ocurrió?”, “¿de qué se trata?”, “¿cómo fue?”, “¿cómo llamamos a esto?”

Esto que nos pasó es que Venezuela, de ser una nación democrática ejemplo en la región, especialmente en los años 1970 y la primera parte de 1980, cuando en Sudamérica y Centroamérica cundían las dictaduras, se ha vuelto un país sumido en una crisis generalizada y un motivo de preocupación para la comunidad internacional.

Tampoco esto a lo que buscamos llamar de algún modo ha ocurrido de repente. No fue que en 2019 estábamos bien y, un año después, todo cambió para peor. Es necesario estudiar, sin apasionamiento, el proceso paulatino y hasta ahora indetenible de cómo el chavismo desmanteló el modelo democrático con el claro objetivo de perpetuarse en el poder.

Coloquemos en perspectiva el origen del chavismo y el reacomodo en su seno para acceder al poder, en un primer momento. Chávez obtiene poder siguiendo el guion democrático, no por su fallido golpe militar de 1992, sino que se convierte en jefe de Estado gracias a unas elecciones organizadas por la burocracia del *ancien régime*, bajo la premisa de que debía respetarse la voluntad popular.

Entre una y otra imágenes arriba descritas, parte de lo que nos proponemos es desmenuzar este cambio de realidades al plantear este foco de interés en el análisis sobre la realidad venezolana. Debemos ver la desdemocratización, el nombre que damos a esto, como un proceso político por naturaleza en un marco histórico con delimitaciones temporales que ya esbozaremos en los párrafos sucesivos.

Los términos “erosión democrática”, “autocratización” y “desdemocratización” han estado cobrando significado para atender la necesidad real de llamar a este proceso de índole política. Elegimos “desdemocratización” porque una democracia

erosionada sigue siendo tal y la autocratización apunta a un régimen autocrático como resultado. La desdemocratización en Venezuela puede derivar en diversos resultados, pues muestra orientaciones semiautoritarias, autocráticas, totalitarias y hasta anárquicas.

A tal fin, recurrimos a estas aproximaciones de diferentes latitudes para definir la realidad que nos ocupa en esta obra:

Para el politólogo, político y abogado catalán Josep Maria Vallès, desdemocratización es “un vocablo malsonante para designar una realidad amenazadora. Describe el retroceso democrático que puede afectar a los sistemas políticos” (2013, diciembre 12). Vallès hace este aporte en su análisis de la realidad española. A su vez, identifica a Charles Tilly como el estudioso que acuñó el término.

“En conjunto, la desdemocratización se produce en el transcurso de las respuestas de los gobernantes y las élites a lo que viven como crisis de régimen, representadas de forma más evidente por las amenazas a su propio poder”, nos explica el propio Tilly (2007), finado historiador y politólogo estadounidense. En su libro *Democracy*, caracteriza este fenómeno y proporciona indicadores a observar en un sistema político, siendo el contexto el capítulo dedicado a la India.

Ángel Sermeño (2021), docente e investigador de política en México, expone que la desdemocratización:

[...] se traduce tanto en un incremento de los márgenes de arbitrariedad e ilegalidad en el desempeño de los poderes públicos, como también en el debilitamiento de los esquemas constitucionales representativos que regulan las esferas legítimas de decisión de cada una de las instancias del poder político (ejecutivo, legislativo y judicial). (Sermeño, 2021)

Hay condicionantes identificadas por Behrouz Alikhani (2017). Este politólogo iraní y docente en Alemania advierte que “los procesos de desdemocratización pueden ganar fuerza si los recursos de poder de una sociedad son cada vez más monopolizados por un ‘sector’ e institución específicos o por un grupo de individuos influyentes.” Dicho aporte lo hace en el contexto de sus reflexiones sobre los Estados Unidos.

Distintos países y el mismo fenómeno, uno también ocurrido en Venezuela desde las últimas dos décadas del siglo XX hasta estas primeras dos del siglo XXI. El papel de los actores políticos del modelo de 1958 en propiciar el ascenso del chavismo, cuando cercenaron oportunidades de reforma democrática al sistema, y el rol del chavismo en un ejercicio del poder por el poder serán objeto de nuestro análisis.

En los próximos capítulos, revisaremos el retroceso democrático que afecta a los sistemas políticos, observado por Vallès, en el que recursos de poder están crecientemente monopolizados por sectores o individuos influyentes, según Alikhani. Por otra parte, examinaremos las respuestas de gobernantes y élites de nuestro país a la crisis de ver su propio poder amenazado, tal como notó Tilly.

Asimismo, observaremos los síntomas de esta desdemocratización en los niveles de arbitrariedad e ilegalidad, identificados por Sermeño, en los poderes públicos y el debilitamiento de los esquemas que rigen las ramas del poder público. De hecho, con el cambio de una constitución (1961) a otra (1999), de las tres divisiones clásicas (judicial, legislativo y ejecutivo), a pasamos a cinco (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano). Ello no trajo consigo mejora, sino lo contrario, en el desempeño democrático e institucional del Estado venezolano.

No haremos un relato formal quinquenios o sexenios, tampoco uno anecdótico de hitos históricos denominados por los venezolanos el Viernes Negro, El Caracazo, la Constituyente, el referéndum revocatorio de 2004 u otros. Nuestro análisis será de procesos: reformas diferidas al poder judicial y al Estado como un todo, cooptación de la participación ciudadana por la dinámica del bipartidismo y luego del culto a la personalidad, populismo y redistribución de la renta petrolera en la imaginación de los venezolanos con los consecuentes vaivenes en su nivel de vida, prácticas corruptas y autoritarias de antes y de ahora son los factores que nos ocupan.

Son nuestras aproximaciones a la desdemocratización de Venezuela en un periodo de 40 años. Es la crónica que nos proponemos hacer de nuestra democracia desmantelada.



## Capítulo 2

### EL CIERRE DEL AÑO 1974

Tradicionalmente se identifican los años 1983, 1989 y 1992 como los puntos de inflexión en el proceso paulatino de ruptura que vivió el modelo democrático de Venezuela. En perspectiva, el llamado Viernes Negro (crisis del mercado cambiario), El Caracazo (disturbios y saqueos contra medidas económicas austeras) y los dos fallidos golpes de Estado terminan siendo vistos sin duda como síntomas del fracaso del modelo económico o del malestar social.

Gracias al discurso de nuestra dirigencia, la palabra “democracia” en Venezuela se asoció no solo a derechos políticos y libertades, sino a una naturaleza redistributiva en la imaginación popular. Los signos que dejaban ver el naufragio del modelo estaban presentes mucho antes de los años señalados. Cuando se quiere analizar el punto de inflexión que vivimos como sociedad y como sistema político, que nos llevó por el camino de la derrota, debemos remontarnos al primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1989).

Podría parecer paradójico puesto que aquel gobierno de Pérez I se asocia con bonanza económica: hablamos de aquella “Venezuela Saudita” o la “Gran Venezuela”, solo que los gigantescos ingresos que recibió el país no fueron producto de su trabajo, sino que súbitamente llegó más plata por factores externos; el precio del petróleo se comenzó a disparar de la mano de la independencia que obtuvieron países productores, junto a una clara dependencia que vivía el mundo industrializado de los combustibles fósiles y la inestabilidad política en el Medio Oriente.

Durante una década, entre los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, entraron al país USD 145 mil millones. La élite política y económica de aquellos años no supo lidiar con tales ingresos, descomunales para los valores de la época y para las dimensiones que tenía entonces la economía de Venezuela. Ese es el detonante en cuenta regresiva de una crisis que explotaría años después.

En diciembre de 1974 advertía el jesuita Luis Ugalde, entonces director del Centro Gumilla y por aquellos años expulsado de la UCAB de la que luego sería rector, sobre el impacto negativo que tendría aquella riqueza salida de la nada en la gestión pública y empresarial.

“El exceso de recursos financieros (súbitamente multiplicados por tres) amenaza con hundir al país en una corrupción y despilfarro aún mayores. No hay capacidad empresarial de organizar el trabajo productivo”, se lamentaba Ugalde (1974).

Para Fernando Martínez Galdeano (1974), una comparación de lo ocurrido en materia económica entre el primer y el segundo año de la administración Pérez advertía sobre los riesgos de inyectar estos fondos en la dinámica económica. En términos nominales, el presupuesto nacional casi se había triplicado de un año a otro sin que la producción nacional en ninguno de sus ámbitos hubiese vivido un repunte así de gigantesco.

Los petrodólares inundaban las finanzas públicas. Con ello se acrecentó muy rápidamente la dependencia externa del país que, al pasar el tiempo, desnudaría una de las grandes fragilidades del modelo.

Los ingresos fiscales de la nación dependían del petróleo en 66% en 1972 y pocos años más tarde esta dependencia había crecido al 86%. Martínez Galdeano publicó dicho análisis en un artículo sobre estas diferencias en presupuesto nacional con el que se preparaba para 1975.

He aquí dos ejemplos de las contradictorias decisiones que se tomaron en 1974, el primer año del primer gobierno de CAP. Cuando se ven ambas, queda en evidencia que, por un lado, se repartía dinero a manos llenas; pero, por otro lado, no llegaba necesariamente a los más pobres. Surgió muy rápidamente una desigualdad social que años después incubaría el germen del cambio político drástico.

El gobierno perdonó todas las deudas del sector agrícola y pecuario en 1974. Además, abrió un fondo de inversión. Aquello en teoría buscaba incrementar la producción nacional. Martínez Galdeano describe aquello como una política indiscriminada de reparto de dinero sin establecer prioridades. Eran condiciones ventajosas: los primeros cinco años no se pagaban intereses y solo 3% a partir del sexto año, cuando la inflación era del 15% anual. Aquello generó una distorsión. “Hasta los mismos banqueros están especulando con las tierras con el fin de recibir los créditos”.

La otra cara de la moneda la presenta el propio Martínez Galdeano al señalar que la construcción de viviendas de interés social no estaba priorizada en las cuentas

públicas. Solo se esperaba construir 27.500 viviendas entre el entonces Banco Obrero y el Ministerio de Sanidad. “El sector construcción del presupuesto 1975 se orienta hacia otro tipo de edificaciones”, se lamentaba el jesuita.

En la campaña presidencial de 1978 ganó notoriedad la pregunta de Herrera Campins: “¿y dónde están los reales?” En el más emblemático comercial de dicha campaña, una agobiada y enérgica Carlota Flores, damnificada reubicada en Caucagüita junto a sus hijos, se quejaba de la falta de atención gubernamental. El lamento de aquella mujer era cierto, no era solo un ardid publicitario electoral como se le quiso descalificar desde las filas del gobernante partido AD, dado que Herrera Campins era candidato de COPEI y luego fue presidente en el periodo 1979-1984.

Habían pasado varios años desde que los damnificados del oeste de Caracas (Gramovén y La Silsa) había sido reubicados en Caucagüita. Ya en diciembre de 1974 la situación era dramática tal como lo reseñaba Carmelo Vilda:

[...] unos 7.000 niños prácticamente habían perdido el año escolar; en Caucagüita al momento apenas había un solo preescolar; muchos de los adultos habían perdido sus trabajos debido a que fueron ubicados al otro extremo de Caracas; no llegaba agua potable ni había tuberías de aguas servidas; la llegada masiva de damnificados colapsó los pozos sépticos; no pocas familias fueron ubicadas de forma arbitraria en una misma vivienda, en la que se establecía una división apenas con una ropa colgada (Vilda, 1974).

Aquella imagen de una Venezuela no profunda, puesto que Caucagüita estaba en el área metropolitana de Caracas, dejaba tempranamente al desnudo el fracaso del modelo redistributivo, ahogado en los petrodólares.



La forma súbita en la que se dispararon los precios del petróleo, a mediados de los 1970, duplicó y en algunos casos triplicó el presupuesto de Venezuela entre un año y otro. Aquello que, a simple vista, podía ser una oportunidad para el desarrollo nacional alimentó una corrupción que se hizo endémica y esto representó un cambio cualitativo en comparación con los tres periodos presidenciales iniciales (Betancourt, Leoni y Caldera I) de la democracia instaurada en 1958.

En 1975, apenas con Carlos Andrés Pérez un año en el cargo, se hizo evidente que la corrupción se había extendido. Robar dinero público, no se le puede llamar de otra forma, terminó siendo una de las características más cuestionadas de la democracia venezolana y un claro síntoma de la incapacidad del sistema para autorregularse. Junto a otros factores, esto condujo a la debacle.

Ya a mediados de los 1970 advertía el jesuita Ignacio Castillo que, ante cada caso de corrupción que salía a la luz pública en aquel momento, había un conjunto de frases hechas por parte de la clase política: “abrir investigaciones”, “determinar responsabilidades de los culpables, sean personas naturales o jurídicas”, “llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias”, entre otras que terminaron siendo un repertorio desgastado. Nada de esto ocurría en verdad.

En un debate parlamentario de aquel momento, el Centro Gumilla resaltó la participación de dos diputados opositores: José Vicente Rangel y Carlos Rodríguez Ganteaume. Rangel había sido candidato presidencial en 1973 por el Movimiento al Socialismo (MAS) y lo sería de nuevo en 1978. Por aquel tiempo, ya se esbozaba su imagen de periodista que denunciaba la corrupción de Acción Democrática (AD, centroizquierda) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI, centroderecha socialcristiana), al tiempo que destacaba por sus intervenciones en el Congreso Nacional (Legislativo, bicameral; según la Constitución de 1961).

Justamente en 1974 Rangel puso el dedo sobre la llaga en sus artículos. El sistema político no estaba preparado para la propagación que tuvo la corrupción de la mano del *boom* petrolero de comienzos de los 1970. La Contraloría General de la República carecía de una ley que le diera sustento legal a su actuación. Se había aprobado, por otro lado, una Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, la cual –según se denunciaba– tenía serias deficiencias y lagunas.

Rodríguez Ganteaume (1975), diputado de COPEI y por tanto también en la oposición como Rangel, señaló lo que sería a la postre uno de los lastres del sistema en su incapacidad por reformarse. Los que debían aprobar las normas anticorrupción, diputados y senadores, eran a su vez beneficiarios de la corrupción de forma directa o a través de empresas *ad hoc* que comenzaron a proliferar en simultáneo con el maná petrolero.

El diputado copeyano colocó como ejemplo el caso de la firma “Asesoría Jurídica Integral” que, según pudo constatar él en los registros y en documentos públicos, fue constituida mediante el traslado del registrador público a la sede de AD en La Florida, Caracas. Esta empresa, que sería contratista del Estado, no solo se protocolizó en la sede del partido que estaba en el gobierno, sino que estaba presidida por David Morales Bello, entonces parlamentario adeco.

Esta falta de límites sería una de las características de la corrupción que se propagaba, y esto ocurría no solo en Caracas. Rangel había visitado por aquel tiempo las poblaciones de Yaritagua, Estado Yaracuy, y Quíbor, Estado Lara. En ambos casos, los concejos municipales, vía situado constitucional<sup>3</sup>, habían notado cómo se había duplicado su presupuesto, que rondaba el millón de bolívares (ISO: VEB<sup>4</sup>, unos USD 232 mil a la tasa de cambio de la época), entre 1974 y 1975. En ambos casos se transaban ya “manejos turbios”, según el periodista y diputado, en el manejo de los fondos públicos de dichas localidades.

Rangel (1975) definía a Venezuela, en medio de aquella bonanza, como un “Estado débil” y su tesis apuntaba en la necesidad de un gobierno más eficaz para responder a la corrupción. Rodríguez Ganteaume, por su parte, siendo fiel a su vocación socialcristiana, planteaba la necesidad de una renovación moral entre la clase política.

---

3 N de E: nombre de las asignaciones en el presupuesto nacional a las instancias de gobierno local en Venezuela.

4 N de E: denominación de la moneda venezolana hasta diciembre de 2007. Desde ese año, ha sufrido tres renombramientos y perdido 14 ceros dados los procesos hiperinflacionarios vividos en el país.

Ambos coincidían –Rangel de forma más enfática– en que no solo debían sancionarse como delitos el peculado y el enriquecimiento ilícito, sino que también debían sancionarse los funcionarios que, sin haberse enriquecido directamente, hubiesen hecho un manejo fraudulento de los recursos públicos. Puesto que el dinero que no se ejecutaba correctamente, para lo que había sido destinado, terminaba afectando a la sociedad, al pueblo venezolano, beneficiario a fin de cuentas de aquellas obras o planes públicos.

También se planteaba la necesidad de sancionar a los entes particulares, a los representantes de las empresas privadas, como contratistas o proveedores, que hacían el juego a las corruptelas. Esto, por cierto, quedó en evidencia con las instalaciones del complejo petroquímico El Tablazo, según denuncias reseñadas en esa época por Ignacio Castillo (1975). La prensa, por otro lado, tenía un rol de alertar y denunciar como perro guardián.

Debe decirse que, en medio de la abundancia económica que caracterizaba a aquel momento, no había capacidad de entender a cabalidad que, con la corrupción generalizada, se estaba fraguando el inicio del fin. La falta de visión sobre cómo les impactaría negativamente este tema era común entre la clase política que tenía responsabilidades de decisión, como es el caso del Congreso Nacional.

En la época de las “vacas gordas”, como los años de Pérez I, la corrupción tampoco representaba un problema nacional para la población. Al menos así lo reflejaban los estudios de opinión pública. Al concluir el ciclo de la expansión con precios altos del petróleo y caer Venezuela en impago en los 1980, cuando llegó la etapa de las “vacas flacas”, la población empezó a mencionar la corrupción como uno de los problemas de Venezuela.

Era tarde; ya se había instaurado un mecanismo que no supo de color político y en la narrativa popular se fue consolidando una imagen poderosa: si soy pobre, es porque algún político se robó lo que me correspondía de la riqueza nacional. Se abrió el camino, tempranamente, para que emergiera la figura del vengador con el pasar de los años. Solo necesitaba utilizar esta narrativa como un mensaje de venganza contra adecos y copeyanos, junto a la ilusión de que Venezuela era un país rico que solo necesitaba administradores honrados y comprometidos con el pueblo.



Al cerrar el año 1976, era notable la transformación que había ocurrido en Venezuela transcurridos los dos primeros años del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Si bien desde el poder los problemas asociados al manejo de una renta petrolera elevada y súbita se relegaban a un segundo plano, desde el campo del análisis político y económico se dejaba testimonio de los signos del fracaso. Tener aquella riqueza petrolera no nos hizo ricos a los miembros de la sociedad, ni sirvió para potenciar genuinamente el desarrollo nacional.

De “indigestión económica” calificaba Luis Ugalde (1976), entonces director del Centro Gumilla, la dinámica de Venezuela. Contar con ingentes recursos en dólares, producto de la exportación petrolera, no se tradujo en mayores capacidades agrícolas o industriales. Aprovechar la riqueza proveniente del crudo, un discurso en boga durante aquella época, terminó siendo una mera fantasía. Sostenía Ugalde al cerrar aquel año:

Con el petróleo tuvimos la posibilidad de disponer de capitales que excedieron las cantidades de capital correspondientes a nuestra capacidad de utilización eficiente (...) venimos sufriendo una indigestión económica por querer imaginar que son sólo más capital lograríamos mayor producción. (Ugalde, 1976)

El *boom* petrolero ocurrido en 1973 coincidió con el otorgamiento del Premio Nobel de Economía a Wassily Leóntiev, un destacado pensador económico de origen ruso y luego nacionalizado estadounidense. Mediante dicho galardón, la academia sueca reconoció “el desarrollo del método insumo-producto y su aplicación a los más importantes problemas económicos”. Según se reconoce en la actualidad, este método representó una aproximación empírica de las interrelaciones existentes entre los distintos sectores en que puede dividirse una economía nacional, tratadas como piezas de un equilibrio general.

Para Ugalde, el método de Leóntiev tenía plena pertinencia para explicar lo ocurrido en Venezuela. Con su método, Venezuela figuró como uno de los

países del mundo con “mayor debilidad económica por tener un bajísimo ingreso agrícola”. Además, esto estaba asociado a una deformación, dado que el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un alza por factores externos no asociados a la capacidad de producción. Asimismo, ocurría el agotamiento de lo que entonces se suponía era un activo irrecuperable, el petróleo.

Si bien con el pasar de los años quedó demostrado que, en el caso de Venezuela, las reservas de crudo eran muy superiores a lo que se conocía en aquellos 1970, el asunto central estaba en retratar la embriaguez que supuso para el modelo democrático tantos ingresos extraordinarios en tan poco tiempo.

Con un presidente Pérez que entonces gozaba de poderes plenos dada la mayoría de su partido (AD) en ambas cámaras del antiguo Congreso Nacional, la clase política no logró manejar con éxito aquella situación que terminó ocasionando o acentuando las distorsiones. Gracias a aquello, el desapego del modelo democrático comenzó a germinar entre muchos venezolanos. En realidad, la riqueza quedó en pocas manos y, por difícil de entender que resulte, tras recibir tantos recursos, el resultado fue una sociedad más desigual.

De acuerdo con cifras que manejaba en aquel momento el experto en relaciones laborales José Ignacio Arrieta (1976), había una concentración clara del capital en un 5% de la población. Si bien aquel 1.º gobierno de Pérez había prometido pleno empleo, incluso aumentando de forma artificial la burocracia, en la práctica el desempleo había crecido y alcanzaba el 16% de la población económicamente activa.

Un problema de fondo estaba en la falta de educación, que ya perduraba como una deficiencia de largo plazo en Venezuela. El 22% de la fuerza laboral en edad de trabajar era analfabeta o bien había alcanzado escasamente el tercer grado. Arrieta presenta datos de 1975-1976, es decir 15 años después de instaurarse el modelo democrático.

Ugalde lo señalaba sin ambages. En aquella Venezuela que danzaba en los petrodólares, no había una política de incremento de la capacidad humana productiva. “La educación requiere una urgente revisión de su relación con el reto productivo del país”, sostenía quien posteriormente fue rector de la UCAB.

Por otro lado, el cierre de 1976 era propicio para hacer un balance del primer año de la nacionalización del petróleo. El consumado académico Juan Pablo Pérez Alfonso, si bien elogiaba la decisión de Pérez, pues le parecía que haber nacionalizado la industria petrolera era lo correcto, cuestionaba el manejo poco riguroso que ya salía a relucir.

Para Pérez Alfonso (1976), resultaba cuestionable que el propio gobierno no cumpliera con sus decisiones en materia de producción y de presupuesto. Con el petróleo, “el gobierno se considera autorizado a producir lo que quiere o puede, sin preocuparse para nada de la Ley de Presupuesto y, desde luego, mucho menos de los supuestos planes nacionales emanados de la propia administración”, sostenía uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Con preocupación, este reconocido experto notaba que, tras la nacionalización, se hubiese elevado en diversos pozos petroleros la producción a un 100% de su capacidad. Esto era contrario a la práctica de aquel tiempo de “una industria petrolera bien administrada” y colocaba la explotación entre 75 y 80% de capacidad producción de cada pozo.

En aquel contexto, se destacaba una característica propia del despilfarro: la idea de que debía aprovecharse al máximo la fiesta de los altos precios de entonces. Entre quienes dirigían el país, no se preveía que aquella ingesta tan abrupta, aquella embriaguez de ingresos, terminaría dejando una larga resaca con consecuencias nefastas para el propio modelo democrático y su promesa de redistribuir la riqueza nacional.



Un año simbólico, así fue 1978: se cumplían 20 años de vida del modelo democrático de conciliación de élites que había surgido tras el fin la dictadura de Marcos Pérez Jiménez; asimismo, era un año electoral; resultó electo como presidente Luis Herrera Campins del partido COPEI, con lo cual el país viviría un nuevo ejemplo de alternancia democrática del poder, un símbolo del sistema en aquel momento.

Los años de bonanza, de expansión del gasto público y de amplio control de las instituciones de las que gozó el presidente Carlos Andrés Pérez en su primer mandato (1974-1979), estaban llegando a su fin. Aunque Venezuela había vivido una transformación profunda, sin duda alguna, en algunos sectores no se produjo cambio alguno.

En aquellos dorados 1970, ni Pérez ni su equipo se propusieron afrontar un tema que ya entonces resultaba álgido y que había sido postergado también por el primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1974). Hablamos de la justicia penal en Venezuela.

Aquella Venezuela moderna y cosmopolita seguiría teniendo, al cerrar el primer gobierno de Pérez, unas reglas arcaicas para la justicia penal. Además, el sistema carcelario ya estaba incubando la violencia que se desataría con furia años después.

La socióloga Tosca Hernández (1978), quien formaba parte del Instituto de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), resaltaba la falta de voluntad política en la materia. El Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal entonces vigentes eran los mismos que en su momento había hecho aprobar el dictador Juan Vicente Gómez. Ambos instrumentos jurídicos eran de 1926.

Cifras oficiales de la Dirección de Prisiones, comentadas en la revista *SIC* (Centro Gumilla, 1978b), develaban ya una situación que debía ser encarada con

urgencia por la clase política de entonces. El 68,7% de la población penal estaba formado por venezolanos “procesados en espera de sentencia”. Se registraba un hacinamiento en las cárceles del 36,3% y un déficit del personal de custodia del 40%.

Para la publicación del Centro Gumilla, ya no era posible hacerse de la vista gorda y “dejar las cosas como están”. Las cosas no solo no estaban bien, sino que el festín de los petrodólares estaba llegando a su fin y el nuevo gobierno debía priorizar el tema del sistema de justicia ante un escenario de mayor crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la descomposición social.

El tema de la importancia de la justicia penal no era fortuito. En plena campaña electoral de aquel 1978 había sido asesinado, literalmente acribillado tiros en una calle de Caracas, el abogado penalista Ramón Carmona Vásquez. Este se considera el primer caso de sicarios en Venezuela, además con una trama de corrupción como trasfondo.

El caso Carmona pasó a ser tristemente célebre. Si bien hubo condena y se estableció responsabilidad de los agentes del Grupo de Apoyo Táctico Operativo (GATO) de la Policía Técnica Judicial (PTJ, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC) en el asesinato del abogado, no llegó a establecerse quién ordenó este hecho. El director de entonces de la PTJ, Manuel Molina Gásperi, fue separado de su cargo y años después falleció en un tampoco claro accidente de aviación.

En relación con el asesinato de Carmona, el Centro Gumilla editorializaba en 1978: “el hilo de las averiguaciones conduce por cualquiera de sus derivaciones hacia conductas mafiosas de no pocos abogados, jueces y policías judiciales en alianza y competencia criminal con mafiosos internacionales y nacionales”.

En tanto, Javier Elechiguerra (1978), quien entonces era profesor de la UCV y al inicio del chavismo sería fiscal general de Venezuela, denunciaba la normalización de ciertas prácticas que estaban reñidas con los principios de justicia y derechos fundamentales de la constitución vigente. Por ejemplo, la detención de venezolanos por parte de cuerpos policiales “para investigaciones” y su incomunicación por hasta una semana; la violación “constante y reiterada” de los lapsos establecidos para procesos judiciales; junto a la aplicación de la justicia militar a civiles.

Pese a los aires de modernidad que se respiraban en el país, no hubo intención de modernizar ni las cárceles, ni de modernizar el marco conceptual y el operativo del propio sistema penitenciario en Venezuela.

Elio Gómez Grillo (1978), quien ya entonces era un reconocido experto en la materia, comentaba con desazón cómo en diversos países se estaban dando debates sobre qué hacer con los presos y sobre todo qué hacer para sancionar los delitos. Mientras tanto, la era de bonanza en Venezuela soslayó tanto la inversión en infraestructura carcelaria moderna como un nuevo enfoque de políticas públicas.

Tal vez deban buscarse las claves de la violencia desbordada en las grandes ciudades, tras los disturbios denominados El Caracazo en 1989 a inicios del segundo periodo presidencial de Pérez (1989-1993), en la falta de atención de la clase política a los temas de la no justicia que ya reverberaban desde 1978. Allí pueden encontrarse otras señales para el camino de la erosión democrática que viviría Venezuela posteriormente.



El 23 de enero de 1978 se cumplieron dos décadas de vida democrática venezolana. Fue un momento de revisión y evaluación crítica, más allá de las celebraciones que realizó la clase política encabezada por AD y COPEI. Tras dos décadas de vivir en el modelo democrático, se hacían evidentes las señales de agotamiento del mismo. Lamentablemente, la narrativa democrática de 1958 perdía fuerza entre muchos venezolanos.

La necesidad de revisión y una suerte de refundación del sistema, que empezaba a plantearse entre estudiosos y analistas de la época, no tuvo eco alguno entre quienes ejercían el poder.

Tal como analizaba en enero de 1978 el jesuita Arturo Sosa, el sistema democrático venezolano había tenido una palanca en la economía petrolera. El modelo de 1958, constituido a partir de un pacto de élites, no fue solo político, sino que también incluyó al empresariado privado. La población percibía que en democracia se podía progresar, ascender socialmente. Junto con la modernización que vivió Venezuela en los primeros 15 años de democracia, también se consolidó una clase media.

La bonanza petrolera que coincide con la llegada de Carlos Andrés Pérez a su primera presidencia (1974-1979) hizo colapsar el sistema e incentiva entre los venezolanos las aspiraciones de consumo. Esperaban alcanzar niveles de enriquecimiento sin que ello estuviera relacionado con su esfuerzo o productividad. Comenzó a vivirse, ya en el tramo final de Pérez I, “una inmensa trabazón social de sostenibilidad del modelo”, según Sosa (1978).

En la imaginación popular, el modelo democrático no solo era un sistema de libertades y derechos políticos, sino que se identificaba también con bienestar económico y posibilidades de movilidad social.

Ya en aquel 1978, el socialcristiano Luis Herrera Campins (COPEI) posicionó su campaña electoral, que le llevó a la presidencia para el periodo 1979-1984, con la incisiva pregunta: “¿y dónde están los reales?” No era baladí interrogarse sobre adónde había ido a parar la riqueza generada por el *boom* petrolero a partir de 1974.

Que el voto popular, después de la embriaguez de los petrodólares de Pérez I, haya beneficiado a un adversario político como Herrera Campins, quien se preguntaba adónde había ido a parar la riqueza, desnuda las dinámicas limitantes que se vivieron y que erosionaron profundamente la credibilidad en la democracia. La pobreza creció cuando había más ingreso, la corrupción cundió cuando los presupuestos públicos se cuadruplicaron. En consecuencia, esta combinación, junto a otros factores, comenzó a fermentar el malestar social.

Sostenía un editorial de la revista *SIC* en enero de ese año electoral:

Bien que mal en estos 20 años de democracia había tareas señaladas y vividas con ilusión: la reforma agraria, la industrialización, la expansión educativa, la ampliación de los servicios públicos y en el orden político, el afianzamiento de la democracia amenazada por las armas. Ya al final del período de Rafael Caldera (1968-74) esas banderas lucían agotadas. (Centro Gumilla, 1978a)

Ante tal agotamiento, sostenía la publicación del Centro Gumilla, el gobierno de Pérez I se planteaba como una última oportunidad para refundar la democracia, para volver a vincular a la población con la clase política. Tras las nacionalizaciones del hierro y del petróleo, que eran aplaudidas, se señalan como elementos muy negativos de la gestión de Pérez “la tramoya de las palabras, el escándalo de los negocios, el insulto nacional de una mayor concentración de la riqueza”.

Adelantaba *SIC*, por su parte, que un triunfo electoral de Herrera Campins sería producto de “los desastres del gobierno” de Pérez I, tal como sucedió finalmente en las urnas electorales. No hubo señales de autocrítica de la dirigencia de AD entonces sobre aquellos resultados. “Las elecciones han sido un gran carnaval, un largo y costoso carnaval”, editorializaba la revista de los jesuitas en 1978.

Advertía por su parte la socióloga, catedrática e historiadora Elena Plaza:

Descubrir el significado de un momento clave de nuestro proceso histórico-político, como el 23 de enero de 1958, tiene especial importancia en la situación actual de Venezuela cuando la mayoría de la población no ha tenido como experiencia vital ningún otro modo de vida que el nacido de esa fecha. (Plaza, 1978)

No era un asunto menor, obviamente. La gesta heroica, que tuvo distintas etapas y estampas, de la lucha contra la dictadura y el costo humano que ello tuvo

(asesinatos, encarcelamientos, exilios), era algo difuso ya para la mayoría de los venezolanos en aquel 1978.

En los textos de analistas y estudiosos se percibía un llamado, una cierta urgencia, para que la clase política se revinculara con el espíritu primigenio de la democracia.

“En Venezuela los numerosos hombres honestos y capaces que trabajan en los partidos son quienes pueden y deben renovar la política y dar asideros reales a la esperanza de la mayoría. Porque la política sin partidos es dictadura”, insistían desde *SIC*. No era un llamado aislado, ni una voz solitaria.



# Capítulo 7

## UN AÑO PERDIDO EN 1979

Era marzo de 1980. El gobierno del presidente socialcristiano Luis Herrera Campins (COPEI) cumplía un año. Doce meses atrás, cuando tomó de posesión del cargo, el jefe de Estado exclamó: “recibo un país hipotecado”. No era mentira. El *boom* de la Gran Venezuela, como se bautizaron los años del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), dejó endeudamiento interno y externo, además de grandes expectativas no satisfechas.

No solo el país que pasó a gobernar Herrera Campins entre 1979 y 1984 estaba hipotecado; sino también, a la luz de las décadas transcurridas, podríamos decir que Venezuela, como un todo, estaba hipotecada. No solo era una situación económica comprometida, que lo estaba, sino que sus implicaciones sociales y posteriormente políticas terminaron por generar la inviabilidad del modelo de extracción petrolera y redistribución del ingreso público.

En 1980 era claro que ya aquello no era la vía y que el país debía reinventarse. El diagnóstico estaba claro, pero no hubo ni respuesta ni voluntad política para encaminar al país en otra dirección. Herrera Campins recibió un país hipotecado y se lo entregó con una hipoteca en peores condiciones a su sucesor, Jaime Lusinchi, de AD (1984-1989).

Por otro lado, ya en 1980, cuando apenas tenía un año en el poder, la evaluación de la gestión de Herrera Campins era ya bastante negativa. Con una expectativa de que vendría una suerte de golpe de timón, efectivamente el nuevo gobierno introdujo medidas más liberales para contrarrestar el estatismo desaforado que acompañó a la embriaguez de los petrodólares; pero en general la imagen que daba el poder ejecutivo de entonces era de improvisación.

Tras el primer año de gobierno de Herrera Campins, prevalecía la impresión “de la ausencia de una idea clara de hacia dónde va y, sobre todo, por dónde quiere ir”, resaltaba un editorial de los jesuitas (Centro Gumilla, 1980). Aquella administración

adolecía de “capacidad operativa” para poner en práctica planes y proyectos que, en términos teóricos y filosóficos, parecían adecuados. No tenía Herrera Campins —y eso ya salía a relucir a cumplirse sus primeros 12 meses en el poder—, “la capacidad de convertir esos principios y deseos en planes concretos realizables en el corto período de cinco años de gobierno”.

En su afán de marcar una diferencia en relación con lo que había sido la gestión previa de Pérez con un exacerbado presidencialismo, Herrera Campins delegó diversas decisiones en su gabinete. Decisiones que en el pasado tomaba el jefe de Estado pasaron a ser materia de ministros. Aquello que en el papel lucía saludable para desconcentrar el poder terminó llevando a una situación caótica.

“La descoordinación e incluso los enfrentamientos entre unos ministerios y otros, y entre niveles de un mismo ministerio, ha sido otra característica de este gobierno”, comentaba la revista *SIC* en 1980. Estos enfrentamientos, unidos a la ausencia de planes específicos de carácter global para la administración y de carácter específico para los distintos ministerios, agudizaban “una marcha descoordinada de la acción de gobierno”.

Un aspecto que entonces resultaba llamativo es que Herrera Campins inició su mandato sin tener un plan de gobierno consensuado y unificado. “Realmente no se hizo un programa de gobierno, se elaboraron y difundieron papeles de trabajo por sectores específicos”, cuestionaba un editorial del Centro Gumilla al hacer un balance del primer de gobierno socialcristiano.

A esto se sumaba una ola de críticas no solo de adversarios, sino desde el seno de su propio partido COPEI, en torno a las decisiones especialmente económicas de Herrera Campins. Un ejemplo lo reseña Miguel Ignacio Purroy (1980) en relación con la política “neoliberal” —a los ojos de entonces— de acabar con el control de precios, como una manera de dinamizar una económica que estaba estancada tras la ralentización que vivía el mercado petrolero.

Tras el *boom* de mediados de los 1970 vinieron varios retrocesos y algunos repuntes, pero ligeros en comparación con la primera y drástica subida de los precios del crudo en 1973-1974.

El entonces secretario general de COPEI, Eduardo Fernández, lanzó una “crítica solidaria” a los ministros del área económica, pero les endosa optimismo o ingenuidad al creer que la sola liberación de precios haría a Venezuela de una economía de mercado. Sostenía Fernández que “en Venezuela el mercado no es perfecto, sino dominado por monopolios, roscas y presiones”.

Siendo Herrera Campins un católico fiel, debió ser un cimbronazo el cuestionamiento que también presentara la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV, 1980). Los obispos católicos cuestionaban “la subida inmoderada de precios”, en un momento en que se registraba un repunte inflacionario, producido en realidad por los controles artificiales que había impuesto Pérez con un plan estatista en extremo, apalancado en los años de las vacas gordas por ventas petroleras.

A Herrera Campins le tocó administrar los años de las vacas flacas. Aun así, la CEV denunciaba que en aquel momento “se profundiza la brecha entre ricos y pobres” en Venezuela y se extendía “una corrupción que invade tanto al sector público como al privado”.

Aquel primer año del gobierno copeyano dejó en claro que, una vez acabada la danza de los petrodólares, ya no había cómo financiar la fiesta y el derroche de los años de Pérez I. Sin embargo, se habían generado compromisos y expectativas en diversos sectores de la sociedad a los que el nuevo gobierno le tocó enfrentar.

De forma desorganizada y sin consensos, incluso dentro de su propio partido, como ya hemos reseñado, Herrera Campins se encaminó a lo que fue un punto de quiebre simbólico en materia económica en Venezuela, el llamado Viernes Negro, cuando se devaluó el bolívar por primera vez. La crisis que venía gestándose de forma soterrada en la sociedad venezolana tiene allí una primera fecha emblemática.



Aunque se venía señalando desde hacía tiempo que el modelo económico era inviable, la decisión gubernamental el 18 de febrero de 1983 de devaluar el bolívar dejó al país sencillamente en shock. Como era el último día laborable de la semana, pasó a ser conocido como el Viernes Negro. En las semanas y meses siguientes abundaron los análisis críticos de esta medida, junto a llamados de que se aprovechara la crisis para repensar el modelo fallido de redistribución de la renta petrolera.

El presidente copeyano Luis Herrera Campins (1979-1984) que tuvo razón al preguntarse “¿y dónde están los reales?” cuando asumió la presidencia comenzando 1979, perdió la oportunidad histórica de que su gobierno efectivamente refundase las bases del modelo de desarrollo, como se había prometido, para hacer a Venezuela una nación menos dependiente de los vaivenes del mercado petrolero internacional.

La clase política venezolana, en su conjunto, optó por “correr la arruga” –como se dice coloquialmente– para evitar abordar los problemas críticos que ya nos afectaban de manera generalizada como sociedad (pobreza, inequidad, agotamiento del modelo sustentado en el ingreso petrolero). Si bien eran de naturaleza económica y social, en realidad desnudaban una pobreza política. Quienes dirigían el país no supieron reorientarlo y encaminarlo por otro sendero como respuesta a la crisis que se vivía de forma aguda. Con el pasar de los años, aquella crisis se haría crónica y terminaría por socavar el modelo de conciliación de élites que se había instaurado como respuesta democrática en 1958.

Cuando se tomó la decisión de devaluar el bolívar, con las secuelas económicas, sociales y hasta simbólicas que aquello tuvo, el clima nacional, según reseñaba un editorial de la revista *SIC* (Centro Gumilla, 1983), apuntaba a la necesidad de que se creara un gobierno de emergencia nacional para los últimos meses del mandato de Herrera Campins y llevar adelante profundas reformas. Entre otras recomendaciones que se hacían estaba la sugerencia de que el presidente se rodeara de un “grupo

de notables”, de carácter independiente, para introducir reformas de fondo en el modelo.

De haberse tomado una decisión en torno a aquella propuesta, habría sido una respuesta política mayúscula. No ocurrió. La clase política, dominada ampliamente por el bipartidismo AD-COPEI optó por seguir el esquema tradicional: no se quería alterar al país más de lo que ya estaba con la devaluación para mantener la dinámica electoral. En diciembre de ese 1983 se hicieron elecciones y resultó electo el adeco Jaime Lusinchi, jefe de Estado en el periodo 1984-1989. La clase política, más allá del discurso que denunciaba la crisis, seguía actuando como si nada ocurriese en el país.

El gobierno de Herrera Campins, según el fallecido economista Domingo Méndez (1983), “nadó en la abundancia” entre 1979 y 1981, aquello postergó cualquier reforma. Como lo había hecho antes Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno (1974-1979), el presidente copeyano se dedicó a redistribuir la renta. El país estaba atado a los vaivenes internacionales. Aquella subida de los precios del crudo que coincidió con el inicio del gobierno de Herrera Campins era fruto de la revolución fundamentalista que había derrocado al Sha Reza Pahlavi en Irán, también a la guerra que tuvo lugar entre los vecinos y potencias petroleras Irán e Iraq.

Estos dos hechos internacionales, según Méndez, “retrasaron la actual crisis de la economía venezolana, pero al final se ha impuesto la fuerza de los hechos”. Este experto consideraba que la conducción económica del país se había manejado con improvisación e irresponsabilidad y que las decisiones oficiales, a fin de cuentas, habían evitado “entrar a resolver los graves problemas estructurales que padece la economía venezolana”.

Por su parte, Miguel Ignacio Purroy (1983), escribía mes y medio después del Viernes Negro. Al hacer un balance del manejo de la crisis por parte del gobierno en aquellas semanas, concluía que “la ineptitud del equipo gubernamental a todos los niveles está sumiendo al país en un proceso de profundo deterioro”. De forma reiterada, este autor habla de torpeza e incoherencia en el manejo de la economía en aquel momento, que visto años después terminó siendo un punto de inflexión en la Venezuela democrática.

Los años que siguieron a aquel viernes de 1983 estarán marcados por un ajuste económico que empobreció a la mayoría, sin que se refundase el modelo. Los gobernantes y quienes aspiraban a serlo seguían bajo un limitado marco de comprensión de la crisis. Desde la Academia, se produjo un libro icónico que

desnudó las limitaciones, debilidades y desviaciones del sistema democrático en su apuesta por redistribuir la renta petrolera.

En 1984 Moisés Naím y Ramón Piñango publicaron *El Caso Venezuela. Una Ilusión de Armonía*. Este libro reunía aportes de muy diversos autores. Aquellas páginas eran una cruda radiografía que, me temo, la clase política de los años 1980 no quería ver. Tampoco la sociedad venezolana quería asomarse a lo que era la dura realidad: el modelo se había agotado.

Entretanto, el Centro Gumilla ponía el acento en las consecuencias de la devaluación. Se preguntaba en marzo de 1983: “¿quién pagará la crisis?”. Cuestionaban los jesuitas que todo el foco se pusiera en los que “carecen de dólares” para seguir importando bienes y productos o contratando servicios desde el exterior, cuando en realidad la prioridad debía estar “en resolver los problemas de quienes nunca han tenido bolívares”. Se hacían eco, con esta última frase, de lo que había expresado el entonces diputado Luis Raúl Matos Azócar (AD), quien tendría posiciones importantes en la conducción económica del país a fines del siglo XX.

La discusión sobre la crisis no debía reducirse a la cotización del dólar. Sin embargo, allí se quedó y con ello Venezuela perdió una oportunidad para una reorientación de fondo en materia económica y social, dimensiones que terminarían por erosionar la confianza y la apuesta de los venezolanos por el modelo democrático de 1958.



En no pocas ocasiones se han revisado solo variables netamente político-institucionales para explicar las razones que llevaron al desmoronamiento del sistema democrático venezolano. Como hemos visto en otros artículos, esto es sin duda una línea de análisis ineludible. Sin embargo, no menos importante: para entender la desdemocratización en Venezuela, debe voltearse la mirada al modelo fallido que tuvo su expresión central en el financiamiento del crecimiento económico y económico y el bienestar social por medio de los ingresos fiscales por concepto de hidrocarburos (renta petrolera), es decir, el rentismo.

Pudieramos decir que la debilidad manifiesta del aparato productivo interno, el recrudecimiento del proceso inflacionario, los dramáticos niveles a los que ha llegado el desempleo y subempleo, el creciente déficit en la balanza de pagos, la liquidación de las reservas internacionales, el deterioro indetenible del bolívar respecto al dólar, las tasas de interés negativas que desestimulan el ahorro y el persistente déficit fiscal constituyen los principales problemas que conforman el cuadro crítico de la economía venezolana. (Álvarez, 1989)

No, esta cita no corresponde a los primeros tres años de gestión de Nicolás Maduro (2013-2016), antes de la espiral hiperinflacionaria en Venezuela. La escribió Víctor Álvarez (1989), economista y ministro durante el gobierno de Hugo Chávez, al hacer un balance del legado económico de la administración de Jaime Lusinchi (1984-1989).

Cuando se observan tales paralelismos entre el manejo económico en las etapas finales del modelo democrático de 1958 con la gestión del chavismo, más que un país, Venezuela se parece al perro que da vueltas y vueltas para morderse su propia cola.

Tal como han recordado Asdrúbal Oliveros y Armando Gagliardi (2017, mayo 1), la clase política venezolana ya había recibido una fuerte advertencia con el Viernes Negro, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, en relación con lo insostenible del modelo. No obstante, en retrospectiva, no hubo ni capacidad ni

voluntad de cambiar la forma en que se venía manejando lo que entonces se llamaba “capitalismo de Estado”.

Lusinchi, según estos analistas, tuvo una prueba de fuego para darle un giro al modelo económico en 1986. En aquel año, el precio del petróleo descendió abruptamente de USD 25,94 por barril a USD 13,31 por barril, una caída del 48,7% en solo un año.

Volvamos a Víctor Álvarez. Hizo un balance de la gestión económica de Lusinchi en un artículo que tituló “Los Principales Problemas Económicos del Nuevo Gobierno”, en enero de 1989, cuando Lusinchi estaba a poco de ser sucedido en la presidencia por Carlos Andrés Pérez (1989-1993).

La base del modelo estaba errada en los años 1980 y sigue errada en el siglo XXI: tenía (y tiene) como base de crecimiento el precio internacional del petróleo, una variable que, como hemos visto, no puede ser controlada. En verdad, la historia venezolana de las últimas décadas deja en claro el carácter cíclico que tiene la cotización internacional del crudo. Los altos precios no son para siempre. Solo que nuestros gobernantes, ayer y hoy, parecen creerlo.

Escribía el mencionado economista:

Como lo hemos podido apreciar, en circunstancias de deterioro sostenido de la cotización del petróleo en el mercado internacional, el modelo fiscal ha demostrado su escasa capacidad para apuntalar el debilitado aparato productivo interno. Y como la rigidez de este último le impide generar abundantes fuentes de trabajo para la creciente población laboral venezolana, se refuerzan, entonces, las presiones económicas y sociales sobre el gasto público, determinando un insostenible déficit fiscal que ha acentuado un proceso inflacionario sin precedentes en nuestro país. (Álvarez, 1989)

Otra causa que señalaba en relación con la gestión de Lusinchi, con mucha similitud con la práctica económica del gobierno de Nicolás Maduro en sus primeros tres años, fue el fiel cumplimiento con el pago de la deuda externa. No se trata de no pagar, sino que, para Álvarez, una caída abrupta en los ingresos debía tener como respuesta una renegociación dada la disminución de la capacidad de pago del país.

Sostenía Álvarez:

La deuda externa, lejos de constituir una expresión más de la crisis, se revela también como uno de los principales nexos de causalidad de los desequilibrios (macroeconómicos). En efecto, una vez que tuvo lugar la crisis petrolera, la pesada carga de la deuda se ha traducido en una de las principales presiones deficitarias sobre la balanza de pagos. Al mismo tiempo, los cuantiosos recursos fiscales que se destinan al servicio de la misma, constituye una de las explicaciones del creciente déficit fiscal.

Un asunto no abordado de forma directa por este economista, tampoco por Oliveros y Gagliardi en su evaluación del periodo de Lusinchi, está relacionado con la decisión política que está detrás de cada postura económica cuando se ejerce el poder en un país como Venezuela. Los periodos de “vacas flacas”, en general, se perciben como transitorios, ya que todos quienes han ocupado el poder desde el *boom* de los 1970 en adelante apuestan a una subida de los precios internacionales del crudo como principal palanca de su política económica.

Al delinear cómo debería ser la economía venezolana del futuro, para Álvarez, debía ocurrir un cambio de modelo y un cambio de mentalidad en la élite política y económica. Se trataba entonces –y parece ser el desafío actual– de poner fin al rentismo.

La economía del futuro deberá estar más sustentada en los ingresos que pueda generar la actividad productiva interna, a fin de ir superando gradualmente la tradicional dependencia que ha tenido del ingreso petrolero. Ante un mercado internacional inestable y una OPEP que no termina de dirimir definitivamente sus contradicciones internas, difícilmente el petróleo pueda continuar cumpliendo el rol de fuerza motriz que durante muchas décadas desempeñó en el contexto de la economía nacional.

Palabras de absoluta vigencia en la Venezuela del siglo XXI, aún signada por el rentismo.



# Capítulo 10

## 1988 O EL PRELUDIO DE EL CARACAZO

A muchos tomó por sorpresa el estallido social conocido como El Caracazo, a fines de febrero de 1989. No pocos políticos de entonces, para salvarse de responsabilidades en lo que sin duda era el fracaso del sistema, sostuvieron la tesis de que estos sucesos habían sido inducidos.

En verdad es, que comenzando 1988 a propósito de los 30 años de democracia en Venezuela, se hicieron públicos varios claros llamados de alerta. En el país, se fraguaba una crisis de envergadura sin que el liderazgo político de aquel momento le prestara la debida atención.

En torno al 23 de enero de 1988, por ejemplo, la CEV difundió un extenso y crítico pronunciamiento. La lectura de este documento, de amplia difusión en su momento, evidencia que los obispos católicos del país coincidían con otros sectores en señalar una serie de graves falencias que debían ser atendidas con urgencia.

El modelo democrático de 1958, cuya base principal consistía en la distribución de la renta, había fracasado y aquello era público y notorio. Sin embargo, la clase política dirigente, conformada por el bipartidismo AD-COPEI, no parecía capaz de enderezar el rumbo.

Un año antes de los sucesos de El Caracazo, ya los obispos católicos advertían:

El deterioro en las condiciones sociales y económicas del país han provocado manifestaciones públicas que, por diversos factores, se tornan violentas y gravemente perjudiciales. Estas a su vez han sido reprimidas, en algunas ocasiones, con excesos que han provocado la pérdida de vidas humanas y en bienes materiales. (CEV, 1988)

El liderazgo del catolicismo en el país reconocía que, en comparación con generaciones anteriores, el sistema democrático de 1958 había mejorado las condiciones de vida del venezolano. Al mismo tiempo, denunciaban cómo se había establecido igualmente “una distribución de la riqueza que no ha beneficiado equitativamente a todos los sectores de la sociedad”.

Como otro ejemplo, justo un año antes del estallido popular, un editorial de la revista *SIC* (Centro Gumilla, 1988), denunciaba la existencia de “dos Venezuelas”: una formada por “las manos encallecidas”, de trabajadores venezolanos pobres en el campo o en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, y otras manos de un sector de clase media y alta, que ya entonces “se abre paso por la era de las computadoras”.

La CEV, por su parte, alertaba que se había hecho pagar “a los más pobres” los costos de una crisis económica que ellos no habían generado ni de la que tampoco se habían beneficiado sustancialmente durante la bonanza previa. La sociedad observaba cómo se habían perdido “muchas oportunidades de genuino crecimiento gracias a la renta petrolera” debido a la mala administración, el clientelismo partidista y la corrupción.

Por su parte, la entonces influyente Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) sostenía que, dentro de un conjunto de años muy negativos, 1987 “ha sido sin duda alguna el más duro para los trabajadores, la clase media y la el pueblo en general”.

Para entonces, buena parte de la gestión económica del gobierno del adeco Jaime Lusinchi (1984-1989), estaba enfocada en cumplir con los compromisos de pago de la deuda externa. Paradójicamente, ese endeudamiento se multiplicó precisamente en los años de la bonanza petrolera, entre la segunda mitad de los 1970 y al iniciarse los 1980.

El presidente de la CTV, Juan José Delpino (1988), miembro de AD al igual que Lusinchi, denunciaba que el gobierno de este último proseguiría en aquel año electoral, 1988, con su posición “de pagar hasta el último centavo de la deuda externa”. A juicio del líder sindical, aquello restaba recursos que podían destinarse a la recuperación económica y a paliar el impacto de la crisis entre los más pobres.

“La paz social no puede mantenerse, salvo en regímenes represivos y a costa de la persecución, cárceles y muerte, sobre base de injusticias crecientes”, advertía la CTV en enero de 1988. También predecía que la situación “en la que una minoría saca provecho de la crisis” no podría mantenerse sin que hubiese “justas demandas sociales y protestas populares” como respuesta. Así, la principal central sindical del país le pedía a la élite política que prestara atención al “clamor de una colectividad golpeada e irritada por las injusticias”.

La falta de conexión del liderazgo político con el pueblo, que a fin de cuentas fue lo que expuso la CTV, también era denunciada por los obispos católicos (CEV,

1988). Señalaban como “imperfección de la democracia venezolana su paulatino alejamiento del pueblo” y decía que en Venezuela se respiraba “un aire de frustración”.

El jesuita Arturo Sosa (1988a), director de la revista de análisis sociopolítico *SIC*, llamaba la atención sobre la urgente necesidad de llevar adelante una transición en Venezuela hacia un modelo político que llamaba “postpopulista”, que debía ir de la mano de transformaciones en el modelo económico nacional, para dar paso a una “Venezuela posrentista”. El modelo de 1958 estaba sencillamente agotado y debía reinventarse.

El año 1987 había dejado a la población más empobrecida, en lo que fueron años de secuelas tras el llamado Viernes Negro de 1983. Había crecido el desempleo abierto y aumentado vertiginosamente la informalidad ocupacional. Como recuerda Sosa, en un año, el salario había perdido su poder adquisitivo en 40%.

El tono de urgencia de lo planteado por Sosa, así como los señalamientos de la CEV y la CTV en verdad parecieron caer en el olvido. En 1988 el país presenciaría una campaña electoral costosa, financiada a manos llenas, cuando el país votante estaba con los bolsillos vacíos. En diciembre de 1988 Carlos Andrés Pérez, quien en la imaginación popular era sinónimo de la Gran Venezuela de los 1970, fue electo para un nuevo periodo.

Carlos Andrés Pérez —a quien se le llamaba por su acrónimo: CAP— como buen político populista, nunca dijo abiertamente que no regresaría la bonanza con su gobierno, sino que en realidad el país debía prepararse para un programa de ajustes macroeconómicos estrictos.

Tras su elección vino una fastuosa toma de posesión, en febrero de 1989, que no se caracterizó por la austeridad, la misma que casi en simultaneo se le pedía al pueblo. Aquel mes de febrero cerraría con los sucesos de El Caracazo que aún algunos intentan ver con sorpresa, cuando en realidad el año anterior había sido preludio de este malestar social que finalmente explotó.





# PARTE II

## **De la ilusión de armonía a la revolución bonita**



Venezuela parece marcada por preguntas cíclicas y problemas de fondo sobre los cuales la sociedad da vueltas de forma intermitente. Uno de estos temas que aparece reiteradamente es el relacionado con la participación electoral, especialmente en momentos de crisis. La pregunta “¿vale la pena votar?”, que se han hecho millones de venezolanos en tiempos recientes, era la misma pregunta de un agudo periodista político (Linares, 1988) en las semanas previas a las elecciones de diciembre de 1988. Carlos Andrés Pérez resultó el vencedor, solo para culminar de manera adelantada un conflictivo y truncado segundo periodo presidencial (1989-1993).

El artículo de análisis y prospectiva aludido estaba firmado por el ya fallecido periodista político Leopoldo Linares, una destacada pluma del diario *El Nacional*. Para aquella época, escrudinaba en el estado de ánimo del venezolano, también agobiado por la crisis económica, y su conexión con el momento electoral.

En el ambiente, se percibían diversas señales de crisis profunda. Para el venezolano de a pie, el sistema democrático había dejado de ser sinónimo de bienestar económico general y de progreso material individual. En realidad, el modelo democrático de 1958 hacía aguas; pero la clase política tradicional no quería abordar seriamente la necesidad de reformas, tal como se reclamaba desde diversos ámbitos de la sociedad.

El tono de la campaña previa, como suelen serlo las campañas, era de populismo. Con CAP, volvería la Gran Venezuela. La desdemocratización que nos ocupa en esta obra ya comenzaba a carcomer al modelo después del Viernes Negro, la primera e histórica maxidevaluación de la moneda que se vivió en el país el 18 de febrero de 1983. En los años siguientes, la élite política jugó a “correr la arruga” como se dice popularmente en Venezuela.

Una vez reelecto, Pérez llevó adelante un amplio plan de ajuste económico. No era lo que esperaba la población después de una campaña electoral en la que se

prometía el regreso a una época de bonanza. Las señales no eran de crisis profunda, los venezolanos presenciaron lo que fue una fastuosa toma de posesión. La clase política no daba señales de austeridad y no parecía oír el clamor popular.

La estrategia electoral en 1988 intentaba conectarse con el maná de la década anterior. Tal como lo ha reseñado Víctor Salmerón (2013, noviembre 12), a mitad de los 1970 Venezuela era un país en crecimiento, pujante, pero también una nación petrolizada que tenía en su interior el germen de futuros desequilibrios. La economía dependía en extremo de la renta petrolera, un recurso que no tenía que ser producido, solo extraído y repartido por un Estado que se expandía velozmente. Mientras tanto, empresarios y trabajadores se organizaban para captar ingresos de ese recurso.

Al enumerar los aspectos que incidían negativamente en el clima electoral de 1988, Linares señalaba:

Se destacan la corrupción y la deuda externa que acogotan al venezolano, así como también los problemas sin solución en estos treinta años de democracia representativa, como son el desempleo, la salud, los deficientes servicios públicos y el aumento galopante del alto costo de la vida. (Linares 1988)

Aquello señalado hace décadas es también el clima que ha prevalecido en el país en diversos momentos de este siglo XXI. Tres meses antes de los sucesos de El Caracazo, de febrero de 1989, Leopoldo Linares sintetizaba:

[E]l cuadro de la situación venezolana es bastante preocupante. Quizás la realidad no se aprecia en mayores proporciones porque, justamente, estamos inmersos en una campaña electoral. Por ejemplo, los expertos y conocedores del quehacer económico vaticinan que tanto el dólar como los precios se dispararán a partir del 5 de diciembre (un día después de las elecciones). Esto, unido a la ya baja calidad de vida que afecta al venezolano, seguramente llevará a las mayorías nacionales a un verdadero estado de desesperación.

Aquel retrato de lo que se vivía en Venezuela era visto por periodistas y analistas, padecido por la población e ignorado por la clase política tradicional aún en un clima de fiesta electoral. No se querían ver las señales de la desdemocratización en marcha; no había ojos para ver que el sistema democrático comenzaba a flaquear.

Por aquella época, desde el gobierno, se descalificaban las advertencias de este tipo, que resultaron además muy comunes en la revista *SIC* del Centro Gumilla. La dinámica electoral, además, potenciaba un gasto público ficticio en las postrimerías del gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) que, unido a la completa negativa de la necesidad de ajuste y, al contrario, la imagen potenciada de su primer gobierno de la Gran Venezuela en la narrativa electoral de Pérez, terminó generando expectativas de una bonanza económica que no tenía cómo llevar a cabo.

Finalmente, esta esperanza de cambio se rompió y todo desembocó en la tradicional luna de miel que disfrutaban los gobiernos después de unas elecciones hecha trizas. Pérez asumió como presidente el 2 de febrero de 1989 y, antes de que terminara aquel mes, ocurrió El Caracazo.

Sin ser profeta del desastre, Linares precisamente vislumbraba un escenario postelectoral plagado de dificultades por la crisis económica. Ya en medio de la campaña, La crisis golpeaba a millones de venezolanos, algo sencillamente obviado por la fiesta electoral y “democrática”.

Al hacer un balance de la campaña y las votaciones del 4 de diciembre de 1988, Heinz R. Sonntag (1989) sostenía que “lo único no esperado, al menos por los políticos de AD y COPEI”, había sido el alto volumen de abstención. Más del 20% del padrón electoral de entonces no acudió a las urnas, “superando las cifras tradicionales en alrededor de diez puntos”. A juicio de este destacado académico, fallecido en 2015, “se reflejó un descontento de una parte del electorado, tanto con el régimen democrático, en especial su extrema partidización, como con la forma de la campaña”. No hay indicios de que la clase política leyera correctamente esta señal.

Justamente antes de las elecciones, el entonces Director del Centro Gumilla y hoy General de la Compañía de Jesús Arturo Sosa (1988b) advertía en un artículo “No Cambiemos Votos por Barajitas”, que era en esencia un llamado a los venezolanos a votar conscientemente y evitar caer en las trampas del populismo. Llamados de este tipo no tuvieron, entonces, impacto en la opinión pública. La sociedad tampoco parecía interesada en que se hablara de los problemas que nos esperaban.



# Capítulo 12

## TRES ADMINISTRACIONES

### EN RETROCESO ECONÓMICO

Por su inevitable impacto social, la variable económica resulta asunto central para entender el porqué del cambio político drástico que ocurrió en Venezuela con la llegada de Hugo Chávez al poder. La economía nacional parecía dar vueltas desde el Viernes Negro, el 18 de febrero de 1983, en una caída continua sin que hubiese capacidad de reinventarse o recuperarse.

Rafael Caldera accedió a una segunda presidencia prometiendo dos cosas que no pudo cumplir: Por un lado, no tuvo la fuerza política para llevar adelante una largamente postergada y sumamente necesaria reforma institucional profunda, como él mismo lo había indicado en su tristemente célebre discurso tras el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Por el otro lado, el candidato Caldera en las elecciones presidenciales de 1993 había satanizado la noción de un ajuste económico.

Ese segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) logró postergar lo que diversos economistas consideraban a mitad de los años 1990 como inevitable: un ajuste macroeconómico. Sin embargo, en abril de 1996, se anunció el paquete de medidas que se dio a conocer como la Agenda Venezuela (Hernández, 2016, agosto 26). Al inicio de su mandato, Caldera había enfrentado la crisis bancaria que agudizó los desequilibrios fiscales, un asunto que no puede dejarse de lado.

De estas medidas, los símbolos más visibles resultaron ser, en el ámbito fiscal, el aumento en los precios de los combustibles en el mercado interno y el aumento de la tasa del impuesto al consumo suntuario y ventas al mayor; en el ámbito monetario, la liberación, unificación y devaluación del tipo de cambio y el aumento de las tasas de interés (Cañizález, 1996).

Ramón Espinasa (1996), entonces economista jefe en la estatal energética Petróleos de Venezuela (PDVSA), desmenuzaba las razones que obligaban a tomar medidas drásticas en el terreno económico. La inflación había tocado una cifra récord de 135% entre marzo de 1995 y marzo de 1996. Esto hizo entender a muchos

venezolanos que debía aplicarse algún tipo de medidas para evitar que la espiral inflacionaria siguiera en ascenso. Sin embargo, Espinasa notaba que el ajuste era en verdad necesario para revertir problemas estructurales de vieja data en la economía.

En el párrafo siguiente, consistente en una extensa cita de Espinasa, está tal vez la clave de cómo en el alma de los venezolanos se cimentó la idea de que no habría una mejor calidad de vida con el sistema político vigente en los 1990. La última apuesta del viejo modelo resultaría ese segundo gobierno de Caldera, que falló en lo político al no poder reformarlo. Además, mintió en lo económico al aplicar los ajustes a los que había dicho que no recurriría. Todo esto no hacía más que allanar el camino para que un *outsider* asumiera el poder. Ya el pueblo no parecía confiar más en los políticos identificados con el modelo democrático de 1958.

La economía y la calidad de vida de la población se han estado deteriorando desde hace cuando menos tres lustros. El salario real ha caído en un 63 por ciento en los últimos quince años (1980-95). La inversión privada, medida como fracción del ingreso territorial, fue apenas de 4,4 por ciento en 1995, comparada con un 18,1 por ciento en 1980 [...] Como contraparte de la caída del salario, la inversión y el producto interno, los indicadores de pobreza han crecido. El porcentaje de población en pobreza crítica ha crecido de 10 por ciento en 1985 a 47 por ciento en 1995. Este proceso de deterioro del ingreso estuvo marcado por un nivel de inflación promedio anual de 32 por ciento en los últimos quince años (1980-95), comparado con promedios de 7,7 por ciento y de 1,1 por ciento en las décadas de los setenta y sesenta respectivamente. (Espinasa, 1996)

Para entender con cabalidad la profundidad de la crisis que vivía el sistema, Espinasa ayuda a ubicar los problemas económicos de aquella Venezuela de los 1990 en una perspectiva de décadas o lustros, justamente los que precedieron al triunfo electoral de Hugo Chávez. El modelo se había agotado ya en los años 1980 y los sucesos de El Caracazo convirtieron algunos temas en tabú, incluido el ajuste económico o el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual Caldera terminaría acudiendo en su segundo gobierno.

Precisamente, Espinasa recuerda que el mercado petrolero sufrió una caída importante en 1982, lo cual obviamente tuvo impacto en las finanzas de Venezuela; pero la respuesta oficial entonces (como en otros momentos) fue buscar más endeudamiento externo para mantener el nivel de gastos. Venezuela vivió con la misma táctica de no apretarse el cinturón ante la nueva caída del mercado petrolero en 1986. Las decisiones de política económica de no recortar gastos sino de endeudarse o emitir dinero inorgánico, que en su momento tomaron los gobiernos de Luis Herrera Campins o Jaime Lusinchi, terminan siendo muy parecidas a lo hecho por Nicolás Maduro en el periodo 2013-2016.

Por su parte, en otro artículo, Javier Peraza Celis (1996) celebraba la decisión del gobierno de firmar acuerdos con entes multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) o el propio FMI. Para Peraza Celis, las medidas de ajuste debían constituir apenas el primer paso de una profunda reforma del modelo económico venezolano y, en esa tarea de largo plazo, la pericia de los organismos internacionales resultaba necesaria.

Sin embargo dos años después con el triunfo de Chávez, la transformación del modelo no tomó esa dirección, sino que se acentuaron el capitalismo de Estado y el rentismo. Lo que Caldera había aceptado a regañadientes, como era acudir al FMI y ajustar la economía sin populismo, fue desechado una vez que el chavismo ascendió al poder.



Con mucha frecuencia, la mirada del investigador latinoamericano interesado en los temas de democracia se centra de forma casi exclusiva en cómo funciona el sistema político o en el impacto político que tienen las dinámicas económicas de una sociedad.

Entre tanto, para entidades globales como el BM, cuando se analiza la gobernabilidad democrática en un país, no solo se evalúan las variables netamente políticas, sino que se mira al Estado como un todo. Esa mirada le otorga al sistema de administración de justicia un rol destacado. No podemos hablar de democracia plena cuando el sistema judicial es caótico, corrupto o sencillamente injusto.

En Venezuela, el debate sobre el sistema de administración de justicia no es nuevo. Los problemas parecen ser los mismos, solo que agudizados con el pasar del tiempo. Una justicia que no llega, que no tiene capacidad de dictaminar decisiones, termina siendo no justicia. La aprobación en 1995 de una Ley Orgánica de Justicia de Paz servía para hacer un balance del sistema judicial.

Un artículo firmado por Carlos Ponce (1995), corredactor de la ley, cuenta la situación del poder judicial en Venezuela. El texto se titula “Situación del Poder Judicial y la Justicia de Paz”. En 1945 la relación entre número de jueces y número de habitantes en Venezuela era de 1 por cada 3.300. Cinco décadas después, esa cifra se había abultado a 1 por cada 14.300.

La razón terminaba siendo muy sencilla y reflejaba sin duda una de las herencias negativas del sistema político: en 1995 existía el mismo número de jueces que en 1945. Recordaba Ponce que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debe existir un juez por cada 4.000 habitantes para que pueda hablarse de una óptima administración de justicia. Aquella Venezuela, arropada por la erosión democrática, estaba muy lejos del deber ser.

Citando informes del BM, que impulsaba reformas judiciales en América Latina justamente en la década de 1990, Carlos Ponce sostenía:

[...] el sistema judicial en Venezuela está en crisis. Las cortes penales y civiles están enfrentando un panorama serio de acumulaciones, congestión procesal y retardos judiciales con el efecto resultante de la ineficiencia costosa y la deficiente prestación del servicio de administración de justicia. (Ponce, 1995)

En aquel momento, la falta de una administración óptima de los tribunales se reflejaba en procedimientos arcaicos, mecanismos inadecuados de control, duplicación de esfuerzos, malos manejos de archivos, débiles respaldos administrativos y logísticos, así como ausencia de estadísticas judiciales fiables.

De acuerdo con Ponce, según las cifras recopiladas por organismos internacionales en aquel 1995, el periodo mínimo para procesar un simple caso civil en los tribunales de Venezuela requería de un promedio de 783 días laborables, aproximadamente 4,4 veces más del tiempo legal establecido; en materia penal, se requerían 1.136 días de trabajo para procesar un caso, más de 10,4 veces el lapso legal.

En términos generales, el poder judicial venezolano solo daba respuesta a un 14% de los casos que llegaban a los tribunales. Todo ello contribuía con un clima de descrédito: apenas un 7%, según una encuesta de la época citada por Ponce, manifestaba confianza plena en los jueces del país.

La falta de justicia, como sabemos, alimenta la impunidad. En aquel momento, los venezolanos estaban alarmados con la creciente tasa de criminalidad. Una cosa terminó alimentando la otra: la falta de aplicación de justicia disparó los niveles de violencia y delincuencia en el país.

Los estudiosos de la comunicación Marcelino Bisbal y Pasquale Nicodemo (1995) presentaban los resultados de una encuesta que dividía al país en varias partes. Este estudio de opinión servía de base a explicaciones sobre la configuración de una nueva realidad social en Venezuela en un artículo titulado “Frente a la Cotidianidad de la Gente”.

En las grandes ciudades, era notable cómo la tasa de criminalidad era el problema de mayor preocupación los ciudadanos, por encima incluso del alto costo de la vida. Es muy revelador el hecho de que el país vivía un alza en la tasa de inflación, la del segundo gobierno de Rafael Caldera tras la crisis bancaria.

Uno de los aspectos llamativos de aquellas cifras es la ubicación de la pobreza y la marginalidad en esa suerte de *ranking* de principales preocupaciones del

venezolano. En general, aparecía bastante rezagada, llegando a ocupar incluso la última posición en diversas regiones del país entre los 10 principales problemas de la nación.

De forma unánime, los venezolanos reclamaban del Estado que atendiera el problema de tasa de criminalidad, que era la preocupación en todas las regiones del país, según este sondeo. Aquello no podría resolverse, entre otras razones, porque el sistema de justicia había colapsado ante la mirada impasible de la clase política.



# Capítulo 14

## ...Y EL CAMBIO TENÍA QUE SER RADICAL

El segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999), si bien le imprimió una dosis de calma a un país que venía en una sucesión de revueltas y confrontaciones, en la práctica terminó siendo una oportunidad perdida: los actores tradicionales no plasmaron y condujeron el deseo de cambio que latía en la población de Venezuela.

Caldera logró un objetivo importante: sortear la inestabilidad que heredó y culminó su periodo en los cinco años que le correspondían. En medio de magros precios del petróleo, impuso con éxito un programa de ajustes económicos al mejor estilo suyo: llevarlo a cabo luego de decir que no lo haría.

Ese Caldera que gobernó en los últimos años del siglo XX era un hombre bastante mayor: cumplió 80 años en 1996, hacia la mitad de su mandato; llegó a la presidencia en unas disputadas elecciones presidenciales; para ser candidato por séptima ocasión en las elecciones de 1993 había optado por sacrificar a su partido político, COPEI; y, lo más simbólico, aquel Caldera que ocupó la presidencia en 1994 era producto en buena medida del Caldera que había resucitado políticamente en 1992 con un encendido discurso que –palabras más palabras menos– le daba un marco de justificación a la intentona golpista de Hugo Chávez en 1992.

El Caldera candidato prometió reformas al sistema que luego no pudo cumplir. El Caldera presidente se mostraba jugando dominó con Luis Alfaro Uceró, el tótem de poder entonces de AD. Eran dinosaurios políticos que se resistían a desaparecer de la escena y, con su obstinación, no hicieron otra cosa que alimentar, junto a muchas otras variables, la olla de presión social que clamaba por un cambio desde los 1980.

Como sostiene Arturo Almandoz Marte (2020), ya a comienzos de la década de 1980 estaba claro que en Venezuela el modelo de Estado corporativo y rentista se había agotado.

En la imaginación popular, Caldera fue la última esperanza de que los cambios vinieran de los propios actores políticos tradicionales. Al no cumplirse la promesa del cambio, la balanza terminó inclinándose al más *outsider* y radical entre las opciones de entonces, Hugo Chávez.

La campaña electoral de 1998 estuvo dominada por una idea: la crisis terminal del sistema político venezolano exigía cambios “drásticos”, esto es, cambios que debían buscarse fuera de los canales regulares del sistema político. Esto lo notó José Ignacio Hernández (2019, enero 3).

Además, la percepción de los venezolanos sobre el sistema político era bastante negativa en aquel año electoral. En una encuesta realizada en mayo (Galizia, 1998), resaltan opiniones en este tono: “hay mucho poder en este país concentrado en muy pocas manos” (67% estaba de acuerdo) y “el gobierno debería ayudar más a la gente pobre aunque eso signifique más endeudamiento” (61% ciento de respaldo).

Durante los meses finales de 1998, en publicaciones como la revista *SIC*, la discusión pública reflejaba con absoluta claridad el tectónico cambio político-institucional que se estaba produciendo. En los meses previos a las elecciones presidenciales de aquel año, se hicieron una serie de maniobras electorales con las que se buscaba cerrarle el paso al candidato Hugo Chávez.

Finalmente, se impuso el deseo de cambio que prevalecía entre los venezolanos. El modelo político implantado en 1958 estaba agotado. El bipartidismo de AD y COPEI, rechazado por la población, y la situación económica no favorecían a los más pobres. Dos meses antes de los comicios presidenciales, el editorial de la revista *SIC* sostenía que votar por Chávez constituía una apuesta que no tenía sustento en un proyecto coherente y se basaba principalmente en una figura mesiánica (Centro Gumilla, 1998).

Como lo reflejan los capítulos precedentes, los deseos de cambio no eran nuevos. El ánimo de la opinión pública le pasaba factura a una crisis que se había iniciado la década anterior. Lo que empezó siendo una coyuntura económica al iniciarse los 1980, era una crisis de legitimidad y de gobernabilidad en 1998. Esto revelaba sin duda un cambio radical en el funcionamiento de la sociedad, de la economía y de las relaciones políticas.

Siendo cónsono con el modelo democrático que estaba moribundo y planteando el horizonte de una transición, el Centro Gumilla (1998) entonces identificaba la necesidad de construir consensos: un nuevo pacto político y social para poder conducir con éxito la travesía del cambio. Por ejemplo, sugería que el

nuevo presidente (ya en octubre de 1998 todo indicaba que sería Hugo Chávez) debía en primera instancia construir una base de estabilidad política: “[p]ara lograrla, es imprescindible la convocatoria de los diversos estamentos sociales y la recuperación de la confianza tanto de los actores económicos, como sociales y políticos”.

El provincial de la Compañía de Jesús en aquel momento y una voz autorizada en el análisis sociopolítico, Arturo Sosa (1998), planteaba sin ambages la necesidad de encauzar el deseo de cambio:

Esta nueva fase de nuestra historia política, comienza por el proceso de establecer las condiciones básicas de la convivencia en la sociedad venezolana. Sobre ella se sustentan la estabilidad política dentro de la cual se genera el desarrollo social sustentable del país y la gobernabilidad para poder ir tomando las decisiones que lo hagan realmente posible en el corto y mediano plazo. (Sosa, 1998)

Sin embargo, como es conocido, la dirección que le dio luego Hugo Chávez a este deseo de cambio, desde la presidencia, apuntó en un sentido contrario. En realidad, podría decirse que terminó dinamitando las ya menguadas condiciones básicas de convivencia. Introdujo una dinámica de polarización y confrontación que a su vez pareció rendirle frutos en términos electorales a lo que en aquel momento se autodefinía como Revolución Bolivariana.

Según Sosa, el país vivía un momento singular de su historia democrática, lo cual representaba un desafío para el liderazgo político que emergía gracias a ese deseo de cambio que se respiraba en ese 1998:

Se trata de convertir el deseo de cambio, que caracteriza hoy las reacciones de la mayor parte de la población, en fuerza transformadora de las actitudes personales, las relaciones primarias, la conciencia política y las instituciones a través de las cuales se regula la vida común.

Sosa, en particular, planteaba la necesidad de reconocer los efectos positivos que había dejado el tránsito de un gobierno centralizado y presidencialista a uno descentralizado, regional (estados) y local (municipios), producto del proceso de reformas que se iniciaron en la segunda mitad de la década de los años 1980. Se refería a la creación de la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE) en 1984, uno de los aspectos positivos del legado de Jaime Lusinchi (1984-1989). Dicha comisión puso en evidencia, en palabras de Almandoz Marte, la obsolescencia de un hipertrofiado Estado rentista, corporativo y centralizador.

La historia que se vivió es conocida, especialmente con la entrada del siglo XXI: el gobierno de la Revolución Bolivariana caminó en sentido contrario. Con ello, ha producido una recentralización que caracteriza la vida institucional en Venezuela bajo el chavismo.



Nunca está de más recordarlo, el Hugo Chávez que llegó al poder en diciembre de 1998 no lo hizo solamente por su capacidad y estrategia, que sí eran significativas; sino también debe ponerse en relieve lo que podríamos catalogar como el suicidio de la clase política de entonces. En aquel momento Francisco José Virtuoso, actual Rector de la UCAB y entonces Director del Centro Gumilla, lo llamó el viaje al fondo del pragmatismo.

En diciembre de 1998, cuando se marcaba un parteaguas en la vida democrática de Venezuela, la gran noticia era sin duda que Hugo Chávez alcanzaba la presidencia con una de las votaciones más altas registradas por sistema electoral establecido en 1958. Junto a esto, algunos analistas cuestionaban los malabarismos electorales de último momento que daban los partidos que habían sostenido el modelo democrático, AD y COPEI.

Henrique Salas Römer, del partido Proyecto Venezuela (centroderecha), obtuvo el segundo lugar en aquellas elecciones. Sobre el particular, en su momento la historiadora Margarita López Maya observó:

Mientras, los partidos ejes del tradicional bipartidismo, Acción Democrática (AD) y socialcristiano Copei, después de algunos episodios poco comprensibles desde la racionalidad política, abandonaron la carrera para apoyar la candidatura de Salas Römer, hasta cinco días antes su adversario político. (López, 1999)

Aquel 1998 debe ser recordado no solo por el ascenso vertiginoso de Hugo Chávez hasta llegar a la presidencia, especialmente después del desplome en las encuestas de la candidata Irene Sáez, de COPEI, desde agosto de aquel año. Unos subieron y otros cayeron, literalmente. Fue 1998 un año que dejó en claro el agotamiento que vivía la clase política tradicional e hizo también muy evidente la incapacidad que tenía la élite para reinventarse y responder a crecientes demandas sociales por un cambio.

En su artículo “Viaje al Fondo del Pragmatismo”, Francisco José Virtuoso (1998b) revisaba lo que era un juego político excesivamente concentrado en alcanzar o mantener el poder, sin conexión con las exigencias de la sociedad. En tono crítico, Virtuoso cuestionaba ese pragmatismo excesivo que había sido la constante en medio de una campaña electoral en la que parecía haberseles agotado a las maquinarias partidistas tradicionales el combustible de emoción y conexión popular.

El tono crítico dado al tema hasta se reflejó en la ilustración utilizada para el artículo: un camaleón reflejaba el cambio de colores que se producía en el escenario político. Esto resultaba muy difícil de digerir.

El partido La Causa R (izquierda laborista) había apoyado a Irene Sáez, también COPEI. El Movimiento al Socialismo (MAS [centroizquierda]), a contracorriente de las directrices de sus fundadores Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez, se sumó al “chiripero”<sup>5</sup> del chavismo inicial. Mientras tanto en AD, se optó por el hombre que controlaba la maquinaria pero sin carisma alguno: Luis Alfaro Uceró. Ya en la recta final de la campaña, se produjeron otras acrobacias, pues COPEI y AD terminarían apoyando a Salas Römer, de Proyecto Venezuela y en aquel momento gobernador del Estado Carabobo, todo esto de forma ostensiblemente improvisada.

En medio de la campaña, cuestionaba Virtuoso:

Al margen de las bondades y vicios de la actual lista de candidatos a la Presidencia de la República, lo que sorprende es que la razón fundamental por la que tal o cual organización política selecciona a un miembro de esa lista es el cálculo utilitario y pragmático del beneficio electoral, prescindiendo de la tradición ideológica, de la identificación entre candidato y proyecto nacional y hasta de la pertenencia a la organización. Lo único que parece prevalecer como razón de fondo es el balance de lo que sostienen las encuestas que los medios de comunicación se encargan de publicitar (Virtuoso, 1998b).

Todo este “Juego de Tronos” de entonces simbolizaba un problema mucho mayor y el cual efectivamente quedaría en evidencia en los meses posteriores: los partidos tradicionales y las organizaciones políticas que gravitaban alrededor de ellos habían perdido su capacidad de agregar, canalizar y expresar los intereses y demandas de la población venezolana. Con ello, en aquel año, no solo estaba en

---

5 N de E: “Chiripero” = “montón de chiripas (cucarachillas de moca, jates, baratas, chimenes)”, fue la metáfora despectiva utilizada en jerga política venezolana que denotaba multitud de minorías de varios orígenes partidistas o no, sociales y comunitarios durante la campaña de Rafael Caldera en 1993. Este mismo candidato adoptó la expresión como halago a su diversa sección transversal de seguidores, gracias a quienes llegó de nuevo a la presidencia. Esta demografía de electores desafectos y de múltiples orígenes fue capitalizada por Hugo Chávez en 1998.

juego la presidencia, sino la propia legitimidad y la capacidad de representación de la clase política tradicional.

Desde mediados de 1980, en el país venía produciéndose un paulatino proceso de desdemocratización en medio del cual la clase política no tuvo capacidad de reinventarse. Es un clásico ejemplo, en la perspectiva de Charles Tilly (2007) de cómo los gobernantes y las élites viven una crisis de régimen debido a las amenazas a su poder planteadas por el entorno.

Lamentablemente, todo ese proceso acelerado de destrucción institucional no abrió un espacio de autocrítica y revisión interna dentro de los partidos en aquel momento. Se llegó incluso al exabrupto de que, a escasos días de las elecciones, AD expulsó a Alfaro Ucero de sus filas porque se negó a declinar sus aspiraciones presidenciales a favor de Salas Römer. Sencillamente se jugaba a un pragmatismo desesperado.

Sostenía Virtuoso:

Pareciera que vamos hacia la destrucción de los actuales partidos políticos. Por su reacción pragmática y utilitarista hasta sus últimas consecuencias, están convirtiéndose en maquinarias que solo buscan conquistar el poder a costa de cualquier precio. Esta tendencia es suicida, porque profundiza su deslegitimación y desdibuja aún más su credibilidad.

Tal perspectiva sobre 1998 no cambió de forma sustantiva. La maquinaria electoral del chavismo, especialmente después de la reelección de Chávez en 2006, profundizó un modelo utilitarista por medio del cual el dedo del líder era el que quitaba y ponía aspirantes a cargos de elección pública. Sin elecciones internas genuinas en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desde su fundación en 2007, el transitar del chavismo electoral ha estado mediado por el reparto de la renta petrolera.



# Capítulo 16

## BOOMY RECESIÓN PRECEDIERON AL CHAVISMO

Los ciclos de expansión del gasto público, seguidos de recesión económica, se repitieron en Venezuela entre el post *boom* petrolero (1980) y la llegada al poder del chavismo, prácticamente con el despuntar del siglo XXI. El liderazgo nacional no logró sacar al país de esa lógica perversa. A fin de cuentas, siempre se estuvo esperando que llegara otro maná, otro *boom* petrolero. En esta dinámica de altas expectativas y profundas recesiones también quedó inmersa la sociedad venezolana.

Acá están posiblemente algunas de las claves que ayudan a explicar el triunfo electoral de Hugo Chávez en ese recesivo 1998.

El economista Luis Zambrano Sequín (1998) describió en breves líneas lo que había sido una constante en materia de política económica en Venezuela en las últimas décadas del siglo XX: episodios de enormes *booms* sucedidos por fases profundamente recesivas son algo típicamente característico de la economía venezolana, dado su carácter petrolero y su ya crónica debilidad institucional (Sermeño 2021). No en vano, se ha calificado a Venezuela como uno de los países más volátiles del mundo.

La volatilidad económica, con un notable impacto en la vida social, terminó cimentando una volatilidad política. La desdemocratización venezolana tiene explicaciones, entre otros factores, en aquella crisis cíclica que vivió el país a partir del Viernes Negro y la consecuente falta de respuesta integral por parte del liderazgo. “Correr la arruga”, como se suele decir popularmente, fue lo que distinguió a muchos que tuvieron mucho poder en aquella era.

A mitad de 1998, en medio de la campaña electoral que terminaría llevando a Hugo Chávez por primera vez a la presidencia, Venezuela atravesaba una situación económica que se catalogaba de otro post *boom*. Por ejemplo, sostenía Zambrano Sequín que, entre 1996 y 1997, el país había vivido una importante expansión del gasto privado; pero fundamentalmente se había expandido el gasto público en medio

de un clima positivo. Sin embargo, en 1998 se produjo un nuevo deterioro de las expectativas económicas en el contexto electoral de ese año.

Aquel ciclo no parecía tener fin. El artículo mencionado de 1998 revelaba que el gobierno de Rafael Caldera no había tomado previsiones tras el ajuste de 1996, “contando que el boom [*sic*] había llegado para quedarse”, llevando al país a una dinámica de incrementar el gasto público “alimentado por los ingresos extraordinarios petroleros y los provenientes de una reanimación de la economía interna”.

Tal imprevisión, que resultaba inexplicable tras la experiencia nacional, colocó de nuevo al país en una dinámica recesiva en 1998. Desde nuestro punto de vista, esto también contribuiría con la consolidación de Hugo Chávez como alternativa de cambio, dado su arraigo en los sectores más pobres.

Zambrano Sequín señala otra característica que parece inherente al ejercicio del poder político y el manejo de las finanzas públicas, que además ha estado muy presente en la historia democrática de Venezuela: “[c]omo también suele suceder en Venezuela, los shocks positivos son asumidos como permanentes, mientras que a los negativos siempre se les considera transitorios. Por ello durante el boom [*sic*], se generan las causas de la próxima recesión”.

Dos décadas después al hacer un balance de la economía venezolana en la segunda mitad del siglo XX, justamente este autor, ahora entrevistado por Hugo Prieto (2019, octubre 6), enfatiza la ausencia de liderazgo político como el mal de la sociedad venezolana. A su juicio, ello explica lo que fue una pérdida de oportunidades brindadas por los ingresos petroleros desde los 1970.

Entretanto en aquel 1998 que traía vientos de cambios, la revista *SIC*, publicación del Centro Gumilla y de la Iglesia Católica, dejaba en claro que no compartía el entusiasmo que empezaba a rodear la candidatura de Hugo Chávez. Hablamos de mediados de ese año, cuando aún Irene Sáez encabezaba las encuestas.

En una política consistente de compromiso con los más pobres que había definido el Centro Gumilla (1998a), la revista trataba de brindar comprensión y perspectiva al fenómeno en gestación. Chávez estaba calando en el sector popular con su discurso de cambio radical: “[n]o creemos en Chávez; pero sí entendemos las razones de los chavistas”. Con esta frase zanjaba *SIC* su postura ante el naciente movimiento a favor del exteniente coronel devenido en candidato.

Se recordaba en esa publicación que Chávez había dado muestras de ser “un tipo echao pa’ lante” y que tenía una clara capacidad de absorber como una esponja

lo que le proponían asesores y su equipo de colaboradores, “pero esas cualidades no bastan ni mucho menos para conducir la República [...] además no tiene un equipo consistente ni puede articularlo para el año que viene. Por eso para nosotros – evaluaba *SIC* – no es un candidato creíble”.

Seguidamente, el editorial repasaba la lista de razones que alimentaban el respaldo popular hacia Chávez. Identificaba, más que a pobres, a los excluidos ya que no se habían beneficiado de las bonanzas petroleras, no eran tomados en cuenta por los partidos políticos y además debían sufrir los rigores del ajuste económico.

Este texto culminaba llamando a las élites (políticas, económicas y mediáticas) a tomar en serio el estado de ánimo que se cultivaba en el país y a darle respuestas orgánicas y verdaderas a la población. Sin embargo, vale acotar que lo ocurrido en aquella campaña apuntó en una dirección contraria. Medio año antes de que triunfara Chávez, Francisco José Virtuoso (1998a) señaló que los partidos que habían dominado la escena desde 1958, AD y Copei, sencillamente habían optado por la estrategia del avestruz, no enfrentaron el desafío que les exigía aquel periodo de cambio.

El liderazgo político, que no supo conducir al país en medio de la bonanza de las décadas anteriores, tampoco tuvo la capacidad de interpretar y dar respuesta al momento que vivía la sociedad venezolana en 1998.



En octubre de 1998 las cartas ya estaban echadas. Al menos, ese era el aire que se respiraba en Venezuela: parecía inevitable el triunfo electoral de Hugo Chávez; la candidatura de Irene Sáez se había desinflado tras recibir el respaldo de COPEI y, aún en aquellos días, el veterano Luis Alfaro Uceró se empeñaba en ser el candidato presidencial de AD. La vieja clase política no había entendido el deseo de cambio entre los venezolanos.

Venezuela se encaminaba, a ciegas, a un cambio político e institucional de envergadura. Decimos a ciegas porque, si bien Chávez en campaña ya había dejado claro de que pondría patas arriba al sistema democrático de 1958, ni él ni sus colaboradores cercanos tenían la capacidad de explicar cuáles serían las decisiones del gobierno de la Revolución Bolivariana una vez en el poder.

En los meses previos a las elecciones presidenciales de aquel año, celebradas el 6 de diciembre, se hicieron una serie de maniobras electorales con las que se buscaba cerrarle el paso al candidato *outsider* Hugo Chávez. Finalmente se impuso el deseo de cambio que prevalecía entre los venezolanos: el modelo político instaurado en 1958 estaba agotado; el bipartidismo, rechazado por la población; y la situación económica, desfavorable a los más pobres.

Como lo indicaba un editorial de la revista *SIC* (Centro Gumilla, 1998b), había deseos de cambio entre los venezolanos. Sin embargo, se trataba de una apuesta que no tenía sustento en un proyecto coherente. Solo se sustentaba principalmente en una figura mesiánica.

Aquellos deseos de cambio entre los venezolanos no eran cosa nueva. El ánimo de la opinión pública le pasaba factura a una crisis que se había iniciado la década anterior. Lo que empezó siendo una coyuntura económica a inicios de los años 1980 había mutado en una severa crisis de legitimidad, de gobernabilidad.

Los venezolanos, al favorecer a Chávez, viraban hacia un cambio radical en el funcionamiento de la sociedad, de la economía y de las relaciones políticas.

Tal como sostenían Luis Lander y Margarita López Maya (1999), Chávez terminó siendo la respuesta ante una crisis sistémica, que había tenido como respuesta de los partidos tradicionales, la “neutralización de casi todas las iniciativas de cambio político que venían siendo propugnadas por actores emergentes y la ciudadanía en general desde los años 1980”.

Como muchos actores sociales y políticos de entonces, la revista *SIC* mantenía la esperanza de que, una vez en el poder, el chavismo construiría para Venezuela un nuevo pacto político y social. Visto en retrospectiva era obviamente un error: desde temprano, Chávez no comunicaba interés en construir tal pacto; muy por el contrario, se manifestaba en contra de cualquier tipo de acercamiento a otros que no le rindieran admiración y pleitesía.

El mesianismo no fue consecuencia sino origen en un nuevo modelo. Con líderes que se sienten predestinados, difícilmente se puede alcanzar un acuerdo que incluya puntos de vista diferentes a los suyos. En abril de 1998, cuando Chávez aún no estaba al frente de las encuestas electorales, este autor acompañó al entonces candidato todo un día en labores periodísticas para escribir un artículo por encargo de una publicación de Perú. Ya que el ángulo era describir un día en la vida de Chávez, aquel encuentro extenso dejó la impresión de que “El Comandante” se creía un enviado de Dios.

El jesuita y doctor en ciencia política Arturo Sosa trazaba una hoja de ruta en un artículo que tituló “Transición y Constituyente: después de las Elecciones”. Allí, por un lado, identificaba el aire de cambio que se respiraba en el país; pero al mismo tiempo advertía sobre la necesidad de encauzarlo.

Esto era lo que sostenía Sosa, meses antes de que Chávez llegara al poder:

Esta nueva fase de nuestra historia política, comienza por el proceso de establecer las condiciones básicas de la convivencia en la sociedad venezolana. Sobre ella se sustentan la estabilidad política dentro de la cual se genera el desarrollo social sustentable del país y la gobernabilidad para poder ir tomando las decisiones que lo hagan realmente posible en el corto y mediano plazo. (Sosa, 1998)

La dirección que le dio luego Hugo Chávez a este deseo de cambio, desde el poder, apuntó en un sentido contrario. En verdad, podría decirse que terminó dinamitando las ya menguadas condiciones básicas de convivencia, con una dinámica de polarización y confrontación que a su vez pareció rendirle frutos en términos electorales.

Según Sosa, el país vivía un momento singular de su historia democrática, lo cual representaba un desafío para el liderazgo político que emergía gracias a ese deseo de cambio que se respiraba en ese 1998.

Se trata de convertir el deseo de cambio, que caracteriza hoy las reacciones de la mayor parte de la población, en fuerza transformadora de las actitudes personales, las relaciones primarias, la conciencia política y las instituciones a través de las cuales se regula la vida común”, sostenía Sosa, para quien el proceso constituyente podría ser la hoja de ruta para esto que él planteaba.

La reflexión de Sosa, como buena parte de la originada desde el Centro Gumilla en los años 1980 y 1990, había sido crítica del proceso de erosión que vivió el sistema democrático. En diversas ocasiones, desde esta fundación también se interpeló al liderazgo bipartidista (AD-COPEI) que condujo al país en el periodo 1958-1998.

De forma explícita, como un bien que debía conservarse y profundizarse, Sosa planteaba la necesidad de reconocer los efectos positivos que había dejado el tránsito de un gobierno centralizado-presidencialista a uno descentralizado regional (estados) y local (municipios), producto del proceso de reformas que se iniciaron en la segunda mitad de la década de los años 1980.

Tal como lo ha sintetizado Carlos García Soto (2018, enero 17), una vez que Chávez asumió el poder, aquel proceso constituyente de 1999 no solo se hizo al margen de la constitución que estaba vigente (la de 1961) sino que se caminó en sentido contrario al de las advertencias de Sosa.

“No solo redactó una Constitución centralista, militarista y estatista, sino que concentró en sí todos los poderes del Estado”, sostiene García Soto. En términos prácticos, la Revolución Bolivariana, que en 1998 encarnaba el deseo de cambio entre los venezolanos, terminó produciendo un modelo estatista y una recentralización que caracteriza la vida institucional en Venezuela en los años del chavismo.



# Capítulo 18

## LA DESIGUALDAD COMO FRACASO

La sociedad venezolana parece estar signada por ciclos perversos. Salir de la pobreza sigue siendo para la mayoría de la población un enorme desafío, mientras que el Estado sigue dando vueltas repitiendo políticas erradas. Fracasaron tanto el modelo democrático de 1958, con énfasis en los derechos políticos, como el modelo de la llamada Revolución Bolivariana, con el estandarte de la justicia social.

Con el telón de fondo de un acentuado proceso de desdemocratización en Venezuela, el fracaso social de la democracia representativa le abrió las puertas a un modelo de discurso socialista pero cuyos resultados no han significado otra cosa que pobreza y desigualdades más profundas. Cualquier proyecto de reconstitución democrática en Venezuela deberá ir de la mano de la reconstrucción del tejido social. Una democracia política, un estado de derecho que existan sobre una sociedad empobrecida estarán destinados a fracasar.

Al iniciarse el gobierno de Hugo Chávez, la ya fallecida psicóloga, académica, diplomática y política venezolana Mercedes Pulido de Briceño (1999) realizó un balance social que, visto más de dos décadas después, era una suerte de profecía: “la desigualdad creciente fragmenta la sociedad y abona el resentimiento”. Así han vivido millones de venezolanos, especialmente en el ocaso de la Revolución Bolivariana.

Visto a la distancia, aquello tenía un sentido político, además de opinión experta en temas sociales. No debe olvidarse que Chávez accedió al poder sobre una narrativa de resentimiento. Sostenía Mercedes Pulido que Venezuela venía atravesando años de empobrecimiento. “La pobreza que para 1982 afectaba al 27% de la población, al iniciarse 1998 se constata que el 68,7% de los venezolanos no tiene ingresos para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias”.

La crisis del modelo rentista tuvo un impacto en largos años de decrecimiento económico y deterioro social. Aquel fue el caldo de cultivo causante del malestar de los venezolanos que bien canalizó Chávez como candidato, especialmente después

del quiebre de credibilidad de Irene Sáez en agosto de 1998, desdibujada como una opción real de cambio luego del apoyo del partido tradicional COPEI a su candidatura.

Volvamos a la situación social de 1998 presentada por Pulido de Briceño: el escaso desarrollo había afectado fundamentalmente a los estratos de clase media; la educación perdió importancia como medio de movilidad social; los jefes de hogar con educación superior y en situación de pobreza habían pasado de 1,5% en 1980 a 4,7% en 1997.

Cifras como estas pueden ver mínimas en comparación con la situación generada por el acelerado empobrecimiento iniciado en 2014-2015. A la pobreza y la desigualdad acentuadas por el chavismo y sus políticas erradas de controles y expropiaciones, deben sumárseles la opacidad y la falta de datos oficiales, rasgos propios de la gestión de Nicolás Maduro, quien profundizó las prácticas ya implementadas por Hugo Chávez. Esto constituye un ejemplo de los márgenes de arbitrariedad en el desempeño de los poderes públicos, así como del debilitamiento de los esquemas que regulan las instancias del Estado (Sermeño, 2021)

Mercedes Pulido de Briceño había encabezado el Ministerio de la Familia entre 1994 y 1996 durante el gobierno de Rafael Caldera (1994-1999). Sin embargo, ello no le impidió publicar su investigación de 1998, que se sustentaba en su totalidad en las cifras oficiales (no maquilladas) generadas por la propia administración pública, sin importar que la administración de su jefe y presidente quedara justificadamente mal parada.

Una cifra que alarmaba con razón, tanto a Mercedes Pulido como a otros expertos en políticas sociales en aquel momento, era el rezago que tenía el salario mínimo frente a la canasta alimentaria familiar. Según cifras del Centro de Documentación y Análisis (CENDAS), antes de que Chávez asumiera la presidencia se necesitaban 2,5 salarios mínimos para que un trabajador pudiese alimentar dignamente a su familia de cinco miembros.

Con la misma metodología de fines del siglo XX, el propio CENDAS, estableció que, al cierre de 2020, un trabajador necesitaba casi 270 salarios mínimos para poder alimentarse él y a los suyos. Tal brecha de pobreza hace inviable cualquier proceso redemocratizador.

Otro indicador que generaba inquietud era la inflación. Según las cifras oficiales, el alza había sido de 30% anual en aquel 1998. Hoy, ante la ausencia de cifras oficiales, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) estimó que la inflación

anual se ubicó en 3.713% en 2020. Además, debe recordarse que ese año fue el de menor alza de precios en el ciclo hiperinflacionario registrado en Venezuela a partir de 2017. Sin duda, en el contexto de 1998, las cifras resultaban preocupantes; pero en la Venezuela del siglo XXI son sencillamente escandalosas.

Aunque se han generado debates y propuestas sobre cómo derrotar la hiperinflación (Guerra, 2018, abril 6), el manejo de las variables económicas por parte del gobierno de Nicolás Maduro es principalmente político. Por eso, no le es una prioridad lograr equilibrios en la economía.

Tras una dilatada experiencia como alta funcionaria en dos gobiernos democráticos, Pulido de Briceño les daba una sola recomendación a los protagonistas del nuevo ciclo que se iniciaba en aquel 1999. Era –y sigue siendo– la necesidad de acabar con el clientelismo en la relación de la sociedad con el Estado. Los acontecimientos nacionales no dejan margen a la duda: se exacerbó lo que ya era un mal del modelo democrático de 1958.



# Capítulo 19

## UNA DEMOCRACIA POPULAR

### IMPUESTA “DESDE ARRIBA”

Corría el año 1999 y, en medio de la efervescencia y el entusiasmo generados por Hugo Chávez y sus propuestas de rehacer prácticamente el país como un todo, se llevaba adelante la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Estábamos ante una de las principales banderas electorales del naciente chavismo en el poder.

Hugo Chávez apenas había jurado como presidente el 2 de febrero de aquel año. Tal como señalaron en su momento Margarita López Maya y Luis Lander (2000), su llegada a la presidencia se consolidó con 3,6 millones de votos (36% de abstención), pero luego la aprobación de la nueva constitución obtuvo 3,3 millones de votos y una abstención ligeramente superior al 55%. Se cuestionaban los autores sobre la posibilidad que tendría la popularidad de Chávez para apalancar y así impulsar una reforma a fondo del sistema democrático.

Antes de llegar a la votación aprobatoria de una nueva constitución en diciembre de 1999, el teólogo jesuita Pedro Trigo (1999) advertía sobre el peligro de construir “desde arriba” un nuevo modelo democrático. Se insistía desde el chavismo inicial en acabar con la “democracia representativa”, ya que esta servía a las élites, y abogaban por la necesidad de una “democracia participativa”.

En verdad, lo que ocurrió al acabarse el corsé institucional de 1958 fue la aceleración de un proceso de desdemocratización. Las falencias democráticas del modelo democrático 1958-1998 recibieron como respuesta una profundización de sus males.

“Proceso Constituyente de una Democracia Popular”, así tituló Trigo un artículo de análisis cuando aún faltaba medio año para que se aprobara la nueva carta magna. La ausencia de mecanismos genuinos para la participación popular le hacía advertir que no se alcanzaría con éxito una profundización democrática en Venezuela.

Para Trigo, la discusión constituyente corría el gran riesgo de que la letra constitucional terminara siendo impuesta “desde arriba”, desde el Estado; para analistas como López Maya y Lander, el desafío era separar la popularidad de Chávez de mecanismos sociales y participativos favorables a un cambio democrático. Lo que ocurrió en verdad fue que Chávez terminó saturando la discusión constituyente y, a fin de cuentas, en muchos aspectos se hizo una constitución a la medida de sus deseos y expectativas.

Trigo abogaba para que la carta magna que naciera en aquel 1999 fuese producto de un genuino proceso participativo. Proponía que se construyera “desde abajo”, con el pueblo y sus organizaciones sociales, vecinales y de base.

Trigo repasaba históricamente lo que se entiende por “democracia popular”, haciendo especial énfasis en la experiencia latinoamericana sobre este término surgido en el socialismo real de Europa del Este. Para el autor, el enorme desafío de la Venezuela en proceso constituyente era generar espacios, mecanismos y prácticas participativas como génesis de una nueva carta magna, también como nueva praxis del quehacer político. Sin duda era un desafío mayúsculo, ya que la mera imposición de una constitución desde el poder terminaría fracasando, alertaba tempranamente Trigo.

A partir de experiencias latinoamericanas y socialistas de “democracia popular”, Trigo les indicaba a los actores partidistas de la Venezuela de 1999 que debían estar conscientes de las desviaciones ya conocidas: “[s]e llamó al pueblo a participar en la ejecución de lo que no había diseñado, ni gerenciaba, ni controlaba. En nombre del pueblo se negó al pueblo como sujeto, se le sustituyó”.

Para Trigo, pese al uso distorsionado que había tenido históricamente el concepto de “democracia popular”, este era el modelo necesario para lograr genuinamente una inclusión de los más pobres y sus diferentes esquemas de organización en la discusión de los asuntos públicos. Hacerlos protagonistas de tales asuntos había sido —era en aquel 1999 y sigue siendo— el desafío político central en Venezuela. Este teólogo sostenía:

El pueblo no puede ser mero destinatario de dádivas o mero ejecutor de lo que ni concibe, ni gerencia, ni controla. Si el gobernante se limita a llamar al pueblo para que colabore con él, si las organizaciones no estatales se limitan a encuadrar al pueblo desde paradigmas ajenos a él, nunca llegará el pueblo a ejercer la ciudadanía. (Trigo, 1999)

Dada la naturaleza del Estado en Venezuela, la sujeción del pueblo y las propuestas que ya despuntaban del proceso constituyente en la Venezuela de 1999,

aún antes de que se aprobara una nueva carta magna, Trigo sostenía que esta no podría dar a luz una democracia popular en un sentido genuino.

Para el teólogo, en Venezuela la lógica poder-pueblo estaba “disfrazada” de dos formas para impedir un verdadero ejercicio democrático de los más pobres:

[...] mimetizándose con él (con el pueblo) hasta aparecer como su epónimo que lo condensa en sí, pero para que él haga lo que yo quiero (esa es la esencia del populismo), o por otro lado, haciéndole creer (mediante una mayéutica tramposa) que sale de él lo que en realidad yo tenía previsto.

Teniendo tal contexto, Trigo veía imposible que surgiera un modelo democrático participativo del proceso constituyente de 1999. Es más, lanzaba una frase que podríamos describir como premonitoria en la actualidad: “[s]in la iniciativa popular nada se sostendrá”.

Aquello que ya nació impuesto desde arriba tuvo unos primeros años que diversos analistas consideraron positivos en términos de la participación popular en diversos ámbitos. La elección de Chávez en 2006, como apunta López Maya (2011), y su empecinado intento de imponer el modelo del Socialismo del siglo XXI, fosilizaron las dinámicas participativas en ciernes.

A partir de entonces, “el poder popular” pasó a entenderse como una denominación del Estado, un enunciado cooptado por un chavismo apropiado de las instituciones y por un Chávez con intenciones manifiestas de perpetuarse en el poder.



# Capítulo 20

## UN DÉBIL MARCO INSTITUCIONAL

### DEL ESTADO COMO PROBLEMA

Al avanzar el año 1999, en medio de un acelerado proceso de transformaciones institucionales encabezadas por Hugo Chávez, recién asumida su presidencia, se abrió campo para un intenso debate a modo de intento de balance de los 40 años del sistema democrático en Venezuela.

Había una clara necesidad de explicar qué había ocurrido en el país, ya que Chávez y su Revolución Bolivariana simbolizaban una clara ruptura. En aquellos análisis, se enfatizaba en los yerros tempranos del chavismo en su ejercicio del poder, reproduciendo los errores que precisamente habían debilitado al bipartidismo de 1958-1998.

Venezuela daba vueltas en torno a sus problemas de siempre. La irrupción de un liderazgo personalista había respondido a unas instituciones fallidas. Justamente esto profundizaría a fin de cuentas aquel mal.

En un artículo titulado “Instituciones, Ciudadanía y Sociedad Civil: ¿Qué Hemos Aprendido o Desaprendido en Estos 40 Años?”, Luis Gómez Calcaño (1999) apuntaba en esta dirección.

Gómez Calcaño identifica tempranamente tres rasgos en el naciente ejercicio del poder por parte del chavismo que, a su juicio, dificultarían una verdadera reconstrucción institucional en Venezuela. Desde el inicio, se encaminaba a repetir esquemas fallidos del periodo 1958-1998. Para este estudioso vinculado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), las débiles instituciones gubernamentales eran la clave para explicar lo que comenzaba a germinar en el país durante ese año 1999.

Un primer rasgo indicado era el mesianismo de Chávez, el cual terminó por suplantarse un modelo institucional fallido (Gómez Calcaño, citado por Prieto, 2020, junio 7). La persona por encima de la institución fue una práctica común en aquel momento. Desde las altas esferas del poder, se pensaba que colocar a nuevas personas,

“comprometidas con el pueblo” en posiciones institucionales claves bastaría para poner fin la corrupción. La administración inicial del chavismo –y ello fue una de las razones de peso que le llevaron a un triunfo electoral– encontró instituciones democráticas en medio del más profundo descrédito.

La notable debilidad institucional que distinguía país en 1998-1999 tuvo como respuesta el mesianismo y el personalismo. Chávez, con su potente discurso público, parecía ser –él como persona y líder– la única respuesta a múltiples problemas. Se perdió la oportunidad de reinstitucionalizar al país. Al contrario, el nuevo esquema de poder aprovechó ese momento; pero lo usó para moldear las instituciones según los dictados del mesías político.

Un segundo rasgo, a juicio de Gómez Calcaño, era la profundización de la cultura clientelista. Amplios sectores de la sociedad venezolana habían asumido una relación de dependencia con el Estado, ya que esto pasó a ser un rasgo medular del bipartidismo a partir del primer *boom* petrolero de 1974.

Tras observar diversas intervenciones públicas del presidente Chávez en 1999, era evidente para el autor que la relación directa entre los ciudadanos y el jefe de Estado estaba alcanzando niveles muy altos. Dicha relación no institucional no tenía el fin de discutir los problemas y eventuales soluciones a la crisis en Venezuela. En vez de ello, la gente sencillamente se acercaba al nuevo poder con cartas y papelitos para solicitar empleo, una ayuda económica o atención médica. Se entendía la expectativa de una relación clientelar como la respuesta a problemas personales inmediatos.

Se repetía –y se llevaba a extremos para entonces desconocidos– uno de los errores del pasado: el ejercicio clientelar del poder. El chavismo borró la mediación institucional entre los ciudadanos y la presidencia. Con ello se perdió la oportunidad de reconstruir el tejido de organismos del Estado venezolano.

La debilidad institucional, heredada por el chavismo y sucesivamente profundizada por Chávez, mostraba un tercer y último rasgo: la inexistencia de partidos políticos modernos en Venezuela. A inicios del chavismo, los dos partidos emblemáticos del periodo 1958-1998, AD y COPEI, eran una suerte de caricatura de las agrupaciones que décadas atrás habían liderado la modernización del país. La debacle partidista fue un factor determinante en la erosión institucional que se vivió en Venezuela, como preludio al ascenso de Chávez al poder.

Un chavismo caracterizado por un liderazgo mesiánico y el clientelismo como forma de interacción con el ciudadano no generarían, por razones obvias,

un partido moderno. En aquel 1999 existía el Movimiento V República (MVR, precursor del PSUV), que en realidad se había creado un año antes ante la presión de las autoridades electorales para que Chávez pudiese inscribir su candidatura.

El partido hecho bajo los designios del líder, una negación y un aniquilamiento del marco institucional en términos prácticos. Este es uno de errores en los que incurrió la primigenia Revolución Bolivariana para llegar al poder y que terminó profundizando con el pasar de los años.





# PARTE III

## **De la democracia participativa a la democracia desmantelada**



Corría el año 2000: estaba en sus primeros meses de gestión el presidente Hugo Chávez, y las encuestas revelaban que su aceptación era mayor al nivel de votos que había obtenido en las elecciones. Era claro que estábamos ante el cierre de un ciclo en Venezuela.

Era un tiempo de balances y pronósticos. Por un lado, se evaluaba en diferentes espacios el fracaso del modelo 1958 y con esto se cerraba un ciclo en Venezuela. Por el otro, no eran pocas las inquietudes que generaba el nuevo ciclo: la llamada “Revolución Bolivariana”.

A fin de cuentas, el voto popular indudablemente había castigado a quienes habían gobernado bajo el modelo de conciliación de élites formalizado en el Pacto de Puntofijo (puntofijismo). Además, se avizoraba que ese respaldo mayoritario caía sobre los hombros de un líder entonces difícil definir. Tampoco se sabía claramente hacia dónde conduciría el país. Solo era claro que estábamos a las puertas de un cambio de época en el país.

Michael Penfold publicó un ensayo titulado “Adiós al Puntofijismo” (2000). En él, revisaba el fracaso del modelo de conciliación de élites instaurado en 1958 y que, justamente al ser electo Chávez en diciembre de 1998, ya abarcaba un arco de tiempo de exactamente cuatro décadas.

Para Penfold, hubo dos factores que ayudan a explicar el fracaso del modelo. Por un lado, el efecto de la caída del ingreso fiscal petrolero, que agudizó muchas de las contradicciones iniciales del sistema democrático; por otro, el incremento de la competencia electoral producto de cambios en el sistema de votación y el inicio de la elección directa de alcaldes y gobernadores. La caída del ingreso fiscal petrolero erosionó el mecanismo utilitario sobre el cual se sostenían los arreglos institucionales del sistema democrático venezolano.

Según este autor, la caída de los ingresos fiscales, que de forma recurrente vivió el país a partir de los años 1980 y se extendió durante los 1990, puso en crisis a unos actores políticos: el bipartidismo de AD y COPEI. Sobre ambos confluyeron las críticas de la sociedad y de los actores políticos emergentes. El pacto político en Venezuela tuvo éxito en la medida en que tenía capacidad redistributiva. Cuando ese mecanismo dejó de funcionar por la caída de los ingresos petroleros, se agudizó un proceso de deslegitimación expresado finalmente en las urnas electorales llevando a un *outsider* al poder –como lo fue Chávez en 1998–.

Guillermo Tell Aveledo (2020, noviembre 8) nos ha recordado que el Pacto de Puntofijo de octubre de 1958, pasó a ser conocido así porque se firmó en la casa homónima de Rafael Caldera y, lo más importante, este pacto de gobernabilidad futura se suscribió sin que los partidos políticos de entonces estuviesen en el poder. Además, desconocían cuál sería su peso electoral, dado que el país apenas saldría de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez luego de largos los años sin elecciones libres en Venezuela.

El pacto entre las élites políticas fue suscrito por los líderes de los partidos COPEI (Rafael Caldera, Lorenzo Fernández, Pedro del Corral), AD (Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios y Raúl Leoni) y Unión Republicana Democrática, (URD –izquierda– Jóvito Villalba, Ignacio Arcaya y Manuel López Rivas).

El pacto de Puntofijo, *per se*, solo tuvo una vida de tres años. Con el paso del tiempo, especialmente en la etapa menguada del modelo democrático de 1958, se le pasó a llamar “puntofijismo”, principalmente como descalificación a aquella conciliación y búsqueda de consensos que fue el germen de la democracia venezolana instaurada en 1958.

Junto con la constatación de que concluía un ciclo democrático, con sus luces y sombras, en aquel julio de 2000 se trataba de escudriñar la naturaleza del naciente chavismo en el poder.

Francisco José Virtuoso (2000), por ejemplo, tituló de esta forma un artículo suyo de análisis: “A la Revolución Le Hace Falta Política”. Al realizar un balance de los primeros 16 meses del gobierno de Chávez, sostenía Virtuoso que el entonces presidente sustentaba su liderazgo sobre el entusiasmo de la población. Lograba sintetizar la expectativa popular de dejar atrás una situación no deseada y creaba la ilusión de que, en el corto plazo, era posible lograr cambios significativos en la vida política, social y económica del país.

Asimismo, apuntaba el autor, Chávez simbolizaba “el republicanismo cívico bolivariano que forma parte de la identidad ideológica de las Fuerzas Armadas Venezolanas”.

Sin embargo, lo que eran buenos propósitos, alineados con el deseo popular, no ocultaban en el análisis de Virtuoso elementos que eran sumamente preocupantes ya para esos primeros meses de gestión:

La inexistencia de un proyecto de país en el que se concreten las aspiraciones de los venezolanos y las buenas intenciones del presidente, su gobierno y sus aliados políticos, la ausencia de trabajo en equipo de los integrantes del alto gobierno, el continuo recurso a militares (retirados y activos) y a la institución militar para ocupar cargos políticos y administrar programas sociales o de desarrollo, y la inexperiencia de la mayor parte de los funcionarios en el ejercicio de los cargos que se les encomienda. (Virtuoso, 2000)

No lo dice el autor, lo decimos nosotros: en realidad, reinaban el voluntarismo y la improvisación. Asimismo, en medio de lo que era un diluvio de anuncios de Chávez, comenzaba a manifestarse la corrupción como signo de identidad del nuevo régimen. Un caso emblemático fue el enriquecimiento de un muy cercano colaborador de Chávez, el General (Ej.) Cruz Weffer, gracias a lo que fue el programa insignia de entonces, el Plan Bolívar 2000, como lo develaron investigaciones periodísticas de Lisseth Boon (2016, abril 3).

Tal como lo ha apuntado Tomás Straka (2017), aquel chavismo que se estrenaba en el poder era difícil de definir; ideológicamente, era un proyecto difuso. En el hiperliderazgo de Chávez, se combinaban ideas provenientes de diversas fuentes, junto con “una capacidad extraordinaria para concitar emociones, de apoyo o rechazo”. Por eso, cada quien podía hacer su interpretación personal sobre el ideario de Chávez y sus seguidores.

Para el chavismo, entretanto, a partir de las elecciones presidenciales de 2006 comenzaría otra etapa signada por la bandera del Socialismo del Siglo XXI.



Un signo inequívoco de enfermedad sociopolítica, cuando se analiza la etapa germinal de la Revolución Bolivariana, tiene que ver con la presentación de proyectos épicos por parte del líder y el respaldo complaciente de los ciudadanos para tales propuestas faraónicas. La idea de un país potencia no era solo un lema oficial, sino que una parte importante de la población en aquellos primeros tiempos de hecho creía que Hugo Chávez transformaría positivamente al país.

Venezuela como país no solo está compuesta de lo hecho, erigido y construido en términos de su infraestructura, sino que también está alimentada de proyectos que en algunos casos se sabían irrealizables. La fantasía populista los creaba y alimentaba.

En sus inicios entre 1999 y 2000, uno de los proyectos faraónicos que marcó al chavismo fue la quimera (no puede llamársele de otra forma) de mudar al país al sur, mediante el eje Orinoco-Apure. Se trató de un proyecto al cual el dúo formado por Hugo Chávez y el entonces Ministro de Planificación Jorge Giordani dedicó largas horas en cadenas y alocuciones. Todo quedó en palabras.

El arquitecto y urbanista Marco Negrón (2000) hizo un concienzudo análisis de las implicaciones ideológicas que comprendía aquel proyecto épico. En palabras oficiales, podía implicar el asentamiento de nueve millones de personas en el sur del país. El texto de Negrón se tituló “El Eje Orinoco-Apure: Una Visión Reaccionaria del Desarrollo”.

El autor cuestiona que, a inicios del siglo XXI, se insistiera en las viejas tesis “de sesgo francamente anti-urbano” propuestas en la revolución territorial anunciada por un entonces exultante Hugo Chávez, como gran novedad del gobierno recientemente en ejercicio. Sin embargo, el ideólogo visible de dicha propuesta era Giordani, sempiterno en dicho cargo durante la Revolución Bolivariana en la era Chávez.

Para Negrón, aquella descabellada propuesta de mudar el país al sur representaba un peligró. La razón de ello era que, en aras de un supuesto beneficio

de lo rural por encima de lo urbano, las políticas públicas sencillamente obviaban la necesidad de afrontar el reordenamiento urbano en urbes complejas del país como Caracas, Valencia o Maracaibo. En opinión de este urbanista, este proyecto era innecesario porque “[...] la distribución de ciudades en Venezuela es relativamente equilibrada” (Negrón, 2001).

En aquella etapa germinal del chavismo en el poder, el eje Orinoco-Apure simbolizaba la necesidad de cambiarlo todo. Hasta se planteaba la necesidad de mudar la capital de la República, incluso entre quienes antes adversaban esa idea como lo precisaba el periodista Roberto Giusti en un artículo publicado por el diario *El Universal* (1999, mayo 30). “El nuevo embajador venezolano en la India, Walter Márquez, siempre crítico mordaz del Eje Fluvial, sostiene ahora la necesidad de sacar la capital del centro del país y ubicarla en la cuenca del Orinoco”, sostenía Giusti.

En palabras del propio Márquez, exdiputado posteriormente en ejercicio de funciones diplomáticas:

Propongo trasladar la capital de la República al Orinoco, como única manera de desarrollar un equilibrio geopolítico, porque mientras la capital esté en el centro, no lograremos ese equilibrio. Debemos seguir el ejemplo de Brasil y de la India, que crearon Brasilia y Nueva Delhi. Creo que a partir de un asentamiento ya existente en la cuenca del Orinoco se debe dar el primer paso en la creación de la nueva capital venezolana. (Giusti, 1999, mayo 30)

No eran palabras de Chávez, sino de Walter Márquez. La fantasía populista envolvía a propios y extraños. El liderazgo parecía embriagado por la tesis de que una revolución con R mayúscula debe cambiarlo todo, poner el país patas arriba.

Como indica Negrón en su texto, el proyecto Orinoco-Apure constituía una “estrategia central” en el desarrollo nacional, en la naciente era bolivariana. Según palabras de Giordani, se trataba de un “proyecto bandera” y “una revolución en sí mismo [*sic*]” (Negrón, 2000). Un aspecto que señalaba el autor, también por el periodista Giusti, era la ausencia sobre el rol que les correspondía a los centros poblados existentes en todos estos planes de grandes asentamientos urbanos.

“Son muchas las propuestas, pero ninguna de ellas debe realizarse sin previa consulta popular”, sostenía Giusti, a tono con el carácter participativo conferido al modelo democrático por la nueva carta magna. También advertía el periodista, quien estuvo algunos años como corresponsal en Moscú: “[l]a experiencia de la ex Unión Soviética y de los Balcanes nos demuestra los desastrosos resultados de una ocupación territorial compulsiva”.

La tesis de Chávez y Giordani apuntaba a echar por la borda lo que fue un gran legado del siglo XX venezolano: la construcción social de un “nosotros” a partir de la conexión del territorio nacional. Tal como lo ha recordado Roberto Briceño León (2021, enero 24), esto se logró con la construcción de la red de carreteras nacionales que unía las regiones distantes con Caracas.

Efectivamente se hablaba de movilizar a numerosa población, de un lugar a otro, tras la búsqueda de una quimera, que solo parecía compuesta de beneficios sin consultar a los afectados. Finalmente –podríamos decir que casi felizmente–, este proyecto quedó en el papel y en los discursos públicos de una época porque, pasados los años, incluso el propio Chávez tampoco mencionó más al eje Orinoco-Apure.

Fue un sueño, pero no cualquiera, ya que a este se le destinaron recursos públicos.



No hablamos de 2021, aunque perfectamente algunos elementos del análisis serían válidos para dicho año. Así como el chavismo se erigió en poder autoritario con pretensiones hegemónicas, por mucho tiempo, hemos estado dando vueltas en torno a la necesidad de articular una oposición democrática con una estrategia coherente.

La desdemocratización, anterior al chavismo y profundizada por este, debe entenderse también como el fracaso de una alternativa democrática en estos años del siglo XXI.

El análisis crítico sobre la oposición al chavismo ha sido un elemento recurrente cuando se reflexiona sobre la naturaleza del régimen iniciado en febrero de 1999, una vez que Hugo Chávez asume el poder. Incluso desde sus inicios, el proyecto autoritario encarnado por el chavismo tuvo como correlato fallidas acciones o estrategias opositoras que le allanaron el terreno en su afán de hacerse con todo el poder en Venezuela.

Francisco José Virtuoso (2004) planteaba los desafíos de pensar en una alternativa al chavismo bajo el título “Construir la Oposición”. En ese texto, por cierto, ya el autor planteaba que , “por ahora” (en ese momento), no era realista llamar dictadura al gobierno de Chávez ya que, si bien eran notables los rasgos de autoritarismo, existían espacios para el desarrollo de la acción política e institucional por parte de las fuerzas democráticas que adversaban en ese momento al régimen.

Aquel artículo analizaba el contexto político venezolano en los meses previos al referendo revocatorio que tendría lugar en agosto de 2004, al cual nos referiremos en el próximo capítulo. Los factores de oposición se agrupaban en la llamada Coordinadora Democrática (CD); pero esta coalición ya lucía debilitada producto de la restitución de Chávez en el poder tras el fallido golpe de Estado de abril de 2002 y el fracaso del paro petrolero (diciembre 2002 - enero 2003).

Sin embargo, Virtuoso señalaba que, en aquellos primeros meses de 2004, la oposición tenía músculo institucional: ocupaba un número importante de gobernaciones y alcaldías; hacía contrapeso en la Asamblea Nacional (Legislativo, unicameral; según la Constitución de 1999); y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia actuaban independientemente, sin necesidad de estar alineados con el poder chavista. Sostenía Virtuoso:

La calificación de autocracia al régimen de Chávez, aunque pareciera ajustarse más por el personalismo que caracteriza su acción política desde el gobierno, tampoco hace justicia a la realidad, pues según los significados más ortodoxos una autocracia es siempre un gobierno absoluto, en el sentido de que detenta un poder ilimitado sobre sus súbditos (Virtuoso, 2004)

Por otro lado, en relación con los desafíos que debía encarar la oposición venezolana, Virtuoso identificaba tres como prioritarios: 1) formular una visión de país que fuera entendida por chavistas y no chavistas, concretada en medios y fines con posibilidades reales de ejecución; 2) construir un espacio político de unidad, que debe traducirse en una estrategia política única; y 3) integrar al pueblo venezolano, que debe sentirse convocado e invitado a participar de este proyecto alternativo de sociedad. Se leen estas líneas, escritas en 2004, y parecen tener plena vigencia más de quince años después.

A juicio del jesuita, la oposición había repetido un error estratégico al centrarse exclusivamente en la tesis de “salir de Chávez”, sin considerar las claves que llevaron al chavismo al poder: “la oposición ha obviado la tarea de hacer política, conquistando espacios, creando acuerdos y consensos, reconstruyendo los partidos”. En su opinión, la oposición había caído en el esquema de polarización, estrategia planteada por el chavismo para su propio beneficio.

Por su parte, Nelly Arenas (2005) señalaba que Chávez había desplegado a lo largo de su actividad política un discurso que se identifica básicamente por su antielitismo: contra los partidos políticos, contra la Iglesia Católica, contra los medios de comunicación, contra los empresarios, contra los viejos sindicatos. “Cúpulas podridas” era el calificativo que Chávez empleaba desde los días de campaña electoral para designar a los representantes del antiguo *establishment*.

El discurso del chavismo básicamente apelaba a una lógica dicotómica, para dividir a la sociedad. Chávez construyó nudos antagónicos para oponer al pueblo contra la oligarquía y a la nación contra el imperialismo en la narrativa nacional.

Por otro lado, en aquellos días también hacía su reflexión de la coyuntura la profesora María Gabriela Cuevas (2004). Esta investigadora de la UCAB

analizaba entonces los derechos humanos en juego desde la perspectiva del referendo revocatorio.

La posibilidad de recurrir a las boletas electorales para revocar el mandato presidencial de Hugo Chávez había sufrido una serie de dilaciones y trabas. El referendo solo fue posible en la medida que hubo una mediación internacional, con un papel destacado de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter. El chavismo manipuló el proceso para posponerlo lo más posible, un factor que jugaba a su favor.

Estos precedentes llevaron a la investigadora a sostener que había una violación al derecho a la participación política con el establecimiento de condiciones y requisitos adicionales a los previstos por la constitución de 1999. Estos retrasaron por más de un año la realización del referendo revocatorio presidencial, consulta que finalmente se efectuó en agosto de 2004.

Debe recordarse que, durante el año en que se postergó el referendo, el gobierno de Chávez lanzó el programa social de salud dirigido a sectores desfavorecidos denominado Misión Barrio Adentro. En consecuencia, según lo evidenciaron encuestas de la época, esa iniciativa contribuyó a subir nuevamente su popularidad, un factor que contribuyó a sellar su continuidad en la presidencia.

Chávez entendió el referendo, no en los términos planteados como un derecho de la ciudadanía a revocar el mandato de un gobernante, sino como lo contrario: la consolidación de su poder. Como lo señaló Miguel Ángel Martínez Meucci (2016, octubre 31), a partir de entonces, el gobierno de Hugo Chávez se sentiría más fuerte que nunca para terminar de afianzarse en el poder y sacudirse la incómoda tutela internacional que, durante más de dos años, se había visto obligado a soportar. A partir de entonces, se profundizaría la desdemocratización.



Un hito en la historia de cómo el chavismo contribuyó con la desdemocratización de Venezuela está sin duda en la realización de referendo revocatorio en agosto de 2004. En retrospectiva, aquel proceso dejó en claro que el gobierno de Hugo Chávez –tal como el de Nicolás Maduro años después– haría todo lo posible por permanecer en el poder.

Desde nuestro punto de vista, no hubo el denunciado fraude el día de la votación. El referendo revocatorio fue manipulado desde más de un año antes de su realización. El objetivo de esta maniobra fue retrasarlo lo máximo posible y realizarlo cuando el estado de la opinión pública le fuese favorable a Chávez. De esa forma se desvirtuaba por completo lo que en su momento se había presentado como la gran novedad de la “democracia participativa”: el pueblo no debía esperar hasta el fin del mandato para poner fin a un gobierno inepto o corrupto.

El propio Chávez dejó aquella figura en letra muerta. El chavismo entendía –y entiende– el poder en términos existenciales. El chavismo existe mientras detente el poder. Por tanto, no es viable cederlo, compartirlo o entregarlo de buena manera.

En junio de 2003, quince meses antes de revocatorio, esta era la coyuntura política. Estaba concluyendo entonces lo que había sido la Mesa de Negociación y Diálogo. Este inédito espacio de reuniones entre representantes del gobierno y la oposición tuvo lugar durante varios meses principalmente con la moderación de César Gaviria, entonces secretario general de la OEA, junto al Centro Carter y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Tras medio año de discusiones, en medio de las cuales la CD inició el fallido paro petrolero (diciembre 2002 - enero 2003), la oposición y el gobierno de Hugo Chávez definieron una hoja de ruta en mayo de 2003. En esencia, acordaron que la crisis política debía canalizarse a través de una salida electoral, en concreto se acordó recurrir a un mecanismo inédito que incorporó la Constitución Bolivariana de 1999:

el referendo revocatorio. Efectivamente, esta figura que posibilitaba revocar con el voto popular a un funcionario electo a la mitad de su periodo era, como hemos dicho, una gran innovación democrática.

“El gobierno sabe que es muy alto el grado de rechazo a Chávez y que perderá el referéndum”. Esto era *vox populi* a mitad de 2003. Una medición de opinión pública realizada por la firma Datanálisis, precisamente al final del primer semestre de 2003, evidenciaba que el rechazo a Chávez tuvo su pico más alto de aquellos años, totalizando 67,5% en junio de 2003.

Asumiendo este punto de partida, un análisis de coyuntura elaborado por Arturo Sosa titulado “La Coyuntura Política: Trapiche, Historia y Futuro”, aseguraba:

Mientras antes se produzca el referéndum más posibilidades existen de que le sea revocado el mandato al presidente Chávez. Por eso la estrategia del chavismo es retrasarlo lo más posible para lo cual se cuenta con la posibilidad de retrasar el nombramiento del CNE hasta conseguir una mayor presencia en él, obligar a la oposición a volver a recolectar las firmas para solicitarlo [...] Para el chavismo es escenario ideal es evitar el referéndum revocatorio o, en su defecto, retrasarlo hasta más allá del 19 de agosto de 2004, evitando, al menos, una elección presidencial inmediata.

[...]

Para la oposición, en cambio, es perentoria la convocatoria al referéndum lo antes posible. El escenario ideal para la oposición es que se realice en octubre y las elecciones presidenciales en diciembre de 2003. Por eso, intenta concentrar todas sus energías ahora en lograr las condiciones para la convocatoria del referéndum antes de agosto de 2004. (Sosa, 2003)

Es historia conocida que el chavismo logró postergar el referendo revocatorio presidencial por más de un año usando diversas estrategias. Finalmente, se realizó el 15 de agosto de 2004.

Durante aquellos meses entre la decisión de hacer el referendo y su efectiva realización, el gobierno emprendió principalmente acciones de atención directa en los sectores populares. Se pusieron en marcha las llamadas “misiones” (programas sociales distintos al marco asistencial de las agencias gubernamentales). En particular ocurrió el lanzamiento de “Barrio Adentro”, con el apoyo del gobierno de Cuba. Todo ello ayuda a entender cómo Chávez logró efectivamente revertir de forma importante el clima desfavorable que prevalecía en la opinión pública en 2003, para finalmente imponerse en las urnas electorales en agosto de 2004.

Entretanto en junio de ese año, un editorial de la revista *SIC* cuestionaba seriamente a los dos sectores principales, gobierno y oposición. Al primero lo señalaba de estar únicamente preocupado en aferrarse al poder y al otro de enfocarse exclusivamente en sacar a Chávez de la presidencia, sin medir las consecuencias de sus acciones. “En este horizonte –hasta ahora– ha triunfado Chávez” (Centro Gumilla, 2003). Años después, esta afirmación seguía siendo vigente.

Ese referendo fue un punto de inflexión en la política contemporánea del país, puesto que supuso una relegitimación política del entonces presidente (García S., 2016, septiembre 27). Para buena parte de la comunidad internacional que había estado involucrada en el proceso de negociación, el tema Venezuela quedaba cerrado. Chávez era el presidente y ya esto no estaba en discusión.

El chavismo capitalizó los resultados de este referendo en dos sentidos. Por un lado, lo usó para acorralar políticamente a la oposición democrática, que quedó muy desmoralizada y fragmentada tras el 15 de agosto; por el otro, Chávez profundizó su modelo de gobierno y avanzó hacia el punto clímax, que estuvo en las elecciones de diciembre de 2006. Desde entonces, el mecanismo que serviría para hacer más democrática a Venezuela, el referendo revocatorio, no ha vuelto a ponerse en funcionamiento.



Una vez que Hugo Chávez ascendió al poder, en febrero de 1999, actuó profundizando los males que habían caracterizado al modelo democrático de 1958, ya agotado y sin capacidad de respuesta a las demandas de cambio. El voto popular se inclinó por el *outsider*, por el comandante que irrumpió en los hogares a través de la pantalla de televisión, desafiante, con su “por ahora” luego de su fallido golpe de Estado en febrero de 1992.

Según lo expresado por el propio Chávez, el proyecto de su Revolución Bolivariana regiría por décadas en Venezuela y se fue ajustando de acuerdo con las demandas del momento. Es lo que señalamos en el capítulo anterior dedicado a la figura del referendo revocatorio. El chavismo lo torció y distorsionó para garantizar que Chávez no fuese revocado como correspondía en 2003. La desdemocratización, el despojamiento de dicha naturaleza de los mecanismos de participación política, iba avanzando en Venezuela.

Las elecciones presidenciales de 2006 son otro hito en este largo proceso de dismantelamiento de democracia en Venezuela. Aquella fue una campaña en la que quedó en evidencia que Chávez haría todo lo posible por permanecer en el poder, incluso al punto de dejar de ser él mismo.

Como es sabido, Chávez fue reelecto. Obtuvo 7,3 millones de votos. Bastante lejos de la meta que había trazado a su equipo de campaña de arrasar con 10 millones de votos. Sin embargo, su caudal electoral representaba un significativo 62%.

Una gran novedad en aquel momento fue la candidatura unitaria de la oposición con el Gobernador del Estado Zulia Manuel Rosales (CD). Fue novedosa porque, un año antes, los factores políticos opositores habían optado por no acudir a las elecciones parlamentarias, con lo cual el chavismo copó este poder público casi en su totalidad. Rosales obtuvo el 36,9% de los votos.

Según Juan Romero (2007), la meta de los 10 millones de votos resultaba sumamente ambiciosa, tanto así que propio presidente en donde reconoció que era matemáticamente imposible alcanzarla. No obstante, insistió durante toda la campaña en la necesidad de ganarle por amplio margen al “candidato del Imperio”, como se refería a Manuel Rosales.

Al analizar la campaña de Chávez en 2006, el jesuita Arturo Peraza (2006) sostenía que el discurso de confrontación inicial no dio los resultados esperados en términos de opinión pública. En consecuencia, se cambió al lema “por amor”. En aquel momento, Chávez dio un giro radical en su discurso. De una guerra verbal contra el imperialismo y una lucha por lo que sostenía sería el “Socialismo del Siglo XXI”, pasó a un mensaje personal, sosegado, en el cual el presidente-candidato pedía que votarían por él en un acto de amor para darle continuidad a los programas sociales, a las misiones.

El giro dado por Chávez incluyó la inauguración de diversas obras de infraestructura, algunas por cierto inconclusas. De todos modos, se inauguraron como parte de la campaña proselitista.

Reseñaba Peraza un elemento particularmente interesante en la campaña electoral:

La discusión por el color azul es otro elemento llamativo del proceso del Presidente. Es claro su gusto ideológico por el color rojo, vinculado a los partidos de izquierda marxista a lo largo de toda la historia del siglo XX, tanto en Venezuela como fuera de ella. En la campaña constantemente ha usado ese color en sus camisas y mensajes. Pero en algún momento intentó valerse del color azul, identificado como un tono pacificador, vinculándolo al mensaje del amor. Este esfuerzo duró pocas semanas y al final del proceso parece haber vuelto a su preferencia por el color rojo. (Peraza, 2006)

Las misiones sociales fueron usadas en aquel momento como parte de una campaña de soborno devenido en chantaje dirigida a los más pobres:

Una y otra vez los voceros del gobierno le recuerdan a la población que los logros alcanzados en materia social, o las expectativas que la población pueda tener respecto a estos programas o ayudas, depende de la continuidad del Presidente, pues de llegar la oposición, estos programas serían cortados y la base militante del Presidente eventualmente perseguida.

Mientras tanto, al pronunciarse sobre este proceso a través de una editorial en la Revista *SIC*, el Centro Gumilla recordaba –una vez más– la necesidad de establecer pactos para la convivencia democrática:

La democracia más bien consiste en un sistema civilizado de lograr establecer consensos en torno al tema del poder. Es un modo de afirmar el pluralismo y establecer a la vez una voluntad de Estado, que recoge el sentir de la pluralidad con base a un sistema de mayorías, que determina al gobierno y sus líneas fundamentales, pero a la vez reconoce la existencia de la diferencia asumiéndola y valorándola en sus decisiones. (Centro Gumilla, 2006)

El editorial sostenía que, de los resultados electorales, emanaban responsabilidades para cada actor político. Para quienes ganaron el mandato, gobernar para todos, no solo para los que votaron por esa opción; para quienes perdieron, ejercer democráticamente un rol de oposición, fiscalizando a quienes ejercen el poder.

Nada de esto ocurrió en la vida venezolana posterior a estas elecciones del 3 de diciembre de 2006: una vez electo, el presidente Chávez se olvidó del tono dulce de su lema “por amor” y se lanzó por el sendero de entender el triunfo electoral como un cheque en blanco; no solamente colocó el tema del Socialismo del Siglo XXI como su eje principal, sin discusión sobre esta propuesta con la sociedad, sino que de inmediato se abocó a la reforma constitucional con el fin expreso de establecer la reelección por tiempo indefinido y cambiar la estructura del Estado venezolano.

Por su parte, Rosales no pudo ejercer su rol de opositor ya que una persecución judicial, so pretexto de la lucha contra la corrupción, le forzó a salir de Venezuela meses después de las elecciones.

A juicio de Ramos Jiménez (2007), las elecciones de 2006 no se diferenciaron mucho de las otras tantas votaciones en las que Venezuela se vio inmersa una vez que el chavismo llegó al poder. Sin embargo, la multiplicación de elecciones no fue sinónimo de una salud democrática.

Según este autor, en realidad estuvimos ante el falseamiento de la competitividad electoral en Venezuela, posterior a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1998, con la incorporación de elementos de tipo autoritario: desde el uso abusivo de los recursos del Estado a favor de un candidato o lista “oficial” de candidatos hasta la vigencia de un pluralismo “controlado”, pasando por el carácter previsible de los resultados.



“¿Hacia dónde va Venezuela?” Más que una pregunta, en verdad, parece un *leitmotiv*. En diciembre de 2008 se cumplió una década del primer triunfo electoral de Hugo Chávez, sin duda un parteaguas en la historia contemporánea de Venezuela. En dicho aniversario, la historiadora Margarita López Maya (2008) justamente volvía sobre la pregunta, una que parece signar nuestra vida social en el tramo comprendido entre las últimas dos décadas del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI.

En diciembre de 1998 con un claro triunfo electoral, en un momento en el cual el chavismo no tenía control sobre las instituciones, se daba paso a una nueva etapa en la vida política. La crisis de la democracia, que ya se respiraba en el ambiente desde fines de 1980, terminó recibiendo como respuesta una “medicina” que terminaría exacerbando los problemas. El chavismo terminó siendo una respuesta no democrática al proceso de desdemocratización que ya venía en marcha en las postrimerías del siglo XX venezolano.

Por lo tanto, eran propicios los intentos de hacer un balance de los 10 primeros años del chavismo una vez que se hace con el poder en Venezuela. Además de revisar la génesis del gobierno de Chávez, López Maya identificaba lo que, a su juicio, eran cuatro vulnerabilidades que, vistas con el paso del tiempo, simbolizan en realidad las debilidades del proceso bolivariano. Tales fallas no hicieron otra cosa que ahondar la erosión democrática en el país.

Como la primera vulnerabilidad, la historiadora señalaba “la excesiva dependencia a un líder carismático y, relacionado con esto, la falta de liderazgo colectivo creíble a distintos niveles”. Ya en ese momento, López Maya tenía inquietudes en que el recién renombrado PSUV pudiera consolidarse “para actuar como contrapeso al líder y promover nuevos liderazgos desde abajo”.

Pese a su relación como consultor del gobierno, el académico español Juan Carlos Monedero (2012) acuñó críticamente el término de “hiperliderazgo” para tratar de explicar el fenómeno Chávez. Monedero también veía ese desbalance como debilidad de la revolución bolivariana.

Según Monedero, el hiperliderazgo de Chávez era la respuesta ante una Venezuela:

[...] con escaso cemento social, con un débil sistema de partidos democráticos y con amplios porcentajes de exclusión. Un liderazgo fuerte e incuestionado es la única respuesta que permite situar una alternativa frente a lo que llamamos la selectividad estratégica del Estado. (Monedero, 2012)

Seguidamente, el propio Monedero admitía que “ese liderazgo, en el cual se deposita tanta responsabilidad, también viene con problemas. El hiperliderazgo desactiva, en última instancia, una participación popular que puede confiarse en exceso en las capacidades heroicas del liderazgo”.

Volviendo a lo que se planteaba la historiadora López Maya en diciembre de 2008, una segunda vulnerabilidad del gobierno estaba en la polarización política como estrategia oficial. A juicio de la autora, esto le impedía al gobierno de Chávez “la ampliación de sus bases de apoyo. La polarización mantiene altos niveles de inestabilidad política e ineficiencia pública por la exclusión de sectores de capas medias y profesionales”.

Para López Maya, la tercera vulnerabilidad que ya exhibía en 2008 el proyecto político encabezado por Chávez tenía que ver con lo que ella llamó “socialismo no democrático”, reproduciendo a su juicio “el estilo burocrático-autoritario del socialismo del siglo XX”.

Entre otros aspectos específicamente pormenorizados por la historiadora, dentro de ese socialismo no democrático figuraban:

La concentración de poder en el presidente, sin contrapesos en los otros poderes públicos o en la sociedad civil, su discreción en el uso de los recursos públicos, la presión sobre los empleados públicos de ser “rojos, rojitos” para no perder su empleo, la competencia electoral asimétrica entre el gobierno y quienes discrepan de él, y la intolerancia hacia el pluralismo político [...] debilitan la legitimidad del proyecto. (López, 2008)

Pese a la tradición civilista que prevalecía en el país justamente asociada al modelo democrático de 1958, Venezuela apostó al hombre fuerte, una figura tan bien encarnada por Chávez. Tomás Straka (2019, noviembre 4) inscribe este giro en la tesis del Cesarismo Democrático, que tantas interpretaciones ha tenido desde que se diera a conocer. “Terminamos el siglo XX entregados al híper liderazgo de

Hugo Chávez, ‘césar’ y ‘democrático’ en los sentidos exactos que les dio Laureano Vallenilla Lanz a las categorías”, sostiene el historiador.

Por otro lado, junto a la incapacidad de reinventar la democracia que dejó en evidencia el chavismo, Margarita López Maya también planteaba dudas sobre la viabilidad del proyecto socialista bolivariano, dada su incapacidad de construir una alternativa económica productiva. A nuestro juicio, el chavismo no puso punto final al rentismo. Al contrario, exacerbó tendencias rentistas y de economía de extracción en las finanzas públicas.

Para la historiadora, ese Socialismo del Siglo XXI que tanto pregonaba Chávez en aquel 2008 era inviable al carecer de un modelo económico. Describía la autora lo que ocurría en aquel momento en materia económica: a) creciente gasto fiscal; b) escasos logros en la producción agrícola; c) incapacidad de unidades productivas (Fundos Zamoranos<sup>6</sup>, cooperativas y núcleos de desarrollo endógeno) para sostenerse sin el apoyo financiero del Estado; y d) ineficiencia en las nuevas y viejas empresas públicas, incluyendo PDVSA.

Finalmente, aunque reconocía la hegemonía política de Chávez sobre la vida nacional, resaltaba la debilidad del modelo económico bolivariano, ya que no le permitía a la economía dejar de ser rentista y dirigirse hacia una concepción productiva. Este manejo erróneo de la economía fue el legado recibido por Nicolás Maduro a fines de 2012, con nefastos resultados para la vida nacional a partir de 2015.

López Maya advertía: “[e]l estatismo, tanto en su versión del socialismo soviético y cubano, como en el capitalismo de Estado de Carlos Andrés Pérez, mostró su fracaso”. Resultaba inexplicable a la autora, y a nosotros, cómo el chavismo despreció las lecciones del pasado en materia económica, incluso a contracorriente de lo que en ese momento llevaban adelante otros procesos políticos afines, tales como los de Ecuador (con Rafael Correa) y Bolivia (con Evo Morales), bajo una lógica de cooptación institucional sin grandes estatizaciones de la economía.

---

6 N de E: granjas de propiedad estatal y gestión cooperativa, al estilo de los koljoses y sovjoses de la extinta URSS.



La recordada Mercedes Pulido de Briceño solía decir que el chavismo avanzaba sin prisas pero sin pausas. Aunque se haga pausa a algunas cosas, ciertas propuestas no se abandonan; se regresa a ellas. Esto sucede con el Estado Comunal, que tuvo su clímax en la discusión pública en 2010 y resurgió en 2021 (Gómez, 2021, marzo 12).

La Ley de Ciudades Comunales fue aprobada en primera discusión este 11 marzo de 2021 en la Asamblea Nacional. Sería una manera de saltarse la asignación de fondos legítimamente destinados a alcaldías y dirigirlos a las comunas. Así, se preparaba el chavismo para perder alcaldías y concejos municipales en las elecciones de ese año.

Erosionar, debilitar, contradecir la constitución que la propia Revolución Bolivariana implantó en 1999 parece ser una estrategia sostenida en el tiempo. Cuando la letra constitucional era propicia para el ejercicio del poder, se le enaltecía; cuando dejó de ser útil, se le ha dinamitado.

Estamos ante otro clásico ejemplo de desempeño arbitrario de los poderes públicos que debilita las esferas legítimas de decisión previstas en la propia constitución, conforme a Sermeño (2021). De esa forma el chavismo ha profundizado la desdemocratización en Venezuela.

Asimismo, el chavismo ha reducido los problemas del país a falsos dilemas, como si la complejidad de la vida social, política y económica pudiera ser reducida a solo dos opciones. En su mejor momento, el chavismo cultivó una política dicotómica en Venezuela, colocando una suerte de camisa de fuerza a la discusión pública de la cual no siempre era posible zafarse.

Esta especie de telón de fondo para la discusión pública no impidió que la revista *SIC* (Centro Gumilla, 2010), en un frontal editorial, llamara a constituir “una alternativa para Venezuela”. Era un momento delicado, como tantos que se han vivido en Venezuela desde 1999. En aquel caso, el gobierno de Hugo Chávez impulsaba

aceleradamente el llamado Estado Comunal, en contradicción con lo establecido en la carta magna, ante la previsible pérdida de la mayoría calificada en las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010, como de hecho sucedió.

“Lo llamamos alternativa porque estamos convencidos de que Venezuela no tiene marcha atrás: ni se puede volver al pasado, ni aceptar el presente, como si todo el problema consistiera solo en salir del actual presidente”, sostenía el editorial referido en agosto de 2010.

La revista *SIC* recordaba que había apoyado históricamente las iniciativas sociales del presidente Hugo Chávez, así como el cuestionamiento presidencial al “fundamentalismo del mercado”. Sin embargo, esta publicación confrontaba abiertamente el modelo de iniciativas de organizaciones sociales y comunitarias impulsadas desde el Estado y cooptadas por el poder político.

Aseguraba la publicación oficiosa de la Iglesia Católica en Venezuela:

Discrepamos frontalmente en el modo como pretende llevarlo a cabo, es decir, a través del Estado como único sujeto social que secuestra la subjetividad de todos. Creemos que poner en el centro a las clases populares significa estimular su condición de sujetos [...] El Estado está para la gente y no la gente para el Estado. Ello significa, en primer lugar, que la gente tiene que controlar al Estado, lo cual implica la multiplicidad, la independencia y el balance de poderes, además de una genuina representación y de la participación, sobre todo a nivel municipal. (Centro Gumilla, agosto 2010)

Por otro lado, el economista Ronald Balza Guanipa (2010) alertaba ya en el título de su texto lo que en el fondo significarían las llamadas comunas: “Menos Poder para la Gente”.

Con preocupación, Balza Guanipa observaba cómo los proyectos de ley relacionados con la construcción del Estado Comunal exhibían serias contradicciones con la Constitución Bolivariana de 1999. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Comunas de 2010 condicionaba la creación de estos espacios de participación popular a perseguir “un enfoque social, político, económico y cultural para la construcción del Modelo Productivo Socialista”. Igualmente, solo reconocía consejos comunales si sus fines incluían “establecer la base sociopolítica del socialismo”.

En relación con este proyecto de Estado Comunal, sostenía el economista, poeta y académico Héctor Silva Michelena, fallecido en 2021, que era la demolición de la “república democrática” (citado por Salmerón, 2014, septiembre 25).

Por su parte, López Maya (2018) precisa que esta suerte de “socialismo comunal” fue propuesto por el propio Hugo Chávez, “en su segundo gobierno como

sustituto de la democracia representativa y participativa de la Carta Magna”. Este nuevo Estado paralelo fomentado por el chavismo, “sin instituciones de democracia representativa ha adolecido desde su origen de un problema de legitimidad”.

Entonces, no pocos sostenían que el modelo en Venezuela, inspirándose en la constitución, debía ser una “democracia social de mercado”, que tuviera como centro a la persona, a los ciudadanos, “considerados tanto individualmente como organizados”.

Explicaba Balza Guanipa:

La democracia social no puede abstraerse de la realidad concreta y por eso discrimina positivamente al pueblo. Esto implica dos cosas: un Estado que le dé servicios de educación, salud, seguridad y vialidad a la altura del tiempo, desde nuestro ser venezolano y latinoamericano, y un Estado que promueva sus organizaciones de base, sin pretender cooptarlas. (Balza, 2010)

En relación con el papel del mercado, el editorial de *SIC* se inspiraba en la constitución de 1999 para sostener:

[E]l Estado reconocerá la propiedad privada, incluida la de los medios de producción, y cuidará que se respete; a la vez que velará escrupulosamente porque el mercado sea en verdad libre, persiguiendo todo tipo de roscas, oligopolios y monopolios y velando porque la competencia sea leal.

Por cierto, todo esto sigue siendo absolutamente necesario para Venezuela en la actualidad.



La discusión sobre el tema de la capacidad industrial de Venezuela no es algo nuevo. En realidad, ha sido un ritornelo sin fin. Cuando Venezuela atraviesa una fase de contracción en sus ingresos petroleros, reaparece en la agenda pública la necesidad de diversificar la producción. Han terminado siendo propuestas que cíclicamente también terminan engavetadas, una vez que el precio del petróleo repunta en el mercado internacional.

En coyunturas más recientes, a diferencia de lo observado en los 1980, una subida significativa de precios en el mercado internacional del crudo no basta para sacar a Venezuela de la fosa.

Anunciar planes para fortalecer la producción nacional y hacernos menos dependientes del petróleo no es algo que haya descubierto la presidencia de Nicolás Maduro. Durante el primer mes de mandato de Jaime Lusinchi (1984-1989), justamente se comenzó con el anuncio de un conjunto de medidas económicas y la propuesta política de un pacto social para Venezuela.

Hay que recordar que Lusinchi inició su gobierno apenas un año después del Viernes Negro (18 de febrero de 1983), cuando se puso fin a casi una década de bonanza petrolera y se devaluó la moneda, en el marco de una caída significativa de los precios internacionales del petróleo.

El sueño de que vivíamos en un país rico, con una bonanza que no parecía detenerse, comenzó en 1974 con la Gran Venezuela del mandato de Pérez I. El *boom* del mercado petrolero en los 1970 marcó significativamente la vida nacional. Incluso para algunos pensadores y políticos, como Ramón J. Velásquez (2005), aquel momento fue en verdad el punto de quiebre en la vida nacional, uno del cual no nos recuperamos en las siguientes décadas.

El chavismo, con un petróleo por encima de los USD 100 el barril, también tuvo su época de bonanza. Tal vez en 2006, cuando Chávez fue reelecto en medio de

una oleada de altos precios del crudo, también se vivía con la sensación de estar en un país en el que todo era posible. En esos periodos se vive una suerte de embriaguez, no solo entre líderes políticos, en los que resulta imposible discutir sobre la necesidad de producir otras cosas distintas al petróleo.

Volvamos a la presidencia de Lusinchi en 1984. La era de precios bajos del crudo en el mercado internacional llevó a medidas en dos direcciones: por un lado, la devaluación monetaria (hacer más rentables menos ingresos en dólares para diferir las consecuencias políticas de recortes en el gasto público) y por otro, concretamente el estímulo a una política de prácticas industriales de producción nacional.

Debe decirse que, entre muchos intelectuales y analistas, la caída en los precios del petróleo era vista no como un problema, sino como una excelente oportunidad para que el país se volcara a la producción nacional de alimentos y otros bienes de consumo masivo. Sin embargo, debe recalarse que estas propuestas surgen cuando el petróleo está en la fase descendente de su ciclo.

La palabra del momento era industrialización. A la luz arrojada por el paso de los años, debe decirse que se habló mucho y se hizo poco en realidad. Los decisores políticos mantenían un discurso a favor de la industrialización solo en momentos de bajas en la cotización del petróleo; pero resultaba rápidamente abandonado apenas se evidenciaban repuntes en los ciclos del precio del petróleo durante las últimas cinco décadas.

Miguel Ignacio Purroy (1984), entonces articulista y profesor universitario, alertaba al gobierno de Lusinchi sobre el alcance que debían tener las medidas económicas. No podían limitarse a lo cambiario y el enfoque debía estar realmente en la producción nacional:

[...] la urgencia (de tomar medidas) reside en el germen inflacionario de toda devaluación. Devaluar es bueno, siempre y cuando conduzca a una expansión de la producción. Si esta expansión no se produce, la devaluación genera única y exclusivamente inflación, y de las más perversas. (Purroy, 1984)

Tres décadas después, cuando avanzaba el siglo XXI, los llamados de alerta hechos por los pensadores en materia económica seguían siendo los mismos. El profesor titular de la Universidad de los Andes (ULA) y consultor del BM Alejandro Gutiérrez cuestionaba que, durante el gobierno de Nicolás Maduro, la política económica se limitara a fijar, de manera ficticia por demás, la tasa de cambio del dólar; pero no se encaró el problema medular del país: la falta de producción. Venezuela sigue siendo incapaz de garantizar su autoabastecimiento alimentario.

Ya desde 1984, Purroy sostenía que en Venezuela resultaba prioridad absoluta avanzar en una política de sustitución de importaciones, para ello veía como necesario “una política industrial que contemple fundamentalmente los problemas tecnológicos de fases avanzadas de sustitución, problemas de integración inter-industrial [*sic*], capacitación de recursos humanos, etc.”

Durante una entrevista concedida a Víctor Salmerón (2017), Alejandro Gutiérrez cuestionaba la Revolución Bolivariana por su pretensión de “pretender resolver todo con importaciones”. El país parece un círculo que gira en torno a sus problemas para volver siempre a los mismos diagnósticos.

En su análisis, Purroy ya dejaba en claro que los empresarios privados tenían que cumplir un rol clave en esa anhelada reactivación económica en la mitad de los 1980. El gobierno de Lusinchi había hecho una apuesta: “el sector empresarial ha obtenido los mejores beneficios de este primer paquete de medidas”.

En aquel 1984, asimismo, era motivo de discusión la propuesta del pacto social que había presentado Lusinchi, junto a su partido AD, como su principal eje político de gobierno. Sectores de la Iglesia Católica, entre ellos la revista *SIC* del Centro Gumilla, sostenían que el sector empresarial había resultado ser, sin duda ninguna, “el interlocutor privilegiado del pacto” y a la hora de tomar las medidas económicas “el sector empresarial ha conseguido ser escuchado en la fijación de las reglas del juego”.

Según esta visión crítica, el pueblo era un convidado de piedra. La falta de canales de participación popular en la discusión nacional y la cooptación partidista de entes como la CTV, alineado con AD, terminarían siendo elementos que alimentaron la necesidad de un cambio significativo en el sistema político, el cual llegó finalmente en 1999 con Hugo Chávez.

Tal como lo señalaba el abogado y profesor venezolano Arístides Torres (1985), el sistema democrático venezolano se había consolidado como un modelo bipartidista, con una alternancia de los dos principales partidos en el poder: AD y COPEI; pero la polarización reflejada por la mayoría de votos que obtenían no era sinónimo de valoración positiva. Estudios de opinión reflejaban tempranamente un malestar social.

Según Torres, se comenzaban a manifestar: “crecientes alusiones de insatisfacción generalizada por parte del electorado, de corrupción, de ineficiencia burocrática y de cuestionamientos de la conducción y manejo partidista”. Había, en realidad, un clima favorable entre grupos académicos, generadores de opinión pública

y un incipiente movimiento ciudadano, para que se discutiera y aprobara un cambio en el sistema político y electoral. En esencia, se planteaba que los “elegidos respondan a los intereses del pueblo y no los intereses de sus partidos”.

La crisis de régimen que viven las élites gobernantes como amenazas a su poder en un proceso de desdemocratización –según señala Tilly (2007)– quedan evidentes en estas respuestas a medias en función de sus intereses y los discursos circulares a las prioridades sustanciales de los ciudadanos y del país, como la industrialización. Era cierto en los años 1980 y sigue siéndolo en los 2010-2020.

Se mira la historia reciente del país, se revisan las deudas sociales –que siguen siendo deudas–, y lo observado evoca el mito de Sísifo. En la mitología griega, su castigo era llevar una piedra hasta la cima de una montaña y, antes de llegar, la piedra volvía a rodar hacia abajo una y otra vez.

En julio de 2020 se dieron a conocer los más recientes datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), sobre la pobreza por falta de ingresos. Los venezolanos que no consumen 2.200 calorías diarias de una canasta de alimentos básicos son pobres extremos. Quiénes logran ingerir estas calorías, pero no pueden costear servicios esenciales como luz eléctrica y transporte, son pobres.

Al cierre del año 2019, según la Encovi 79,3% de los venezolanos vivían en la pobreza extrema y 96,2% eran pobres. En diciembre de 2020, según el seguimiento de más de dos décadas por el CENDAS de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), se necesitaban 206 salarios mínimos para cubrir la canasta básica de una familia promedio (Martínez, 2020, diciembre 18; Salmerón, 2020, julio 7).

Eran precisamente la pobreza y el empobrecimiento dos de los asuntos prioritarios de la agenda social para el país en marzo de 1999, a inicios del gobierno de Hugo Chávez. Poner fin a la pobreza fue una de los grandes estandartes de la Revolución Bolivariana. Después de más de dos décadas, el país no solo sigue signado por la pobreza, sino que esta aumentó de forma dramática en comparación con la última administración del periodo democrático bipartidista (1958-1998).

Al hacer un balance social del año 1998, Mercedes Pulido (1999) resaltaba que un hogar venezolano requería de 2,5 salarios mínimos para poder cubrir sus necesidades básicas, lo cual implicaba que, en hogares pobres, debían trabajar al menos dos personas, algo poco probable por el desempleo (entonces no tan elevado) sino por la propia erosión que en el mercado formal del empleo.

Pulido planteaba una agenda de prioridades: fortalecer la educación básica, mejorar la calidad del empleo, obviamente aumentar el número de puestos de trabajo, afrontar problemas con alta incidencia en la pobreza como el embarazo de adolescentes, generar de forma estable políticas de atención a los más pobres con mecanismos que impidan su dependencia de las dádivas del Estado como forma de vida.

En Venezuela, 22 años después y luego de colosales ingresos fiscales por los altos precios del crudo, estos siguen siendo los problemas prioritarios a afrontar para hacer un país más justo. Como en el mito de Sísifo, pareciera que debemos subir, una y otra vez, la piedra de los problemas sociales por la cuesta sin alcanzar nunca la cima, que sería la erradicación de la pobreza.

El sistema democrático surgido en Venezuela tras la dictadura de Marcos Pérez Jiménez no solo falló en el manejo institucional para hacer genuinamente democrático el modelo, sino que no pudo resolver la desigualdad social. Esto sirvió de pivote para la abrumadora victoria electoral, en diciembre de 1998, de un Hugo Chávez que prometía una Revolución Bolivariana plena de justicia social y de lucha contra la corrupción.

Estas dos banderas del chavismo quedaron sencillamente corroídas con el paso de dos décadas, profundizando la crisis para la cual la piedra de Sísifo nos sirve de símbolo.

La promesa incumplida de Chávez dejó en evidencia que la lucha contra la pobreza no depende solo de la voluntad de un hombre, sino que se necesitan diversas acciones institucionales con carácter multidisciplinario y sostenidas en el tiempo. La experiencia venezolana al iniciarse el siglo XXI deja en evidencia que el reparto de dinero sólo mitiga la situación de pobreza –por un tiempo, mientras el Estado provea–. Una vez que el país cae de nuevo en la espiral de los precios bajos del petróleo, también abruptamente se eleva la pobreza.

Pese a que es un asunto que cíclicamente parece dar vueltas en la vida nacional, no hay evidencias de aprendizaje social ni político en este particular.

Si volvemos la mirada a 1999, al iniciarse la era de Chávez en el poder, Mercedes Pulido cuestionaba que buena parte del debate educativo se centrara en las universidades, cuando la prioridad debía ser la educación primaria, entonces y ahora signada por falta de escuelas (la necesidad de contar con 33.900 aulas nuevas para 1999 según Pulido), la escasez de profesionales de la enseñanza, el abandono del Estado de la educación en zonas marginales urbanas y rurales. Otros asuntos que se

discutían entonces y que siguen siendo una deuda, puesto que no se avanzó en estos años: el turno completo para toda la educación primaria y los 200 días efectivos de clase por cada año escolar.

Cada uno de esos puntos siguen siendo desafíos de nuestra sociedad. En los años de la Revolución Bolivariana de nuevo se enfatizó en la multiplicación de universidades, con proyectos y propuestas de dudosa calidad educativa. Se trató de una respuesta política a la autonomía e independencia que manifestaron instituciones públicas y privadas de educación superior ante el poder político.

Según proyecciones hechas por el estudioso del sistema educativo venezolano Juan Maragall (2017, junio 13), a partir de encuestas aplicadas en el Estado Miranda, medio millón de niños habían abandonado las aulas de clase durante el año escolar 2016-2017. En total, según las estimaciones de Maragall, 1,5 millones de niños y adolescentes están excluidos del sistema escolar en Venezuela. No hay ninguna respuesta oficial a este problema tan importante.

La falta de atención oficial a lo verdaderamente medular de la sociedad quedó en evidencia con esta triste paradoja: mientras se producía tal deserción escolar en 2017, el ministro del sector parecía más ocupado en funciones políticas, ya que se le había designado como jefe de la campaña gubernamental para una segunda ANC que, luego de tres años en funciones, no pudo mostrar ni siquiera un artículo para otra prometida nueva constitución.

Iniciándose el periodo de Chávez en el poder, en 1999, no solo resultaba clara la agenda social prioritaria, también existía claridad en lo que debía abordarse en materia económica. El economista Miguel Ignacio Purroy (1999), por ejemplo, al hacer un balance económico de 1998, se planteaba la necesidad de diversificar los ingresos del país para hacerlo menos dependiente del petróleo. Una caída en los precios del crudo (como ocurría entonces) no solo hacía más vulnerables las finanzas de la nación, sino que terminaba teniendo un impacto adverso en la población.

Se repetía entonces un círculo perverso ante el cual estamos nuevamente cuando transcurre la segunda década del siglo XXI: al recibir menos dólares, el gobierno venezolano contrae más deuda para mantener el ritmo de sus gastos e imprime dinero inorgánico para sostener sus políticas populistas. Nada parece haber cambiado, es la historia del desafío como sociedad que se repite sin cesar en Venezuela, tal cual la piedra que debía cargar Sísifo.



## A LOS QUE NO SE DIO RESPUESTA

Sí, como hemos señalado en capítulos anteriores, 1998 fue la comprobación de que el liderazgo tradicional de Venezuela estaba agotado y sin respuestas ante las demandas del país: los referentes políticos de AD y COPEI lucían extraviados; una mayoría de venezolanos le dio un voto de confianza al *outsider*, uno que anunciaba que vendría a poner orden en el país.

Por otra parte, 1999, una vez que ya era oficial el indiscutible triunfo electoral de Hugo Chávez, fue un año de diagnósticos, propuestas y discusiones. No se trató solo de lo que discutían los diputados de la ANC y aprobaban incluir en la nueva carta magna, sino también en general el ambiente que se respiraba en el país era que comenzaba una nueva etapa, un nuevo ciclo, en el que se enderezarían los entuertos del modelo 1958-1998.

Han pasado más de dos décadas y si algo queda claro es que el chavismo no solo tuvo los recursos económicos – que los tuvo a manos llenas, además de respaldo popular –, sino también que inició diversos proyectos y planes para hacer frente las transformaciones, sencillamente urgentes en algunos sectores.

Profundizar la desdemocratización y la destrucción del tejido social no fue un resultado fortuito; fue una decisión política deliberada. Tomemos la educación, uno de esos temas en los que existía pleno consenso entre todos los actores políticos, al menos en el discurso. Debía invertirse en el sistema educativo para consolidarlo como uno inclusivo y de calidad. En 1999 aquello era un claro desafío. Más de 20 años después, se puede decir inequívocamente que no se le dio respuesta a este desafío que sin duda es mayúsculo para cualquier sociedad.

Como hemos señalado, el año 1999 fue plétórico de revisiones y discusiones de fondo sobre los problemas del país y los desafíos que debían afrontarse para resolverlos. En algunos espacios, como lo era la revista *SIC* del Centro Gumilla, entendieron cabalmente que Venezuela, con el gobierno de Hugo Chávez –iniciado

el 2 de febrero de 1999—, vivía una suerte de punto de inflexión histórica: se iniciaba sin duda una nueva etapa en la vida nacional y era necesario hacer balance de los 40 años anteriores. Cuando se vuelve sobre aquellas discusiones, salta a la vista hoy que Venezuela sigue adoleciendo problemas de fondo; tal vez peor aún, algunas de esas discusiones de entonces sobre cómo afrontar los problemas centrales de nuestro país (incluida la educación) tienen plena vigencia hoy.

Un artículo de Javier Duplá (1999), “Retos Urgentes de la Educación”, hizo una revisión de la segunda mitad de los 1990. Halló que había sido inédita en materia educativa, ya que este tema se había convertido en asunto de discusión de buena parte de la sociedad. Un año antes, se había realizado la Asamblea Nacional de Educación, en enero de 1998, el punto culminante de un proceso que incluyó la consulta a 60.000 personas implicadas en el tema educativo y en el que se terminó emitiendo un Compromiso Educativo Nacional.

En aquel momento Duplá, un jesuita experto en temas educativos, sintetizó seis retos que calificaba de urgentes. El primero sin duda es de una vigencia alarmante: incorporar a los excluidos en el sistema. Los niños sin acceso a la educación formal y los jóvenes sin oficio constituían el principal problema que debía afrontar con urgencia el sistema educativo de Venezuela. Para Duplá, la magnitud del problema lo convertía en un desafío para toda la sociedad y no solo en un asunto del gobierno.

El segundo reto fue planteado así: remodelar el sistema educativo de acuerdo con criterios de justicia y atención a las mayorías. El asunto no es solo reflexivo sino también político y presupuestario ya que, según el autor, era necesario atender la educación preescolar y básica al punto de hacerla la mayor prioridad.

Un desafío que ha estado permanentemente en boca de expertos en educación: extender el año escolar a 200 días efectivos. Ni se alcanzó a fines de los 1990, después de todo el proceso de reflexión que hubo, ni en las más de dos décadas de la llamada Revolución Bolivariana.

Asimismo, Duplá esboza la necesidad de que haya una mayor inversión presupuestaria en educación y que además el manejo del presupuesto en educación sea transparente. Otro reto planteado sigue teniendo vigencia hoy: hacer atractiva la profesión docente, para que “los buenos talentos” se hagan educadores.

Según Duplá, El quinto y el sexto desafío pasaban por contar con una comunidad organizada en torno a la escuela y por la organización de los maestros y profesores para promover discusiones amplias sobre la educación y no exclusivamente para la defensa de las reivindicaciones salariales. A su juicio, plasmado en

1999, era necesario que las organizaciones del sector encabezaran las discusiones sobre la calidad educativa, por ejemplo, y entendieran cabalmente su rol en mejorar la educación en todo sentido.

Este diagnóstico de Duplá a fines del siglo XX tuvo una suerte de paréntesis con el *boom* petrolero del cual disfrutó el chavismo en el poder. Por tanto, como se suele hacer en Venezuela, con dinero se trató de dar respuestas, pero sin enfocarse en la revisión a fondo para sentar unas nuevas bases. Ya con Nicolás Maduro en el poder, Venezuela no solo padecía las falencias de una desdemocratización política e institucional, sino también la crisis humanitaria parecía arroparlo todo. El experto educativo Juan Maragall (2016, noviembre 10) advertía que las carencias alimenticias generalizadas estaban haciendo mella en las escuelas.

Esto nos lleva al planteamiento central de Duplá en 1999. Si bien celebraba la aprobación de una nueva carta magna, este experto sostenía que en educación, más que leyes, se requerían “hombres y mujeres nuevos” que llevaran adelante decisiones realmente innovadoras y que la educación pasara a ser –efectivamente– una prioridad no solo para el Estado sino para el conjunto de la sociedad.

Este desafío no tuvo respuesta, lamentablemente. La destrucción del sistema educativo que ha quedado palpable en Venezuela, en medio de la pandemia por la COVID-19, tendrá repercusiones directas para poder llevar adelante una reconstrucción democrática en Venezuela.



## A modo de epílogo

### LA EROSIÓN DEMOCRÁTICA



#### EN VENEZUELA SEGÚN EL LIBRO *CÓMO MUEREN LAS DEMOCRACIAS*

En diversas ocasiones, tal como lo indicamos al inicio de esta obra, Levitsky y Ziblatt (2018) dan ejemplos sobre el caso de Venezuela a lo largo de su libro. Nos parece pertinente concluir estas páginas con su revisión, junto a nuestra percepción y nuestros comentarios.

Al inicio de *Cómo Mueren las Democracias*, ya se señala el caso de Venezuela con la llegada al poder de Hugo Chávez. Calza en la tesis del libro en dos direcciones: el golpe de Estado clásico ya no es la vía para destruir un sistema democrático; el sistema democrático permite el acceso al poder de figuras no democráticas que, una vez lo detentan, se dedican a destruir al sistema. Es digna de destacar una cita del libro, en específico las palabras de una votante pobre en 1998, en el Estado Barinas: “la democracia está infectada y Chávez es el único antibiótico que tenemos”.

La idea de que la democracia venezolana ya estaba enferma es a nuestro modo de ver determinante. Sin embargo, es un asunto que no se aborda detalladamente por Levitsky y Ziblatt, quienes ponen el peso en lo nefasto que resultó aquel “antibiótico”. Constituye un serio desafío académico y ciudadano colocar en contexto aquella Venezuela previa a Chávez, porque en buena medida es lo que explica al chavismo en su etapa germinal. Ya luego, el prolongado ejercicio del poder con el control de las instituciones que ha caracterizado a Venezuela en el siglo XXI es en sí mismo un modelo de desmantelamiento democrático. En consecuencia, es importante no perder de vista el diagnóstico de “enfermo” que ya tenía el sistema cuando se llegó a las elecciones de 1998; tampoco que la “medicina” por la que optó una mayoría de ciudadanos terminó por liquidar las bases de aquel sistema establecido en 1958.

Los autores diferencian el ejercicio de Chávez en el poder por medio de una suerte de fijación informal de periodos. Por ejemplo, de 1999 a 2002, prevalece una tensión entre un Chávez que sigue promoviendo el ejercicio del voto desde el poder y un ejercicio gubernamental que cada vez más transforma la institucionalidad para adaptarla a sí mismo. “Chávez da sus primeros pasos hacia el autoritarismo en 2003”,

sostienen los autores. Sin embargo, existe bastante evidencia de que en verdad el clímax que vivió el país en 2002-2003, con el golpe de Estado fallido y el paro petrolero, tuvo su origen en una posición intransigente –ya autoritaria– de Chávez en 2001 cuando comenzó a asumir en la práctica funciones legislativas y dictó más de 60 decretos-leyes. Algunos de los mismos incluso contradecían tempranamente el espíritu de la constitución que apenas se había aprobado.

Sí hay un punto de inflexión en el devenir del chavismo en el poder que merecerá ser estudiado a profundidad en otro momento: las elecciones de 2006. Chávez obtuvo entonces un triunfo arrollador en las urnas electorales. Dicha victoria le confería una fachada democrática; pero dio paso a una serie de decisiones de corte autoritario: cese del canal RCTV, política de expropiaciones, Socialismo del Siglo XXI como bandera política y la orden de que todos sus seguidores crearan un partido único, cosa que finalmente no ocurrió. En cambio, nació el PSUV; pero se mantuvieron otras siglas políticas afines al chavismo como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria Para Todos (PPT), Podemos, etc.

El Chávez triunfante de 2006 apuesta a una reforma constitucional en 2007 para concentrar mayor poder y tener un mecanismo de reelecciones indefinidas a la presidencia. Tras su primera derrota electoral en aquel 2007, al ganar la opción referendaria del “no” a dicha reforma, finalmente Chávez apuesta por la enmienda constitucional, votada en 2009. Esta se centró exclusivamente en la reelección indefinida, abriendo además esta posibilidad a prácticamente cualquier cargo de elección popular.

Para Levitsky y Ziblatt, en los casos que analizan, el primer paso para la erosión democrática es la elección. Las democracias se caracterizan por justamente garantizar elecciones libres y justas. Esta puerta ha sido usada por líderes con pretensiones autocráticas para acceder al poder. Se usan las reglas democráticas y justamente estas, que enfatizan la alternancia en el poder entre otros factores, se van desmantelando. Chávez no llegó al poder de forma heroica, ya que su intento de golpe de Estado de 1992 sencillamente fracasó desde el punto de vista militar y estratégico; pero resultó ganador desde el punto de vista simbólico y comunicacional. El Chávez derrotado en las armas termina siendo llevado a la senda electoral por varios de sus consejeros, una vía que no quería transitar, tal como él lo señalara en la extensa entrevista para el libro de Agustín Blanco Muñoz *Habla el Comandante* (1998). Sin embargo, una vez que llega al poder, Chávez construye una épica: su Revolución Bolivariana, como si su ascenso al poder no hubiese sucedido, en verdad, porque el sistema que él iba a socavar le permitió tal ascenso.

Un aspecto abordado reiteradamente por los autores tiene que ver con el carácter paulatino que tienen las medidas conducentes a la destrucción de la democracia. En el caso de Venezuela, por la propia naturaleza teatral e impulsiva de Chávez, se produjeron muchas crisis de impacto público en las que se debatía si estaba en juego la democracia; sin embargo, en general ocurre que este poder autoritario va cambiando leyes, tomando decisiones, cooptando instituciones de forma paulatina y soterrada. Con el paso del tiempo, el poder autocrático se ha ido estableciendo prácticamente ante la mirada impasible de sus ciudadanos.

Para reforzar esta tesis, los autores recurren al caso venezolano. De la encuesta del Latinobarómetro en diversos países, entre ellos en Venezuela, mencionan cómo los entrevistados calificaban sus países en relación a la democracia. Levitsky y Ziblatt recuerdan que, en aquel 2011, ya con una docena de años de Chávez en el poder, 51% de los encuestados venezolanos le asignaron al sistema democrático una muy positiva puntuación de 8, en una escala donde 1 era “nada democrático” y 10 “completamente democrático”. Este ejemplo de los autores en realidad puede estar conectado con otro aspecto que ellos mencionan, pero sin vínculo con este ejemplo: la polarización.

La polarización es una dinámica que generan estos líderes que desmantelan las democracias. La conflictividad social está presente, de forma abierta o no, en todas las sociedades. Un liderazgo democrático, según la visión tradicional, busca “suavizar”, apuesta a generar consensos y atiende aquellas heridas que laceran la convivencia. Por el contrario, un líder con interés en dinamitar la democracia usa esa conflictividad subyacente y la potencia para hacer de la polarización su estandarte principal. El manejo demagógico de la polarización saca las diferencias del campo político y las conecta con un conflicto racial, social o cultural. Sostienen los autores que, tras estudiar diversos casos de quiebre democrático, recabaron suficiente evidencia para sostener que “la polarización extrema puede acabar con la democracia”.

Una revisión hecha por Ángel Álvarez y Francisco José Virtuoso (2012), con datos del Latinobarómetro, dejaba en evidencia la profunda división en Venezuela, fruto de la polarización que potenció el chavismo desde el poder. Dividido en prácticamente dos mitades, el 51% de los venezolanos se manifestaba satisfecho con la democracia y el 49% decía exactamente lo contrario. La escala de grises en las opiniones había desaparecido en comparación con lo que estos expertos observaron en otros países consultados en 2010 por la dicha corporación investigadora de la opinión pública.

La cooptación y la politización del sistema judicial son aspectos identificados por Levitsky y Ziblatt como característica central en el proceso de desmantelar una

democracia: la aniquilación del sistema de pesos y contrapesos constitucionales. Como hemos reseñado en este libro, el sistema judicial venezolano ya estaba seriamente debilitado cuando Chávez llegó al poder y, en su lógica de ejercicio presidencial, le dio el puntapié final. Como recuerdan Soto y Schmidt (2008), en 1999 la ANC no solo se dedicó a redactar una nueva constitución, sino que se erigió en un “suprapoder”.

Entre otras medidas con las que el chavismo comenzaba tempranamente a dismantlar la democracia en Venezuela, debe recordarse que en aquel 1999 se declaró “en emergencia” al sistema judicial, con lo cual se destituyeron a numerosos jueces y se nombraron a otros siguiendo criterios políticos y no sustentados por méritos. Asimismo, se disolvió el Congreso Nacional, que había sido electo en 1998 en unas elecciones limpias y transparentes, al punto que en ellas había sido electo Chávez. Durante buena parte de aquel periodo de transitoriedad, se nombró una comisión legislativa, el Congresillo como se le conoció popularmente, un cuerpo emanado de la ANC con potestades autoasignadas.

Volviendo a las páginas de *Cómo Mueren las Democracias*, además de Chávez y Nicolás Maduro, el nombre de otro político venezolano profusamente mencionado es Rafael Caldera. Los autores responsabilizan a Caldera, como símbolo de la élite política del sistema de 1958, de abrirle la puerta del poder a Chávez. No obstante, no exploran un aspecto muy debatido en Venezuela: el sobreseimiento del entonces presidente al excomandante en 1994, en un proceso judicial no concluido, con lo cual quedaba Chávez sin ningún impedimento político. Para Levitsky y Ziblatt, la responsabilidad de Caldera proviene de antes, de 1992, al no condenar al Chávez golpista, desde un espacio democrático como el Congreso, sino aprovechar aquel momento de crisis institucional para volver a la cresta de la ola política en Venezuela al justificar de algún modo el fallido golpe de Estado del 4 de febrero.

Más adelante, los autores dan un vistazo a un aspecto relacionado con la responsabilidad de Caldera en dinamitar el ya menguado sistema democrático: empeñarse en ser nuevamente candidato presidencial en 1993 (la séptima ocasión en toda su vida) y llegar a la presidencia gracias al “chiripero”, la variopinta alianza que incluyó a tradicionales enemigos del modelo democrático constituido en 1958. El Caldera empecinado en el poder presidencial terminó socavando a su partido COPEI, que era una de las bases del sistema democrático. Con sus repetidas aspiraciones a la presidencia, cortó la posibilidad de que efectivamente se consolidara una generación de relevo en las filas democratacristianas en Venezuela.

Las luces y sombras de Caldera deben analizarse sin apasionamiento. Sin duda es figura fundacional de la democracia en Venezuela junto a Rómulo Betancourt, Raúl

Leoni y Jóvito Villalba; pero asimismo es necesaria la mirada crítica sobre Caldera en su rol de sepulturero de la democracia venezolana. A todo lo anterior se suma su gobierno vacilante (1994-1999), que no dio respuestas a las demandas de cambio que reverberaban en la sociedad venezolana. Esos cinco años terminarían siendo la antesala para el ascenso de Chávez. El segundo gobierno de Caldera le terminó de decir a la sociedad que la élite tradicional no promovería reformas sustantivas en nuestro modelo de sistema democrático y allanó el camino para un *outsider* como lo fue Chávez en 1998.

Un último aspecto relacionado con el libro *Cómo Mueren las Democracias* tiene que ver con la ausencia de una mirada crítica, al menos en el caso de Venezuela, al papel desempeñado por los actores democráticos de oposición. Una vez que Chávez llega al poder, los autores lo muestran como un jugador solitario en la cancha, cosa que no es del todo cierta. La historia política del chavismo, que aún está por escribirse, también debe analizar las acciones y estrategias de los adversarios desde el campo democrático, sus desaciertos y éxitos.

Hacia esa dirección se inclina Smith (2005) cuando analiza la involución que vivió la democracia una vez que Chávez llegó al poder. En particular, le parece relevante el caso del fallido golpe de Estado de abril de 2002. Aquel suceso, que la oposición democrática no condenó de forma tajante, terminó dándole a Chávez una coartada para impulsar su autoritarismo.

Desde entonces, avanzó sin impedimentos en su agenda de desdemocratización de Venezuela.



## Referencias

- Alikhani, B. (2017). Post-Democracy or Processes of De-Democratization? United States Case Study. *Historical Social Research*, 42(4), 189-206. <https://doi.org/10.12759/hsr.42.2017.4.189-206>.
- Almandoz, A. (2020, febrero 6). CAP. Del tranco a la coronación. *Prodavinci*. <https://prodavinci.com/cap-del-tranco-a-la-coronacion/>
- Álvarez, Á. y Virtuoso, F. (2012). *Valoraciones de la democracia en Venezuela y América Latina*. Fundación Centro Gumilla.
- Álvarez, V. (1989). Los principales problemas económicos del nuevo gobierno. *SIC*, 52(511), 28-30.
- Arenas, N. (2005). Populismo de otrora y de ahora. *Nueva Sociedad* (200), 38-50.
- Arrieta, J. I. (1976). Orientación del trabajo y del ingreso. *SIC*, 39(389), 398-400.
- Aveledo, G. (2020, noviembre 8). Partidos políticos modernos: surgimiento, auge y declinación en la Venezuela del siglo XX. *Prodavinci*. <https://prodavinci.com/partidos-politicos-modernos-surgimiento-auge-y-declinacion-en-la-venezuela-del-siglo-xx/>
- Balza G., R. (2010). Menos poder para la gente. *SIC*, 73(727), 256-260.
- Blanco, Agustín (1998). *Habla el comandante*. Fundación Cátedra Pío Tamayo.
- Bisbal, M. y Nicodemo, P. (1995). Frente a la cotidianidad de la gente. *SIC*, 58(577), 305-308.
- Boon, Lisseth (2016, abril 3). Cruz Weffer: el general chavista que desembarcó en un paraíso fiscal. *Runrunes*. <https://runrun.es/investigacion/255505/cruz-waffer-el-general-chavista-que-desembarco-en-un-paraiso-fiscal/>
- Briceño L., R. (2021, enero 24). Siglo XX Venezolano: Un siglo de inclusión social. *Prodavinci*. <https://prodavinci.com/un-siglo-de-inclusion-social/>
- Cañizález, A. (1996). Venezuela: Adiós a las excusas. *Nueva Sociedad* (143), 15-19.

- Castillo, I. (1975). El Tablazo: Prensa, corrupción e intereses. *SIC*, 38(371), 22-23.
- Centro Gumilla (1978a). Editorial: Año electoral. *SIC*, 41(401), 9-10.
- \_\_\_\_\_ (1978b). Editorial: La justicia penal: otro reto para el nuevo gobierno. *SIC*, 41(410), 445.
- \_\_\_\_\_ (1980). Editorial: Bajo el signo de la improvisación. *SIC*, 43(423), 99-100.
- \_\_\_\_\_ (1983). Editorial: ¿Quién pagará la crisis? *SIC*, 46(453), 99-100.
- \_\_\_\_\_ (1988). Editorial: Las dos Venezuelas. *SIC*, 51(502), 52-53.
- \_\_\_\_\_ (1998a). Editorial: Las razones de los chavistas. *SIC*, 61(605), 196.
- \_\_\_\_\_ (1998b). Editorial: Hay un sacudón en marcha. *SIC*, 61(608), 338-339.
- \_\_\_\_\_ (2003). Editorial: El 4D: tiempo para el consenso. *SIC*, 69(690), 438-439.
- \_\_\_\_\_ (2010). Editorial: Una alternativa para Venezuela. *SIC*, 73(727), 250-251.
- Conferencia Episcopal Venezolana, CEV (1980). Exhortación del episcopado venezolano. Cuaresma de 1980. *SIC*, 43(423), 132-134.
- \_\_\_\_\_ (1988). A los 30 años del 23 de enero de 1958. *SIC*, 51(502), 86-91.
- Cuevas, M. (2004). Derecho a revocar y derecho al ejercicio del cargo. *SIC*, 67(663), 103-105.
- Delpino, J. J. (1988). Mensaje de la CTV. *SIC*, 51(502), 92-93.
- Duplá, J. (1999). Retos urgentes de la educación. *SIC*, 62(614), 148-150.
- Elechiguerra, J. (1978). Justicia penal y realidad diaria. *SIC*, 41(410), 455-457.
- Espinasa, R. (1996). ¿Es necesario un ajuste económico? *SIC*, 59(584), 148-150.
- Galizia, G. (1998). El nuevo paisaje político. *SIC*, 61(608), 362-364.
- García S., C. (2016, septiembre 27). ¿Cómo fue el Referendo Revocatorio Presidencial de 2004? [1 de 3]. *Prodavinci*. <https://historico.prodavinci.com/2016/09/27/actualidad/como-fue-el-referendo-revocatorio-presidencial-de-2004-1-de-3-por-carlos-garcia-soto/>
- \_\_\_\_\_ (2018, enero 17). Venezuela, 1998-2018: algunas preguntas fundamentales. *Prodavinci*. <https://prodavinci.com/venezuela-1998-2018-algunas-preguntas-fundamentales/>
- Giusti, R. (1999, mayo 30). El país se muda para el sur. *El Universal Digital* <http://76.74.186.188/NOTICIA2.HTM>.
- Gómez C., L. (1999). ¿Qué hemos aprendido o desaprendido en estos cuarenta años?: instituciones, ciudadanía y sociedad civil. *SIC*, 62(618), 343-345.

- Gómez G., E. (1978). El problema de la prisión. *SIC*, 41(410), 452-454.
- Gómez, S. (2021, marzo 12). Lo que implica la Ley de Ciudades Comunales, una amenaza para la autonomía municipal. *El Diario*. <https://eldiario.com/2021/03/12/ley-de-ciudades-comunales-aprobo-regimen-venezolano/>
- Guerra, J. (2018, abril 6). ¿Cómo detener la hiperinflación en Venezuela? *Prodavinci*. <https://prodavinci.com/como-detener-la-hiperinflacion-en-venezuela/>
- Hernández, T. (1978). La ley de vagos y maleantes y el sistema jurídico venezolano. *SIC*, 41(410), 460-462.
- Hernández, C. (2016, agosto 26). Venezuela y el Fondo Monetario Internacional [2 de 2]. *Prodavinci*. <https://historico.prodavinci.com/2016/08/26/actualidad/venezuela-y-el-fondo-monetario-internacional-2-de-2-por-carlos-hernandez-delfino>
- Hernández, J. I. (2019, enero 3). La muerte de una Constitución (veinte años después). *Prodavinci*. <https://prodavinci.com/la-muerte-de-una-constitucion-veinte-anos-despues/>
- Kapstein, E. y Converse, N. (2008). Why democracies fail. *Journal of Democracy*, 19(4), 57-68.
- Lander, L. y López M., M. (1999). Venezuela. La victoria de Chávez. El Polo Patriótico en las elecciones de 1998. *Nueva Sociedad* (160), 4-19.
- \_\_\_\_\_ (2000). La Popularidad de Chávez. ¿Base para un proyecto popular? *Cuestiones Políticas*, 16(24), 8-21. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/14174>
- Levitsky, S. y Ziblatt, D. (2018). *Cómo mueren las democracias*. Ariel.
- Linares, L. (1988). ¿Vale la pena votar en diciembre? *SIC*, 51(509), 388-390.
- López M., M. (2008). ¿Hacia dónde va Venezuela? Elementos para comprender el proceso bolivariano actual. *SIC*, 71(710), 436-440.
- \_\_\_\_\_ (2011). Sobre la democracia participativa. *SIC*, 74(740), 409-410.
- \_\_\_\_\_ (2018). Socialismo y comunas en Venezuela. *Nueva Sociedad* (274) 59-70.
- Maragall, J. (2016, noviembre 10). La crisis humanitaria en nuestras escuelas: resultados de una encuesta. *Prodavinci*. <https://historico.prodavinci.com/2016/11/10/actualidad/la-crisis-humanitaria-en-nuestras-escuelas-resultados-de-una-encuesta-por-juan-maragall/>

- \_\_\_\_\_ (2017, junio 13). 10.000 niños han abandonado las escuelas este año: ¿Qué está pasando? *Prodavinci*. <https://historico.prodavinci.com/2017/06/13/actualidad/10-000-ninos-han-abandonado-las-escuelas-este-ano-que-esta-pasando-por-juan-maragall/>
- Martínez G., F. (1974). Los millones del presupuesto. *SIC*, 37(370), 446-449.
- Martínez, L. (2020, diciembre 18). Cendas FVM: Se requieren 206 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria. *Analítica*. <https://www.analitica.com/economia/cendas-fvm-se-requieren-206-salarios-minimos-para-cubrir-la-canasta-alimentaria/>
- Martínez M., M. Á. (2016, octubre 31). Un fragmento de “Apaciguamiento: el Referéndum Revocatorio y la consolidación de la Revolución Bolivariana”. *Prodavinci*. <https://historico.prodavinci.com/2016/10/31/actualidad/un-fragmento-de-apaciguamiento-el-referendum-revocatorio-y-la-consolidacion-de-la-revolucion-bolivariana/>
- Méndez, D. (1983). Las medidas cambiarias. *SIC*, 46(453), 101-103.
- Monedero, J. C. (2012). Venezuela: el discurso mágico de una revolución particular. En *Actas del XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles*, Madrid, España. (pp. 558-571). HAL SHS <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00874619>
- Negrón, M. (2000). El eje Orinoco-Apure: una visión reaccionaria del desarrollo. *SIC*, 63(624), 154-156.
- \_\_\_\_\_ (2001). ¿Y qué se hizo del Eje Orinoco-Apure? *Analítica*. <https://www.analitica.com/economia/y-que-se-hizo-del-eje-orinoco-apure/>
- Oliveros, A. y Gagliardi, A. (2017, mayo 1). Nicolás Maduro: ¿el Jaime Lusinchi socialista? *Prodavinci*. <https://historico.prodavinci.com/blogs/nicolas-maduro-el-jaime-lusinchi-socialista-por-asdrubal-oliveros-y-armando-gagliardi/>
- Penfold, M. (2000). Adiós al puntofijismo. *SIC*, 63(626), 256-260.
- Peraza, A. (2006). Evaluación de la campaña. *SIC*, 69(690), 438-439.
- Peraza C., J. (1996). El plan de ajuste económico del gobierno. *SIC*, 59(584), 151-153.
- Pérez A., J. P. (1976). Nacionalización petrolera. *SIC*, 39(390), 442-445.
- Plaza, E. (1978). ¿Por qué el 23 de enero? *SIC*, 41(401), 11-14.

- Ponce, C. (1995). Situación del Poder Judicial y la justicia de paz. *SIC*, 58(577), 294-296.
- Prieto, H. (2019, octubre 6). Entrevista a Luis Zambrano Sequín: “El Estado venezolano está condenado a ser pobre”. *Prodavinci*. <https://prodavinci.com/luis-zambrano-sequin-el-estado-venezolano-esta-condenado-a-ser-pobre/>
- \_\_\_\_\_ (2020, junio 7). Entrevista a Luis Gómez Calcaño: “Una solución provisoria se volvió permanente”. *Prodavinci*. <https://prodavinci.com/luis-gomez-calcano-una-solucion-provisoria-se-olvio-permanente>
- Pulido, M. (1999). Balance social 1998. *SIC*, 62(612), 52-55.
- Purroy, M. I. (1980). Balance de un año. *SIC*, 43(423), 101-102.
- \_\_\_\_\_ (1983). El torpe hundimiento del bolívar. *SIC*, 46(454), 161-163.
- \_\_\_\_\_ (1984). Más gobierno, menos pacto. *SIC*, 47(464), 163-164.
- \_\_\_\_\_ (1999). Balance económico 1998, perspectivas 1999. *SIC*, 62(611), 4-9.
- Ramos, A. (2007). Venezuela: las elecciones presidenciales de 2006. Des élections pas comme les autres. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.3446>.
- Rangel, J. V. (1975). Debate sobre corrupción administrativa. *SIC*, 38(371), 41-46.
- Rodríguez G., C. (1975). Debate sobre corrupción administrativa. *SIC*, 38(371), 47-48.
- Romero, J. (2007). Las elecciones presidenciales en Venezuela 2006. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.3900>.
- Salmerón, V. (2013, noviembre 12). De la euforia al Viernes Negro, un fragmento de Petróleo y Desmadre. *Prodavinci*. <https://historico.prodavinci.com/2013/11/12/actualidad/de-la-euforia-al-viernes-negro-un-fragmento-de-petroleo-y-desmadre-de-victor-salmeron/>
- \_\_\_\_\_ (2014, septiembre 25). Entrevista a Héctor Silva Michelena: “La comuna es una sociedad de súbditos”. *Prodavinci*. <https://historico.prodavinci.com/2014/09/25/actualidad/la-comuna-es-una-sociedad-de-subditos-entrevista-a-hector-silva-michelena-por-victor-salmeron/>
- \_\_\_\_\_ (2017). Entrevista a Alejandro Gutiérrez: “Creían que todo lo podían resolver con importaciones”. *Prodavinci*. <https://prodavinci.com/especiales/el-hambre-y-los-dias/entrevista-gutierrez.html>

- \_\_\_\_\_ (2020, julio 7). Encovi 2019-2020: ¿Qué nos dice esta radiografía sobre la calidad de vida de los venezolanos? *Prodavinci*. <https://prodavinci.com/encovi-2019-2020-que-nos-dice-esta-radiografia-sobre-la-calidad-de-vida-de-los-venezolanos/>
- Sermeño, Á. (2021). Desdemocratización y autocracias. *Proceso*, 2(68), 8. [https://noticias.uca.edu.sv/uploads/texto\\_7372/file/PDF-775005-proceso-68.pdf](https://noticias.uca.edu.sv/uploads/texto_7372/file/PDF-775005-proceso-68.pdf)
- Smith, P. (2005). *Democracy in Latin America*. Oxford University Press.
- Sonntag, H. (1989). Venezuela: La vuelta de Carlos Andrés Pérez. *Nueva Sociedad* (99), 18-23.
- Sosa, A. (1978). Alternativas históricas del 23 de enero. *SIC*, 41(401), 15-17.
- \_\_\_\_\_ (1988a). ¿Tiene futuro nuestra democracia? *SIC*, 51(502), 54-56.
- \_\_\_\_\_ (1988b). No cambiemos votos por baratijas. *SIC*, 51(509), 391-393.
- \_\_\_\_\_ (1998). Transición y Constituyente: después de las elecciones. *SIC*, 61(608), 350-353.
- \_\_\_\_\_ (2003). La coyuntura política: trapiche, historia y futuro. *SIC*, 66(655), 211-220.
- Soto, Á. y Schmidt, P. (2008). *Las frágiles democracias latinoamericanas*. Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina (CADAL) y Atlas Economic Research Foundation.
- Straka, T. (2017). Leer el chavismo. Continuidades y rupturas con la historia venezolana. *Nueva Sociedad* (268), 77-86.
- \_\_\_\_\_ (2019, noviembre 4). Cesarismo democrático: la victoriosa derrota de Vallenilla Lanz. *Prodavinci*. <https://prodavinci.com/cesarismo-democratico-la-victoriosa-derrota-de-vallenilla-lanz/>
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Cambridge University Press.
- Torres, A. (1985). Fe y desencanto democrático en Venezuela. *Nueva Sociedad* (77), 52-64.
- Trigo, P. (1999). Proceso constituyente de una democracia popular. *SIC*, 62(615), 196-199.
- Ugalde, L. (1974). Panorama político. *SIC*, 37(370), 450-452.
- \_\_\_\_\_ (1976). Gasto público y trabajo creador. *SIC*, 39(389), 395-397.

- Vallès, J. M. (2013, diciembre 12). Desdemocratización. *El País*. [https://elpais.com/ccaa/2013/12/12/catalunya/1386875888\\_818273.html](https://elpais.com/ccaa/2013/12/12/catalunya/1386875888_818273.html)
- Velásquez, R. J. (2005). *Memorias del Siglo XX*. Biblioteca Últimas Noticias.
- Vilda, C. (1974). No hay navidad en Caucagüita. *SIC*, 37(370), 443-445.
- Virtuoso, J. F. (1998a). AD y Copei cambian para no cambiar. *SIC*, 61(605), 210-212.
- \_\_\_\_\_ (1998b). Viaje al fondo del pragmatismo. *SIC*, 61(606), 260-261.
- \_\_\_\_\_ (2000). A la Revolución le hace falta política. *SIC*, 63(626), 251-252.
- \_\_\_\_\_ (2004). Construir la oposición. *SIC*, 67(663), 100-102.
- Welp, Y. (2020). La democracia y el declive de las élites. *Nueva Sociedad* (290), 59-68.
- Zambrano S., L. (1998). La situación económica venezolana: shock, recesión y ajuste. *SIC*, 61(605), 218-219.



Este ejemplar se terminó de editar  
en Caracas, en julio de 2022.  
Para su diseño se utilizó la tipografía  
Adobe Garamond Pro a 10 pts.  
Ha sido impreso sobre papel  
EnzoCreamy 60 grs. La edición consta  
de ejemplares, impresos y  
encuadernados en los talleres de  
Gráficas Lauki, C.A.

